



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

1. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AGUAD

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Como otras veces, vengo a esta sesión dispuesto a trabajar por el autoabastecimiento energético, objetivo que no comparte el secretario de Energía, Daniel Cameron. No me es ajeno lo que suscita YPF entre los argentinos. Con el mismo énfasis, no me rindo ante este reiterado chantaje emocional, montado sobre el significado actual de esa sigla emblemática. YPF produce el 33 % del petróleo y el 23 % del gas. Abordemos con inteligencia uno de los temas nacionales estratégicos.

El general Enrique Mosconi, creador de esa nave insignia, establecía los presupuestos y limitaciones del estatismo. En 1928, en la universidad de México señaló: "Conocidas son las desventajas que el monopolio estatal encierra, siendo sus características la falta de competencia, la frondosidad administrativa, la pesadez burocrática y el encarecimiento de la producción, todo lo cual conduce a un deficiente servicio público, pudiendo llegar a convertirse en una verdadera calamidad si el comité político llega a ejercer influencia en la marcha de la organización." Todos sabemos cómo funcionó YPF durante los gobiernos de Alvear, Yrigoyen, Frondizi, Illia y Alfonsín, conducida por aquel patriota, por Arturo Sábato, Facundo Suárez y Daniel Montamat, por nombrar los más destacados; también como funcionó con Isabel Perón, cuando se argentinizaron los surtidores y durante el proceso, cuando se la utilizó para contraer deuda externa. Nunca más oportuna la expresión del creador de la China pujante "No importa que el gato sea blanco o negro sino que cace ratones". El actual gigante asiático había pasado medio siglo anclado en el atraso por creer que importaba que el gato fuera rojo, aunque no cazara ratones.

Durante seis años he planteado en este recinto la caída de la producción de gas y petróleo y pérdida de reservas, (20 % en petróleo y 50 % en gas). Tal declinación siempre fue negada por los que de pronto la descubren. Lo hacen ahora porque la importación de U\$S 12.000 millones resulta letal para este modelo y no tienen las divisas suficientes. Se quedaron sin caja. La fuga de U\$S 64.000 millones y el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos (pese a la extraordinaria cotización de la soja), son datos de la realidad, visibles desde hace mucho tiempo, cuando se descalificaban nuestras advertencias.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Si les interesara la exploración y explotación de hidrocarburos no habrían fomentado el vaciamiento de YPF con la pérdida de U\$S 200.000 millones de reservas y la inacción de ENARSA, para asociarse con otras empresas en la búsqueda en la plataforma marítima no concesionada. Les recuerdo que cuando crearon ENARSA esgrimieron los mismos argumentos que hoy. ¿Seguirán mañana con las generadoras de electricidad en estado de quiebra?

Llegamos a esta situación por una política energética que no incentivó la producción, desalentó la exploración y premió la importación de fuel oil, gas y GNL. No se explica de otra manera pagar al importador, SEIS veces lo que se paga al operador local. ¿Cuál fue el negocio de destinar millones de dólares a la importación mientras se los negaba a los locales? ¿Eso era defender lo nacional o era obra de otro gobierno? En ese marco, pasamos de producir 46 millones de metros cúbicos a 33 millones y durante 107 meses se mantuvo la tendencia declinante (con YPF en manos de Repsol y luego con socios argentinos). Nunca pudimos debatir una política y un plan para cambiar el rumbo. La producción de gas, desde 2004, disminuyó de 52 millones de metros cúbicos a 46 millones. Durante las administraciones kirchneristas, la importación de energía creció 2.000 % y no se amplió la capacidad de refinado.

La mayoría de las empresas operadoras han disminuido su producción. El fracaso de la política oficial es contundente: crecían nuestras reservas y producíamos más petróleo y gas con el barril a U\$S 18 dólares que cuando cotiza a U\$S 102.

Por ello, creo que el debate necesario es sobre una política energética que resulta causante del grave cuadro que afecta al desarrollo del país, porque sin energía abundante no hay industrias, ni agregado de valor, ni creación de empleo genuino, ni combustible en los surtidores, ni gasoil para las cosechas, ni electricidad en verano, ni gas en invierno y las garrafas serán caras para los más humildes. Ya lo comprobaremos pronto. Con un déficit fiscal de \$ 35.000 millones, crecimiento a menos de la mitad que el año pasado, caída en la demanda laboral y 25% de inflación, estamos ante un preocupante escenario económico pese a la extraordinaria oportunidad que nos brinda el mundo, inclusive para extraer gas y petróleo. Construyamos el futuro en vez de confrontar entre cortinas de humo que nos distraen.

Creo en un Estado eficiente que impulse un programa con prioridades que estimulen la iniciativa innovadora a asumir riesgos y ganar competitividad. Creo necesario contar con una empresa que opere en el mercado y pague a los contratistas por el crudo producido. A toda empresa concesionaria que incumple sus contratos y planes de negocios se le deben revocar sus áreas, situación que no se contempló en las prórrogas que varias provincias otorgaron hace poco a quienes no cumplieron sus compromisos.

Sepa el país que aquí no estamos tratando la necesaria ley de hidrocarburos; no se presenta un plan de negocios ni se prioriza la exploración en sus enunciados. Se trata de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

la expropiación de una empresa a la que se le atribuyen todos los males, que fueron consentidos por quienes ahora la objetan exculpándose. La empresa y el gobierno son corresponsables de lo denunciado. La auditoría sobre la empresa es tan necesaria como la investigación sobre los funcionarios que no controlaron, por incompetencia o corrupción.

Estamos debatiendo y votando a ciegas, sin información para el caso. Eso se llama librar "un cheque en blanco."

Para mí la seguridad jurídica no es "horrible" sino una pauta de convivencia civilizada. Pretendo representar a los argentinos que creen en la legalidad para limitar atropellos, otorgan valor a la confianza para asumir riesgos como la inversión productiva, creen que la previsibilidad moviliza voluntades y que la propiedad privada se resguarda con la Constitución y las leyes. Las formas, informan a propios y extraños sobre el funcionamiento del Estado de derecho en el país. Este proyecto y el DNU que surge del mismo, violentan garantías y tratados internacionales.

Estamos utilizando una noble causa para ocultar un desastre y haciendo mal lo que se debe hacer bien para revertirlo. Se genera una innecesaria percepción de confiscación, que no resulta indiferente para cualquier futuro inversor. Me refiero a los emprendedores, grandes o chicos, nacionales o extranjeros que observan este trato, este cambio de reglas de juego y el acompañamiento que esta iniciativa logra en el Congreso, donde se deben plasmar leyes soberanas y razonables. No creo que lastimar la confianza y romper las reglas de juego sea una política de Estado. Este recinto no es una jaula de papagayos a los que se concede sólo el derecho de legitimar el relato oficialista, hasta que se apaga la luz sin tomar nota de nada.

Apunto a esta cuestión porque también hace seis años que advierto sobre la falta de inversión productiva en los segmentos más dinámicos.

Pretender sostener un modelo de inclusión sin crear riqueza significó: una presión impositiva del 30% del PBI, tomar los fondos de los jubilados para financiar al gobierno, disponer de las reservas del BCRA para gastos corrientes, imponer el impuesto inflacionario del 25% a los más pobres, perder 12 millones de cabezas de vacunos y descapitalizar nuestras fuentes de energía. El populismo sale caro. Es el atajo de creer que el país puede crecer y el pueblo vivir bien en medio del subdesarrollo. Creer que el precio puede estar por debajo de los costos y que sin utilidades se puede reinvertir es tan pernicioso, como utilizar al salario como variable a ajuste para controlar la inflación. Se llega por el populismo al mismo lugar que con el neoliberalismo-aperturista. Menem lo hizo, aumentando el endeudamiento externo y entregando irresponsablemente YPF. También por problemas de caja y también con el aplauso de los mismos que aplauden ahora sin ponderar consecuencias.

Allí comienza la objeción a este proyecto que antepone el instrumento a la política que debe servir y afecta a todo el conjunto por la imprevisibilidad que generan iniciativas como esta ley.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Estamos sextos en Latinoamérica en captación de IED de calidad con alta tecnología. Mientras Uruguay se financia al 3% y obtiene el grado Inversor, nuestra tasa de riesgo supera los 1.000 puntos, 800 más que Brasil y por arriba de Venezuela. Aun antes de esta iniciativa, entre 130 países relevados, estábamos entre los últimos respecto a los derechos de propiedad.

Para crecer al 5% necesitamos una inversión de 25 puntos del PBI, actualmente es menos de 19% y de baja calidad. En el primer semestre de 2011, la inversión (básicamente en construcción) crecía al 16 %; en el primer trimestre de 2012, aún antes de esta iniciativa crece al 6%. Ante este desplome y con esta ley: ¿se crea confianza para aumentar la inversión con alta tecnología y de largo plazo?

Votar un proyecto que no resuelve el problema y lo puede agravar por sus consecuencias es un error estratégico que no voy a acompañar. ¿Cómo denunciar mañana lo que hoy se apoya? ¿Creen que capturando las utilidades giradas por Repsol, (U\$S 1.200 millones se podrán afrontar los U\$S 6.000 millones del déficit de la balanza energética y a su vez aumentar la inversión necesaria (U\$S 6 a 8.000 millones) que anualmente se requiere para no seguir cayendo en producción y perdiendo reservas? ¿Vamos a usar a YPF para pagar la cuenta de importación? Los recursos públicos, que resultan insuficientes para afrontar la inversión en salud, educación y vivienda, ¿serán comprometidos en un sector donde se pueden atraer inversiones privadas intensivas que hay disponibles?

¿Quién capitalizará YPF? ¿El Estado que está en déficit? ¿Las provincias asfixiadas para cumplir sus obligaciones? ¿El endeudamiento en el mercado nos exigirá el sobre costo de nuestro aislamiento expresado en la OMC?

¿Quiénes y en qué condiciones se asociarán a esta empresa, manejada sin ningún control, aunque funcionarios públicos manejen fondos públicos y que son los mismos que generaron el actual estado de situación? ¿Lo harán con las grandes transnacionales, incluidas las de los británicos? Si están dispuestos a ello ¿por qué no lo hicieron evitando llegar a esta grave situación? Hasta ahora se pagó con precios a la importación lo que no se quiso pagar como costo de producción. Ahora se desconocen los resultados y se dispara hacia no sabemos qué horizonte. A mayor riesgo se nos exigirán mayores tasas de retorno por el riesgo imperante. Ello implica mayores subsidios o tarifas más elevadas, sin garantizar abastecimiento en las estaciones ni resolver, por varios años, el abultado costo de importar lo que tenemos debajo de nuestros pies.

Sin una política adecuada, es improbable que los resultados sean promisorios y el palabrerío "nacionalista" quedaría al desnudo.

Después de larga experiencia lidiando con estas consignas declamatorias, un viejo estadista dijo "Estos nacionalistas de opereta han hecho tanto mal al país con sus estupideces como los colonialistas con sus vivezas." Gral. Juan Perón en el libro La fuerza es el derecho de las bestias.

Necesitamos menos pleitos, que como éste nos costarán muy caro y más inversiones; más acuerdos perdurables y menos agitación.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Bajo ningún pretexto se debería brindar cobertura política a este proyecto. Soy consciente del costo político que ello implica, pero en una república democrática no se deben acomodar las convicciones al influjo del poder ni acomodar sus opiniones según manden las encuestas. Algunas veces, en política, la soledad es una obligación. Espero haber honrado el contrato con quienes me eligieron para ejercer el debido control y cuando no pueda ejercerlo, como en este caso, que no se silencien nuestras voces.

Los recursos hidrocarburíferos actualmente son argentinos y la soberanía, en esta materia, es el autoabastecimiento que esta ley complica por el daño que genera. Por ello, no voy a acompañar con mi voto al proyecto en tratamiento.

3. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BURYAILE

Fundamentos del apoyo en general del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Como ya he manifestado hubiese deseado que el debate de este proyecto que considero fundamental para el futuro de nuestro país se hubiese dado de otra forma.

Así como sucedió al tratarse el proyecto de la “Resolución 125”, cuando en la largas jornadas las comisiones de este cuerpo escucharon las opiniones de funcionarios, organizaciones, productores, trabajadores y de todas las expresiones interesadas, o con mayor modestia como lo ocurrido hace pocas semanas en el Senado de la Nación cuando el ministro de Planificación y el viceministro de Economía asistieron para explicar y defender el proyecto que hoy tratamos.

Lamentablemente, no hemos tenido la oportunidad de escuchar y hacer preguntas y por eso tenemos dudas que no hemos podido resolver, por ejemplo:

CRISIS ENERGÉTICA

1- ¿Por qué se negó sistemáticamente la existencia de una crisis energética?

En el mes de abril de 2009, los 8 ex secretarios de Energía presentaron un informe donde advertían sobre la “decadencia productiva persistente” y el “futuro incierto” del sector energético. En ese documento se alertaba sobre el peligro de que la Argentina perdiera el autoabastecimiento conseguido en la década del 80. Pasamos de exportar un



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

13% de la producción nacional de gas a importar el 14% de la demanda abastecida. Dejamos de ser autosuficientes.

No se dio cuenta el gobierno de que el sector energético presenta un creciente desbalance entre oferta y demanda, que nos llevó a importar en el año 2011 por un valor de u\$9.300 millones, convirtiendo por primera vez en 15 años el saldo comercial de hidrocarburos en negativo (U\$3mil millones), cuando desde 2006 la producción de gas (-10%) y de petróleo (-18%) cae sistemáticamente, a pesar de Repsol.

Todas estas y muchas otras advertencias fueron desoídas y descalificadas por el gobierno, que ahora dice que desconocía la gravedad de la situación.

Si ni siquiera se asume la crisis energética, ¿cómo pretenden solucionarla?

2- ¿Por qué sigue Cameron en su cargo?

El principal negador de la crisis energética ha sido el secretario Cameron. Año tras año en los debates de presupuesto ha venido a decirnos a los diputados y senadores que la crisis no existía y que la producción de energía crecía por encima de las necesidades.

Está claro que se equivocó y que no está a la altura de los desafíos que enfrenta nuestro país en este momento.

Distribución de dividendos a costa de desinversión. avalado por el Estado.

Como todos sabemos y ha reconocido el gobierno, hoy atravesamos una grave crisis energética. Entonces, ¿por qué a partir del año 2008 se obligó a YPF, en la cláusula 2 del contrato firmado entre REPSOL y el grupo Petersen, a descapitalizarse, distribuyendo el 90% de las ganancias, lo que equivale a más de 21.600 millones de pesos? ¿Por qué estas ganancias no fueron utilizadas para realizar inversiones (exploración, explotación) que mitiguen la caída de la producción de hidrocarburos que comenzó en 2006 y se acentuó en el 2008, terminando hoy con una balanza comercial negativa generada por la importación de gas?

Todo esto fue avalado por el gobierno nacional que incluso promovió la firma de este contrato.

En el año 2011, el Estado nacional transfirió a YPF más de 600 millones de pesos.

- Supongamos que sólo nos interesa analizar el 30% de la producción de petróleo, es decir YPF, y si es cierto que YPF no cumplió con sus obligaciones en la concesión, ¿por qué entonces el Estado argentino no le quitó las concesiones de explotación y exploración como lo estipula la ley vigente?

Que dice que "son causales del cese de la concesión: "Incumplimiento sustancial e



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación, inversiones, trabajos o ventajas especiales”.

Y "Al caducar la concesión, la misma revierte plenamente al Estado" (sin costo alguno) "Anulado, caducado o extinguido un permiso o concesión revertirán al Estado las áreas respectivas con todas las mejoras, instalaciones, pozos y demás elementos que el titular de dicho permiso o concesión haya afectado al ejercicio de su respectiva actividad...”.

Según lo claramente expresado por los funcionarios nacionales, estos presupuestos están dados y los incumplimientos son graves.

EXPROPIACIÓN “NACIONALIZACIÓN”

1- ¿Por qué se expropia sólo YPF y no las demás empresas que operan en el país?

El artículo 1° del proyecto dice: “Declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la REPÚBLICA ARGENTINA el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.”

Si la producción de hidrocarburos y el autoabastecimiento son objetivo prioritario, ¿por qué sólo se toma el control de YPF que representa un tercio de la producción? ¿Los otros dos tercios de las empresas tuvieron una conducta distinta? ¿Produjeron más, mejor, más barato?

2- ¿Por qué sólo el 51% de REPSOL?

¿Cuál es la diferencia entre los accionistas que justifica esta decisión?

El grupo argentino que tiene participación accionaria del 25.47% en la empresa y a su vez es el encargado del management desde su ingreso a la compañía en el año 2007, con lo cual, es tan responsable de la situación actual como REPSOL, entonces ¿por qué no se expropiaran esas acciones también?

La extensa exposición sobre la historia y el alto valor simbólico de YPF para los argentinos, que seguramente todos compartimos, hecha por el viceministro Kicillof no responde esta pregunta.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Y además ha intentado justificar la decisión del gobierno utilizando datos para señalar que la posición de YPF en el sector energético es absolutamente determinante para la crisis energética.

Sin embargo, los datos de la propia Secretaría de Energía son diferentes, ya que indican que esta empresa (YPF) explica sólo 1/3 del total de la producción de hidrocarburos de nuestro país. Y entonces me pregunto, ¿el 70% restante no es determinante de la caída de la producción y de la crisis energética?

Paquete accionario antes de la expropiación: REPSOL, 57,43%; Cotiza en Bolsa, 17,10% y Grupo Petersen, 25,46%.

3- Si este gobierno fracasó en su intento de gestionar una empresa como ENARSA, ¿qué garantías nos pueden dar de que en este caso va a ser exitoso?

QUIÉN DIRIGE YPF

1. ¿Quien dirige YPF? ¿La dirige Repsol, como afirmó el viceministro Kicillof? ¿Ó la dirige el grupo Petersen (Eskenazi), como dijo la presidente cuando promovió la compra por parte de este grupo del paquete accionario del 25%?

El viceministro Axel Kicillof textualmente dijo en el Senado: “la expropiación se dirige hacia quien tuvo la responsabilidad directa e inmediata de la dirección de la empresa...”. Pero todos sabemos que quien tiene el managment de la empresa es Sebastián.

¿Cuándo Eskenazi dejó de ser Sebastián y cuándo Antonio comenzó a ser Brufau?

¿Cómo compró el Grupo Eskenazi?

Hasta donde sabemos el Grupo Petersen, conducido por la familia Eskenazi, adquirió entre los años 2008 y 2011, el 25,46% de la participación accionaria de YPF si invertir un centavo de capital propio.

Con esta situación que es inédita en el mundo de los negocios, y sin ninguna experiencia previa en el sector de hidrocarburos, colocaron al señor Sebastián Eskenazi como CEO de la empresa, a sus hermanos Matías y Ezequiel como miembros del directorio y al presidente del grupo, Enrique Eskenazi, como vicepresidente de YPF.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Todo esto se hizo con conocimiento del gobierno y fue motivo de beneplácito público por parte de la propia presidente de la Nación.

La compra de las acciones se hizo en dos partes:

- una primera compra del 14,9 % del paquete a Repsol por un valor estipulado de 2.235 millones de dólares. Para ello, aportó solo 100 millones, y el resto se financió con una deuda de 1.018 millones de dólares con un pool de bancos (Crédit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas e Itaú) y un préstamo del propio vendedor del paquete, Repsol, por 1.017 millones.
- y una segunda compra de otro 10 por ciento (ya el año pasado) por valor de 1.400 millones, para lo cual se endeudó por el total, repartido en 670 millones con otro pool de bancos (Itaú, Standard Bank, Credit Suisse, Santander y Citi) y 730 millones otra vez con Repsol.

De ese conjunto de deudas, Eskenazi apenas pagó con su participación en los dividendos de YPF de los últimos años aproximadamente 600 millones de dólares al primer pool de bancos, arrastrando a la fecha una deuda de 1170 millones de dólares con los bancos y 1.747 millones con Repsol.

ESKENAZI, que aún mantiene el 25,4% de las acciones, tiene que afrontar vencimientos anuales por u\$s300 millones entre amortizaciones e intereses, derivados del crédito que solicitó para entrar en la compañía.

Es importante destacar que el contrato Repsol-Eskenazi de 2008 compromete a ambos accionistas a mantener la política de dividendos de YPF en 90% de las ganancias, al menos hasta el pago del préstamo, y que cualquier cambio en esta disposición constituiría una cesación de pagos bajo las condiciones del préstamo.

2- ¿Por qué el director por el Estado (Baratta) nunca objetó los balances ni el accionar de la empresa?

La presidente en su discurso hablo de una “política de vaciamiento” por parte de REPSOL, ¿el Estado fue cómplice entonces a través de su representante en el directorio de YPF?

VACIAMIENTO: El vaciamiento de empresas es un delito penal, estipulado en el artículo 174, inciso 6, del Código Penal, por lo cual si funcionarios públicos tuvieren conocimiento de que se estuviera cometiendo ese delito, tienen la obligación de denunciarlo a la Justicia.

3- ¿Por qué mientras Kicillof impedía que Techint repartiera dividendos, Baratta permitía que YPF lo hiciera?

También en su discurso la presidente manifestó: “Ahí están exactamente, en la



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

distribución de dividendos y en la no inversión, las claves de por qué hoy tenemos que estar haciendo esta importación...”.

Las importaciones de hidrocarburos han aumentado desde 2004, principalmente por la creciente importación de gas debido a la alta dependencia de nuestra matriz energética (51%).

Todos tenemos presente los conflictos que se suscitaron en distintas empresas como Techint, Molinos o Perez Companc, en las cuales el Estado ha colocado directores en función de su participación accionaria, respecto de la distribución de dividendos.

El viceministro Kicillof fue protagonista de uno de los conflictos que mayor difusión tuvo, en el cual consiguió que la empresa Techint redujera notablemente la distribución de dividendos.

Ahora bien, ¿por qué en el caso de YPF no sucedió lo mismo?

4 - ¿Cuál es el plan para gestionar YPF?

Ni en el mensaje del Ejecutivo, ni en la exposición de los funcionarios en el Senado se ha visto un programa concreto sobre qué piensa hacer el gobierno con YPF. Cómo piensa recuperar la producción de hidrocarburos para encaminarnos nuevamente al autoabastecimiento.

La presidente en su discurso habló sobre la “profesionalización” en la conducción de YPF; esperemos que no estuviera hablando de los “profesionales” que gestionan Aerolíneas Argentinas.

5- ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Cuánto va a costar?

Más allá de esperar las definiciones propias del proceso de expropiación, nos parece que sería prudente tener una estimación del costo de lo que estamos haciendo.

Hace poco este Congreso aprobó una modificación a la Carta Orgánica del Banco Central que le da al gobierno mayor libertad para el uso de las reservas. Esta semana el Tesoro tomó más de 12.000 millones de pesos del Banco Nación. Venimos advirtiendo desde hace tiempo el uso discrecional de los fondos de la ANSES. Todas estas medidas demuestran que la situación fiscal del Estado pasa por un momento difícil. Entonces, ¿de dónde van a salir las decenas de miles de millones de pesos que se necesitan para poner a YPF en marcha?

Vemos en los medios que hay reuniones con empresarios extranjeros. ¿El problema no era que REPSOL era extranjera y no compartía los mismos intereses que nuestro país?



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

¿Hay algún inversor concreto?

6- ¿Por qué no se permite que actúen los organismos que fija la Constitución, SIGEN-AGN? ¿Qué esconden?

No reconoce los errores del pasado ni permite controles para el futuro.

DE VIDO

1- ¿Por qué De Vido como interventor?

Según la presidente YPF fue vaciada y la situación energética actual es insostenible.

Sin embargo, el principal responsable de esta catástrofe que se descubrió de la noche a la mañana, es quien viene a salvarnos del monstruo que él mismo creó. Es decir, el señor De Vido

Si hablamos del accidente de los trenes, hablamos de De Vido; si hablamos de ENARSA, hablamos de De Vido, si hablamos de crisis energética, hablamos de De Vido. Como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma, y en este caso, al ministro De Vido.

Quien casualmente es el responsable de estas situaciones, hoy es premiado por sus logros y ascendido a interventor de YPF.

Suerte que el capitán del “Titanic” se hundió con su barco, si no este gobierno lo hubiese nombrado comandante de la Armada.

ANEXO

1- ¿Quién es el responsable de que exista hoy un pasivo ambiental? ¿Por qué la Secretaría de Medio Ambiente no advirtió del pasivo ambiental que estaba siendo generado por YPF? ¿O el mismo se generó solo en el último año?

El Estado es responsable de connivencia con YPF por el pasivo ambiental por no haberlo sancionado en el momento oportuno.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

2- ¿Cuándo nos vamos a acostumbrar a anuncios como el de Vaca Muerta?

Hace pocos meses, mientras anunciaba el hallazgo del yacimiento de Vaca Muerta, la presidente nos decía que con el nuevo management local nos tendríamos que acostumbrar a este tipo de anuncios.

¿Era otra empresa? ¿Era otro país? ¿Qué cambió?

3- ¿Por qué no se habla de ENARSA? ¿Por qué no se exploró en la plataforma continental?

En el año 2004, este mismo gobierno creó la empresa ENARSA que tenía como objetivos “el estudio, exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos, así como de la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural y la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica.”

En palabras del diputado Cigogna ENARSA sería “el ariete con el que nuestro gobierno arremeterá en el ámbito de la política energética a efectos de iniciar un camino de transformación.”

ENARSA tiene asignadas transferencias del Estado nacional en el presupuesto 2012 de 10.000 millones de pesos, y desde 2005 recibió dos y media veces esa cifra. Entendemos que estos recursos se destinan a la importación de energía, lo que constituye el centro del problema que estamos discutiendo.

Sin embargo, ENARSA parece no haber cumplido, diríamos casi ni haber intentado cumplir, su objetivo principal que era explorar la plataforma continental.

4- ¿Por qué se espero 8 años para volver a controlar a YPF?

Según la presidente, su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, “siempre soñó con recuperar YPF para el país”.

Si Néstor estaba tan preocupado por el desarrollo y el crecimiento de YPF y del sector energético argentino, ¿por qué no intentó recuperarla antes? Y, ¿por qué en lugar de ello, insistió y fue el “padrino” de la increíble compra del 51,47% de las acciones por parte del grupo Petersen, quien ingresó al negocio sin poner un peso, sin experiencia, y sin conocimiento alguno del negocio?



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Finalmente, como ya ha adelantado el miembro informante de mi bloque voy a manifestar mi acompañamiento en general a este proyecto. Por las razones que ya se han expresado, pero fundamentalmente porque entiendo que hoy estamos votando una política de Estado, no una política para el gobierno de Cristina Kirchner, sino para que todo el pueblo argentino reinicie el camino del autoabastecimiento energético. Además, como representante de una provincia que integra la OFEPhi, aspiro a que la participación del Estado en YPF haga que nuevas inversiones lleguen a Formosa y que eso nos permita contar con fuentes de empleo genuinas, con una energía más económica y en general garantice a los formoseños una calidad de vida mejor cada día.

4. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CAMAÑO

Fundamentos del rechazo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Muchas herramientas legislativas le ha otorgado el Congreso Nacional a este Poder Ejecutivo para resolver los problemas energéticos en el país.

Se han creado por ley (26.095) cargos específicos para "...el desarrollo de obras de infraestructura energética que atiendan a la expansión del sistema de generación, transporte y/o distribución de los servicios de gas natural, gas licuado y/o electricidad, constituye un objetivo prioritario y de interés del Estado nacional..." con obligación por parte del PEN de "...informar trimestralmente a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, sobre la conformación y aplicación de los cargos específicos creados por la presente ley, en cuya comunicación expresará:

a) El monto total de la inversión y plazo de ejecución de la/s obra/s en cuestión;
b) El monto y modalidad del cargo tarifario a aplicar, así como el mecanismo de ajuste y actualización del mismo, en la medida que resulte necesario, a fin de atender el repago de las inversiones y las erogaciones asociadas a las mismas, que se devenguen con motivo de la ejecución de las obras de infraestructura energética contempladas en el artículo 1° de la presente ley; c) La determinación del fondo fiduciario al cual se incorporará el producido del mismo.

Se ha sancionado la ley 26.190 para fomentar el uso de fuentes renovables destinada a la producción de energía eléctrica; con beneficios. Creando un Fondo Fiduciario de Energías Renovables.

Se ha sancionado la ley 25.943 por la que se creó ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, la que tiene por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el transporte, el almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos, así como de la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural, a cuyo efecto podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos o exportarlos y realizar cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto. Asimismo, la sociedad podrá por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica. La sociedad podrá realizar actividades de comercio vinculadas con bienes energéticos y desarrollar cualquiera de las actividades previstas en su objeto, tanto en el país como en el extranjero.

Y ahí está ENARSA, con directores involucrados por la Justicia en diferentes investigaciones, sin más tarea que la de hacer de pasamanos de cuantiosos subsidios. En el año 2011, repartió subsidios por 10.506 millones; este año va por 14.000.

De los 41.000 millones de subsidios que se lleva el sector energético ENARSA tiene adjudicados 20.000 millones. Nadie sabe cómo se usan, cuáles son los recaudos y los controles porque al tener el mismo formato que la ley que se nos propone, no tiene controles del Estado.

Y ahora vienen con este proyecto; que en sus fundamentos es una autoimputación.

Todo, todo cuanto allí se expresa justifica la intervención de la Justicia.

Repsol vació YPF SA, en connivencia con los funcionarios de turno, que no actuaron por omisión, que tuvieron una clara participación con su propia firma en el descalabro, porque el señor Roberto Baratta, era director por el Estado. Lo era en el 2008 cuando, en un silencio sugestivo y sin debate público alguno, Repsol le vendió al empresario Enrique Eskenazi el 25 por ciento de YPF, la firma que adquirió en 1999 por unos 15 mil millones de dólares. El precio se fijó en torno a los tres mil millones de dólares, de los cuales Eskenazi abonó 300 millones al contado, con lo que se puede decir que bajo el manto de la "argentinización" de YPF, la sugestiva amistad con Néstor Kirchner y la falta de control de sus funcionarios, compraron YPF con nada. Ahora bien, ese nada es deuda y la deuda de U\$S 3.000 millones tiene una cláusula de obligación de rescate de obligaciones negociables, que están en los prospectos de la emisión y son de obligación dentro de los 60 días.

“Rescate al momento de un supuesto de nacionalización:

Si ocurriera un supuesto de nacionalización, según lo definido en el prospecto, y en el caso de que fuera requerido por los tenedores de por lo menos el 25% del total del monto de capital de las obligaciones negociables clase I, rescataremos la totalidad de las obligaciones negociables clase I dentro de los 60 días desde la recepción de la notificación en tal sentido. “

YPF estaría obligada, en caso de que los bancos exigieran la ejecución de esa cláusula "gatillo", a la presentación de resultados y detalle pormenorizado del funcionamiento de la compañía, que hacen las empresas en la Bolsa de Nueva York mediante el formulario



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

20-F figura, en el que generalmente un apartado donde se advierte al inversor de los compromisos asumidos por las partes, y los covenants.

El derecho de los acreedores a percibir el dinero financiado se activa en el mismo instante en que ese "cambio material" se hace presente.

Esta cláusula, que se encuentra englobada bajo el concepto de los covenants, es decir, un acuerdo entre un prestamista que ofrece recursos financieros a un deudor, y por el cual éste se compromete a ejecutar determinados actos estipulados, no sólo figura en los préstamos bancarios, sino también en los prospectos de emisión de las OBLIGACIONES NEGOCIABLES que tiene YPF.

¿Y esto qué va a significar para el futuro de la empresa? Porque convengamos que el problema no va a ser la expropiación. Sólo basta ver las últimas reuniones del G20 y del FMI. El problema va a ser el RECUPERO DEL CONTROL ACCIONARIO DE LA PORCIÓN DEL GRUPO ESKENAZI POR PARTE DE REPSOL Y DEL CLUB DE BANCOS PRESTAMISTA DEL 25,9% DEL PAQUETE, DONDE VAMOS A TENER ACCIONISTAS DENTRO DE LA COMPAÑIA CON COMPORTAMIENTO HOSTIL. ESTO SE DECIDE DESPUES DE LA SANCION DE LA LEY. Este frente abierto es el más grave, tener un socio hostil dentro de la compañía se convierte casi en imposibilidad de gestión.

El colapso se veía venir, porque el gobierno y Repsol, una de las peores empresas privadas del mundo, actuando en connivencia hicieron todo para que el sistema colapse. El gobierno inicia la salida sin un plan estratégico, con demagogia, gatopardismo, desordenadamente, sin rumbo, con alto riesgo de potenciar los problemas.

Y no alcanza con decir "nos hacemos cargo". Los Menem, los Kirchner y todos los mercachifles del petróleo y las finanzas que pulularan a lo largo de estos años en el negocio petrolero argentino, lo hicieron en detrimento del pueblo y a favor de su propio enriquecimiento.

No alcanza con decir "nos hacemos cargo", porque en realidad no se están haciendo cargo de nada, y llega a tal punto el "no hacerse cargo" que los mismos irresponsables que privatizaron y que administraron la estrategia petrolera continúan en sus cargos. No hay responsables, mientras se pierden millones de dólares, que bien servirían para garantizar una nación sustentable.

La verdadera política energética del país está rodeada de corrupción. La punta de iceberg de esa política son las valijas de Antonini Wilson, que por cierto bien guardadas están de la investigación judicial en el despacho de algún señor juez.

La verdadera política energética del país es la falta de control, que no es ingenuo. Acá no se controla o se esconden auditorías administrativas de funcionarios de carrera, porque es lo que le conviene a los funcionarios de turno.

Ninguno de los organismos que podrían haber actuado en el caso Eskenasi hicieron nada, no lo hizo Defensa de la Competencia, no lo hizo Defensa del Consumidor, no lo hizo la Sindicatura. Ninguno observó nada. Y como dijo el vice ministro de Economía: EL ESTADO ES CÓMPLICE DEL VACIAMIENTO.

Y cuál es la propuesta que hay en este proyecto de ley. Lo primero que hay que decir es



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

que no estamos nacionalizando, ni argentinizando, ni siquiera estatizando YPF.

YPF seguirá siendo una S.A., en la cual el Estado nacional tendrá acciones por el 26%, las provincias tendrán acciones por 25%, Eskenazi tendrá acciones por el 25,46% de la empresa, Repsol continuará con un 5% y luego hay otras titularidades.

Alguien me puede explicar cómo hará el Estado nacional para, participando de una empresa que solo está en el 30% del negocio hidrocarburífero -quiero mencionar que cuando privatizaron estaba en el orden del 70%- , con un insignificante 26% de acciones para asegurar lo mismo que nos prometió en ENARSA.

Hay una notoria discordancia entre lo que se busca garantizar, o sea los objetivos de esta ley, y el medio al que se recurre.

Es interesante el artículo 17 por el cual le damos la posibilidad a todo tipo de acuerdos, y asociaciones estratégicas, joint ventures y BINGO!!! UTES, además de colaboraciones empresarias con otras empresas públicas, privadas, mixtas, nacionales o extranjeras. Es un traje a medida para los empresarios amigos de Cristina, a los que llama por su nombre de pila.

Un título demostrativo del gatopardismo (cambio todo para que nada cambie) es, sin dudas, el II, capítulo único, por el que se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos.

Resulta ser que todos los argentinos vamos a poner el dinero de la expropiación, todas las provincias, aun aquellas más apremiadas y como chupetín se pondrá en el mencionado Consejo, que sólo emitirá opiniones no vinculantes sobre los temas que el Ejecutivo le proponga.

Bajo el 3er párrafo del artículo 8º se consagra un nuevo atropello a las provincias. Las condiciones de la cesión no son jurídicamente aceptables. No es posible que se fijen por vía de la reglamentación de una ley. El instrumento válido e idóneo es el acuerdo interjurisdiccional.

Finalmente, yo me pregunto y les pregunto a mis colegas: ¿cuán soberanos podemos ser en términos hidrocarburíferos por la sola expropiación de estas acciones?

La realidad es que sin una política seria y decente del Estado para el sector, g la expropiación no tiene más valor que el declamativo.

Que paradójico, en nombre de los jubilados se privatizó YPF y con la plata de los jubilados, seguramente hoy, estaremos pagando este jubileo de desaciertos y corrupción.

5. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CARRANZA

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de minoría del bloque Frente Peronista en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Que la petrolera YPF nunca tendría que haber salido del patrimonio estatal, ya nadie lo duda. Pero se hizo, y ahora, luego de tantos años, se dan cuenta del tremendo error



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

cometido y están tratando de enmendarlo. Pero como es obvio eso tiene un altísimo costo, no solo económico, sino jurídico, político e internacional. Lo que ocurre es que esta mutación tardía se hace sin ninguna clase de autocrítica, como si el gobierno hubiera empezado ayer, y a todas luces rendido ante la triste realidad de una situación de colapso y de crisis muy profunda en materia energética, se ve obligado a tomar una decisión desesperada, culpando a una parte de los accionistas y a algunos directores de la empresa que ellos mismos promovieron y llevaron a se sitial. No es un cambio de paradigma ni un nuevo modelo de la matriz energética nacional. Muy lejos está de serlo.

Queda claro que el responsable del actual estado de la empresa es la propia gestión del secretario de Energía, ya que luego de nueve años de complicidad ha sido quien más ha contribuido a su vaciamiento, cuando menos por OMISION y lo que es mucho peor aún: las negligencias, que las hubo, no se las podemos atribuir al sector privado, sobre todo cuando aprobamos toda su gestión, la desinversión y los balances mediante el expreso consentimiento del representante estatal en su directorio.

Que YPF debe estar en manos del Estado está muy bien y en eso estamos todos de acuerdo, pero que se eche mano a una expropiación directa y parcial de su paquete accionario, sólo dirigida a un grupo empresario, es algo que pocas veces se ha visto. Creo que se tendría que haber hecho mejor, de una manera más transparente, de alguna forma acordada con Repsol o con el gobierno de España o con la Unión Europea, o con los demás accionistas, o con más consenso internacional, y de eso nadie habla ni se ocupa.

Estamos de acuerdo en el control accionario por el Estado, pero ¿por qué razón no se expropió el 100% de la empresa?, y pasamos al control total de la petrolera como era antes. ¿Cuál es la razón para mantenerla como una sociedad anónima, qué sentido tiene? Tampoco se trata de un problema de soberanía, porque los yacimientos y los pozos petroleros o gasíferos seguirán siendo propiedad de las provincias. Se trata de hacer eficiente una empresa para que brinde un mejor servicio a los argentinos.

Este proyecto no soluciona para nada el problema energético ni en el corto ni en el largo plazo. Pasamos de tener un superávit de 6 mil millones de dólares por exportación a un déficit de 3 mil millones de dólares por importación anual, que se incrementa año tras año. ¿De quién es la culpa?, ¿de la empresa cuando YPF sólo controla el 30% del mercado? ¿Tenemos que pagarle a Repsol por la expropiación, luego invertir en la empresa ahora mismo para que funcione correctamente y además importar gas y combustible todos los años?, ¿de dónde saldrán los capitales ?

Por lo demás, el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo sustrae a la empresa de los controles estatales, tanto de la AGN como de la SIGEN y de la Ley de Administración Financiera. No se conoce ni se informa sobre un inventario de pozos ni de la necesidad de una auditoría de reservas, lo que además viola la ley 17.319 de hidrocarburos, y mucho menos se habla de las provincias no petroleras que son catorce (14) y cuyos



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

habitantes, que significan el 85% de la población del país, son los que han estado financiando a YPF durante largos años y, de ahora en más, lo seguirán haciendo; ello es totalmente discriminatorio e injusto.

Por último, voy a tratar de explicar el dictamen de minoría que hemos suscripto con otros diputados de mi bloque, FRENTE PERONISTA, en la inteligencia de acordar con los demás despachos en la expropiación (aunque en mi caso estoy por el 100% del capital accionario), acuerdo incluso que se ha alcanzado con los demás tópicos que se han expresado, esto es la composición del Consejo Federal de Hidrocarburos, con mayor participación de los estados provinciales y mayoría en las decisiones del directorio, la distribución de las acciones (utilidades y regalías) conforme los índices de la Ley de Coparticipación Federal (23.548) -según está mi disidencia parcial-, los mayores controles estatales y la creación de una comisión bicameral parlamentaria de seguimiento y de evaluación de lo acontecido en los últimos 20 años en la empresa, la garantía de preservación de las fuentes laborales, las garantías de sustentabilidad ambiental, la prohibición del desvío de capitales para suplir déficit del Tesoro nacional, la incorporación de la “exploración” dentro de las actividades a incluir entre las declaradas de interés público nacional, y la defensa de los intereses estratégicos nacionales, en virtud de la gran demanda y necesidad de recursos energéticos que hoy padece todo el mundo, que avanza hacia un crecimiento demográfico que nos coloca ya casi irremediabilmente en una población de 9 mil millones de habitantes en los próximos 50 años. Además el proyecto es abiertamente antifederal y viola la cláusula del progreso que establece el art. 75 inc. 19, de la CN., de modo que si queremos inversiones deberemos cumplir con las normas y procedimientos del derecho internacional y de las prácticas comerciales generalmente aceptadas, para con ello garantizar el marco adecuado a fin de que tengamos capitales suficientes para mejorar la producción, aumentar el trabajo, incrementar la tecnología, en definitiva, llegar al autoabastecimiento como lo propone el proyecto, pero que no explica cómo se llega ni cuándo.

Motiva aún más nuestra postura el grave perjuicio que tiene la provincia de Santa Fe (y otras) con este proyecto, y ello así, porque si las provincias hoy tienen la totalidad o el cien por cien del dominio de los recursos naturales por imperio del art. 124 de la CN, ahora con el art. 9° del proyecto en tratamiento sólo serán titulares del 49% del 51% que se expropia, es decir que pasarán a tener aproximadamente un 24,99% de la empresa, en un directorio que son minoría, y ello no solo es inconstitucional, sino que es una verdadera traición a las provincias y al federalismo, que no vamos a convalidar. Mi responsabilidad como diputado de la Nación es votar en contra de la sindicación de acciones por 50 años, que lo obliga a votar junto al Estado nacional, esto es más concentración, más centralismo y atentar contra el espíritu dominante en la última reforma constitucional de 1994.

Por supuesto, sostengo que el proyecto debería incluir el pago de los juicios y acciones administrativas de los ex obreros y empleados de YPF en todo el país, que se acogieron



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

a los retiros voluntarios o fueron despedidos, que hace tiempo vienen reclamando el pago de sus haberes que esta nueva empresa deberá afrontar para saldar esa vieja deuda que en mi caso conozco personalmente por ser oriundo de la ciudad de San Lorenzo, donde la destilería existente dejó varios centenares de trabajadores a los que se les adeudan montos importantes. Ese sería un acto de justicia que bien podría solucionarse en esta oportunidad, si de justicia hablamos. Estos reclamos se han iniciado como consecuencia de los incumplimientos de la ley 25.471 y del decreto 1.077/03, y se encuentran en pleno tratamiento en sedes administrativa y judicial y en proyectos presentados por el diputado Mouilleron y el senador Pérez Alsina, a los que yo apoyo y apruebo para que cumpla con esos trabajadores que tanto han hecho por la empresa.

Por lo expuesto, concluyo en que nuestro voto ha de ser por el dictamen de minoría que hemos firmado, en la seguridad de que el despacho de mayoría no va en el sentido establecido en nuestra Constitución Nacional (art. 124), respecto de las provincias a quienes corresponde el dominio originario de los recursos naturales, y porque el proyecto está destinado a satisfacer necesidades políticas coyunturales del gobierno, lo que significará un mal negocio para la Argentina en el mediano y largo plazo. Por ello rechazo el proyecto y mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, tal como está redactado y si no se aceptan modificaciones o se deja en claro cómo se abonarán las deudas a los trabajadores que permanentemente reclaman en esta Cámara que se les paguen las deudas por el proceso privatizador. En homenaje a los superiores intereses de la Nación y a fin de evitar otra frustración y retroceso que ponga en peligro los intereses estratégicos nacionales, que entendemos están suficientemente defendidos en nuestra propuesta firmada en minoría, que además entendemos representa a numerosos sectores de la vida nacional, ya que el crecimiento armónico y sostenido de la Nación se dará respetando el federalismo como está expresado en nuestra Constitución Nacional y las mejores enseñanzas de Mosconi, Yrigoyen, Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Juan Domingo Perón, Arturo Sampay y tantos otros compatriotas, que el proyecto de la mayoría no cumple de manera cabal.

6. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CATALÁN MAGNI

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

La sesión de hoy es una sesión histórica. Por varios motivos. Primero y principal, porque se está dando un paso gigante hacia la recuperación de la soberanía de los hidrocarburos; se está recuperando una de las figuras principales para el desarrollo productivo y energético del país. En segundo lugar, esta fecha es histórica porque esta medida propuesta por el gobierno es apoyada por la mayoría de todos los partidos, los más amplios y representativos, en lo que significa el apoyo más contundente que se ha visto en los últimos años. Esta es una política de Estado con todas las palabras y con todas las fuerzas, demostrando que nuestra democracia y consenso plural gozan de buena salud.

Hoy, junto a mis pares, estamos protagonizando un debate que quedará guardado en la historia, como una gran bisagra. La nacionalización de YPF viene a poner orden a un período de desinversión que llevó adelante a Repsol. Esta empresa obtuvo ganancia aun en las peores épocas de productividad. La política de esta empresa llevó a que, por primera vez en 17 años, la Argentina tenga que importar gas y petróleo. Los números hablan por sí solos y los datos de la realidad avalan esos números negros de la empresa española.

Ante esta situación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió replantear la política hidrocarburífera y discutir esta privatización claramente desafortunada. Y optó por recuperar este recurso, ante una clara política de vaciamiento y de improductividad pocas veces vista.

La Argentina tiene una obligación con su historia: dejar de ser el único país latinoamericano que no maneja sus recursos naturales. Para eso hoy estamos debatiendo y aprobando la recuperación de nuestra histórica YPF. Vale aclarar: estamos discutiendo los manejos equivocados de una empresa española, no de ese país ni de su gobierno. Quienes confunden a una empresa como Repsol con un país como España, sólo lo hacen para complicar el debate. No debemos permitir que se corra el eje de la discusión; estamos hablando de una empresa, no de un país. Hay que machacar y redundar porque tanto de aquí como de allá hay quienes quieren hacernos creer otra cosa. Mariano Rajoy es el presidente de España, no de Repsol. Si tenemos esto en claro podremos avanzar sin distracciones ni chicanas.

La intervención de YPF no sólo es necesaria sino conveniente para poder encarar una política energética y productiva a mediano y largo plazo. Hay que aprovechar también para darle mayor impulso aún a la industria nacional de insumos para la perforación de pozos petroleros. Esto permitirá no sólo reducir costos innecesarios sino también impulsar la industria nacional en esta área. Se trata de una medida estratégica que se desarrolla en múltiples direcciones, todas ellas beneficiosas para los números del país. También como fueguino, como habitante de esta hermosa provincia productora de petróleo, me siento involucrado y partícipe necesario ya que, a partir de la aprobación de esta propuesta, Tierra del Fuego es parte beneficiada de esta empresa nacional llamada YPF. Accionistas y beneficiarios de gran parte del paquete accionario, tal cual lo anunció la presidenta.

Como el resto de las provincias petroleras, Tierra del Fuego fue especialmente considerada y contemplada en el diagrama de esta restructuración de YPF. No sólo el país se constituye como propietario de sus recursos sino que estas provincias se



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

constituyen como parte de la ganancia prevista. Esto de por sí nos llena de orgullo a los fueguinos y nos hace ver con mayor optimismo la realidad que comienza a partir de esta nacionalización.

Por todo esto, digo que estamos en una sesión histórica. Por los intereses nacionales que se invocan, por los intereses provinciales que se fortalecen, por la nueva perspectiva que se abre de ahora en más. Porque hace muchos años que los argentinos merecíamos disponer de nuestros recursos hidrocarburíferos, porque hace mucho que hablamos de soberanía en todos los sentidos, porque las acciones en tal sentido son la mejor demostración de la coherencia de este modelo nacional y popular con todas las letras y con todas las fuerzas. Porque en resumidas cuentas nosotros tenemos la posibilidad de administrar lo que nos pertenece y tenemos la obligación de cuidarlo.

Por todo lo expuesto, y en claro apoyo a esta propuesta del Ejecutivo es que mi voto va a acompañar esta iniciativa.

7. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO CIAMPINI

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

La YPF estatal era desarrollo social.

No es cierto que tras la fiebre del desguace del modelo de Estado anterior se conformó un sector estatal mínimo y ausente. Por el contrario, lo que se hizo fue convertir al Estado en una herramienta destinada a favorecer plenamente a un segmento social altamente concentrado, con el cual se articuló una alianza que perduró hasta mayo de 2003.

Ahora bien, en este nuevo esquema de Estado que estamos profundizando, estamos llenando de contenido términos como: soberanía, desarrollo, federalismo, solidaridad, economía social, independencia energética. Estamos recuperando la soberanía energética. Avanzar en esta reforma es sin duda un desafío central para consolidar el desarrollo económico y la estabilidad política en la Argentina y resulta fundamental la gestión de proyectos de modernización e innovación que se produzca con la obtención de la renta asociada a la actividad de hidrocarburos.

Para ello se necesita que esa YPF que construyó, caminos, pueblos y comunidades sea constructora del desarrollo tecnológico del país y volver al concepto integrador.

Como anunció nuestra presidenta, nuestro país ha recibido unos 890 científicos argentinos que se habían ido por falta de oportunidades y que ahora fueron repatriados y, antes de fin de año, se piensa llegar a los 1000 repatriados. A esto se suman nuestras



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

universidades nacionales, que aportan profesionales que también se deberán adecuar a esta concepción de desarrollo con respeto al ambiente y el cuidado de nuestros recursos, pero aportando valor agregado a los productos derivados.

En este nuevo paradigma de YPF no es una empresa que extrae petróleo y gas de la tierra; sino un actor fundamental que aporta al desarrollo tecnológico del país.-

Pero esto no puede hacerse solo; debemos pensar en la “patria grande”, en nuestros hermanos latinoamericanos, y apoyar y compartir su experiencia en esta materia.

Desde el primer minuto en que nuestra presidenta anunció esta medida, sentimos el acompañamiento de los países latinoamericanos, por ejemplo, las palabras del presidente de nuestra hermana uruguaya cuando expresó que: “no nos gusta el prepo de la Europa rica”. Es fundamental lo que nos están mostrando cotidianamente, el desarrollo de sus empresas con las que debemos compartir una estrategia en común, que nos permita poner en acciones la unión latinoamericana que decimos, sentimos y queremos.

El desafío está planteado: tenemos que construir una nueva empresa que no sólo nos autoabastezca, sino que esté comprometida con el desarrollo inclusivo y tecnológico de su pueblo y en comunión con el resto de las naciones de Latinoamérica.-

El 16 de abril del 2012 quedará en la historia como el día en el que nuestra presidenta tomó la decisión de recuperar para el país sus recursos naturales estratégicos y hoy es el día en que la pluralidad de representantes refrendamos como política de Estado esta decisión.

Historia de YPF

Se puede pensar la historia petrolera en 6 momentos directamente relacionados con las estrategias de organización empresarial y laboral y con el impacto de las políticas aplicadas en el ámbito nacional.

Esta recopilación histórica, lo hice consultando en algunos temas, el libro Historia de la Patagonia de Susana Bandieri.

Momento I

Descubrimiento del petróleo en 1907, en Comodoro Rivadavia, hasta 1922, año de la creación de YPF. En esta primera etapa se organizan las bases de explotación y por consiguiente se establecen los primeros asentamientos poblacionales. Se crea la Federación Obrera Petrolera, en 1917, en defensa de las reivindicaciones obreras acordes a una de las etapas más combativas del anarcosindicalismo.

En 1920, se registra una caída coyuntural de los precios internacionales del petróleo. El comportamiento frío de las inversiones privadas se relaciona también con el cambio de la política iniciado por el radicalismo en el poder, que insistió ante el Congreso para modificar la legislación, excesivamente permisiva, alentando la nacionalización y explotación fiscal de los recursos del subsuelo nacional.

Se crea entonces Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Se establecían normas estrictas para acceder a las vetas petroleras en las zonas no reservadas, exigiendo a los peticionantes un depósito en dinero y la demostración de la capacidad técnica, económica y financiera para encarar la explotación, con lo que se intentaba frenar la especulación.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Momento II

Bajo la administración del general Mosconi se abre una nueva etapa decisiva en el desarrollo del petróleo nacional. La producción fiscal se duplicó y aumentó la capacidad de almacenamiento y transporte estatal, a la vez que se inició la capacitación de técnicos y geólogos nacionales, consolidándose la integración vertical de la industria petrolera en manos del Estado.

Con la construcción de la gran destilería de La Plata en 1925, se obligó a las empresas privadas, especialmente Standard Oil (estadounidense) a aumentar y modernizar su propio sistema de refinación, a la vez que YPF montaba un sistema de venta de naftas y lubricantes en todo el país. Era la era de la gasolina.

Como forma de asegurar el control y la normal provisión del petróleo al mercado interno, se impulsó desde el Estado una estructura de carácter militar a los yacimientos, lo cual caracterizó el período que va de 1922 a 1930. Estas características tenían que ver con la tarea reguladora del mercado interno sumado a un fuerte control de la fuerza de trabajo.

En este período se puso en marcha una política de bienestar y asistencia al trabajador para asegurar la producción y evitar los conflictos gremiales. La fórmula de gestión empresarial del Estado fue entonces control y contención social, iniciándose una explícita política para homogeneizar y promover la identificación de los trabajadores con la empresa nacional. Nace el trabajador ypefiano.

Momento III

Entre 1930 y 1946 se desarrolla el tercer período caracterizado por la extensión de las explotaciones a nuevas áreas regionales y extrarregionales. La demanda de combustible se intensificó a partir del florecimiento de la industria sustitutiva de importaciones y el aumento del consumo energético en las ciudades.

Con el golpe de 1930 que puso fin a la 2a presidencia de Yrigoyen, el modelo estatal se diluyó y volvió a incrementarse la participación del capital extranjero. No obstante, la regulación laboral aplicada a las explotaciones siguió progresando, a la vez que la vocación de argentinizar los yacimientos también se profundizó.

Momento IV

La cuarta etapa se extiende desde la llegada del peronismo al poder en 1946 hasta su caída en el '55, fecha que coincide con la definitiva provincialización de los territorios nacionales patagónicos, con excepción de Tierra del Fuego.

La expansión del rol estatal en esta etapa favoreció la filiación de los obreros con las políticas peronistas, lo cual derivó en la creación del Sindicato Único de Petroleros del Estado, integrado a la CGT oficial en 1951.

En 1946, se creará la empresa estatal Gas del Estado encargada de la provisión de gas y fluidos para el consumo industrial y domiciliario.

Se podría pensar que la consolidación de la actividad hidrocarburífera habría finalmente profundizado el reemplazo gradual del modelo de desarrollo vigente basado en la explotación ganadera extensiva. Asimismo, reforzó el proceso de caracterización económica y demográfica en otras zonas.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

La organización social del espacio impuesto por la nueva actividad generó la aparición de poblaciones muy dependientes del centro productor, donde las empresas estatales cubrían todas las necesidades de los trabajadores dadas las grandes distancias con otros centros poblacionales.

En todos los casos se repetía el esquema del campamento o villa central donde se instalaban las viviendas y otros servicios necesarios, incluidos salud, educación, clubes y otros espacios de sociabilidad, con lo cual se aseguraba la estabilidad de la fuerza de trabajo y se promovía la formación de una identidad comunitaria y de un sentido de pertenencia que se transmitía de una generación a otra, donde los trabajadores se identificaban con la empresa estatal. Promovía en los obreros una idea de pertenencia colectiva y con ello, el compromiso y el convencimiento de que su trabajo formaba parte sustancial del desarrollo nacional.

Momento V

De 1955 a fines de 1970

Las medidas desarrollistas del gobierno de Frondizi y su interés por incrementar la producción energética nacional, implicaron cambios importantes, modificando el modelo de desarrollo vigente.

Respecto de los nuevos estados provinciales, la obtención de regalías por la explotación del subsuelo permitió sostener un modelo distributivo con amplia cobertura social que fue la base de las políticas de bienestar generadas por los gobiernos locales como el caso del MPN en Neuquén.

Al producirse la provincialización, la propiedad del recurso se convirtió en tema obligado y recurrente de las reivindicaciones provinciales, sobre todo si se tiene en cuenta que las sucesivas leyes nacionales sobre hidrocarburos habían dejado sin efecto la condición de propiedad provincial. Esto permitió que el Estado nacional mantuviese la mayor injerencia en el control y manejo de los recursos energéticos de las provincias patagónicas. Es por esto que a partir de entonces el gobierno federal paga “regalías” a las provincias productoras de petróleo, que constituyen el 12% del precio de venta de hidrocarburos en condición comercial – se deduce de la venta del precio pagado por el barril de crudo menos gastos de flete- como forma de participar del producto generado. Las empresas privadas sólo cumplieron un rol secundario en los primeros años de este período, como prestadoras de servicios a YPF, mientras que la empresa estatal tenía mayoritariamente la producción, lo que a su vez la convirtió en la principal generadora de empleos.

En la última etapa de este período las leyes de hidrocarburos fueron generando una cada vez mayor injerencia del Estado nacional en las decisiones en materia petrolera, a la vez que reafirmaba la participación de agentes privados, sobre todo en las tareas vinculadas con la etapa de exploración. Pero, a fines de 1970, este proceso se agudizó con la cesión por parte de la empresa estatal de las mejores áreas productivas a grandes grupos económicos transnacionales.

Hasta 1977 al menos, el Estado nacional, pese a los cambios políticos, siguió ejerciendo una clara direccionalidad interventora a través de sus empresas YPF y Gas del Estado, a las cuales en 1967 se agregó la explotación hidroenergética con una nueva empresa



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

estatal, Hidronor.

Momento VI

En los 80 se inaugura una etapa caracterizada por el progresivo y cada vez más importante alejamiento de la participación estatal en la explotación de los recursos energéticos, producto de la aplicación de políticas neoliberales.

YPF todavía en 1985 producía el 81% del crudo extraído en la provincia de Neuquén, elaborando en sus destilerías de Plaza Huincul la mayor parte de los combustibles consumidos en la región y fuera de ella. Sin dudas, era una de las mayores generadoras de empleo absorbiendo, según datos de 1987, a más de 6000 agentes entre personal efectivo y contratado; en tanto que propiciaba la aparición de múltiples actividades vinculadas con servicios especiales de exploración y explotación, provisión y reparación de maquinarias y equipos e incluso de productos químicos.

Estos efectos multiplicadores tuvieron entonces una altísima incidencia socioespacial. Entre otras cosas, cabe destacar la activa colaboración de la empresa en la creación de la Universidad Nacional del Comahue y de una de sus primeras carreras-ingeniería con especialidad en petróleo- desarrollada en Challacó.

La profundización de este proceso de privatización durante los 90 agudizó la disminución de la participación estatal y de la posibilidad de apropiación de la renta por parte de un grupo más importante de la sociedad.

El resultado de décadas de vaciamiento trajo como resultado el evidente deterioro del nivel de vida de las poblaciones directamente relacionadas con la explotación del recurso, tal como lo demuestran las jornadas de lucha popular protagonizadas por las comunidades de Plaza Huincul y Cutral C6 en 1996 y 1997, entre otras.

Más de 5.000 personas salieron a las calles en estas localidades con el apoyo masivo de los diversos sectores sociales, inaugurando una nueva modalidad de lucha: los cortes de ruta con instalación de piquetes. El asesinato de Teresa Rodríguez, producto de la brutal represión, cohesionó a los grupos de lucha enfrentándolos decididamente contra el gobierno nacional, el gobierno provincial, las empresas y las fuerzas de seguridad.

Todo ello como producto de décadas de descalabro económico nacido en el seno de los negocios entre el establishment político y la cúpula empresarial.

El incremento de la injerencia de grandes grupos económicos en la explotación petrolera regional desde fines de los 70, a través de transnacionales como Astra, Bidas y Pérez Companc, alteró las condiciones previamente mencionadas al fijar precios que aseguraban naturalmente sus propios beneficios; empresas que operaban con filiales de personal reducido con un gran margen de inestabilidad laboral sujeto a las condiciones del mercado, lo que conocimos tristemente como flexibilización laboral.

El achicamiento evidente de la empresa estatal que incrementó el proceso de privatización en beneficio del grupo español Repsol, tuvo graves consecuencias sociales para las zonas productoras, especialmente golpeadas por la desocupación. Las indemnizaciones pagadas se agotaron rápidamente en el sustento diario ante la falta de alternativas económicas. Y vimos florecer kiosquitos, maxikioscos, taxis, en un paisaje



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

desolador, donde más temprano que tarde el conjunto de la población tuvo la necesidad de huir.

Ahora bien, es preciso analizar las condiciones en las que se desarrolla el último capítulo de la historia del oro negro, ya que no hubiera sido posible destruir las empresas nacionales de gestión estatal sin la complicidad política y el capital internacional.

La privatización de las empresas públicas instaladas en la Patagonia como YPF, Gas del Estado e Hidronor, alteró de manera radical el modelo de desarrollo vigente. A partir de entonces, diversas compañías privadas, estadounidenses y españolas mayoritariamente en el caso del petróleo, pudieron licitar nuevas áreas y renegociar los contratos de exclusividad que antes beneficiaban a las empresas argentinas. La importación y exportación se liberaron para estas compañías, que pudieron disponer sin traba alguna de los bienes producidos y de las ganancias generadas. Si bien la producción de petróleo y gas creció notablemente, se generaron importantes efectos negativos en materia socioeconómica sobre todo en las áreas de influencia de las empresas estatales, allí donde comenzó a reducirse la demanda de empleo.

Este es un nuevo paradigma en la política iniciada en el 2003, queremos tener para las próximas generaciones: más soberanía.

8. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CICILIANI

Fundamentos del apoyo en general del bloque de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Hoy, venimos al Congreso de la Nación a decidir sobre el capital accionario de YPF. Muchos ciudadanos, amigos, militantes, nos han preguntado cómo votará el socialismo. Nosotros respondemos: votaremos basándonos en nuestras convicciones y con la coherencia histórica del Partido Socialista en esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Nos alertan que la aprobación en general implica en los hechos un respaldo total al gobierno. Que estaríamos apoyando a un gobierno que avanza sobre el Poder Judicial, que no respeta el federalismo, que no respeta las instituciones, que no es transparente, que no respeta el derecho ciudadano de acceso a la información pública, que la información estadística brindada por el INDEC desconoce la inflación y los índices de pobreza.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Nosotros les decimos que compartimos este análisis crítico sobre el gobierno actual, pero que estamos de acuerdo con que el Estado tenga mayoría en el capital accionario de YPF. Que no es blanco o negro, que tenemos que discernir según la complejidad de cada tema. El cambio accionario de Repsol-YPF, no hace menos mala la larga lista de déficits de este gobierno.

El legislador/a socialista no legisla para mantener este sistema, sino para sentar las bases de uno nuevo. En ese nuevo sistema no queremos debatir dogmáticamente estatismo o libertad de mercado, regulación o no regulación. No es la decisión entre uno u otro independientemente del bien de que se trate. No será la misma regulación para todos; no da lo mismo autos o medicamentos. El medicamento no es una mercancía; es un bien social. El petróleo no es un commodity, es un recurso estratégico.

Entonces lo que también queremos debatir es qué Estado necesita YPF para ser eficiente y transparente.

El debate de hoy nos hizo revisar la historia de la empresa en nuestro país, de la política petrolera y energética, y también la de los partidos políticos que, a lo largo de este tiempo, como oficialismo u oposición, han decidido su suerte. La historia de YPF fluctuó entre el logro del autoabastecimiento, a ser la única empresa de hidrocarburos en el mundo que daba pérdidas.

Alfredo Palacios, en los años 30 ya decía: “El petróleo es el nervio vital en la economía de las naciones e interesa por eso a nuestro país de una manera urgente y principal. Debe hallarse bajo la salvaguardia del Estado”. Ese verdadero general de la Nación, Enrique Mosconi, símbolo de nuestra soberanía, libró una gigantesca batalla en contra de monopolios extranjeros y luchó con vocación de servicio para que los argentinos tuviésemos el monopolio de la riqueza petrolífera de nuestro suelo. En la misma línea, José Ingenieros, Julio V. González, Aníbal Ponce, Gabriel del Mazo postularon la nacionalización de las fuentes de riqueza y abolición de privilegios económicos.

En el auge privatizador de los 90 el socialismo, en la persona de Guillermo Estévez Boero, alertaba que para remediar la desigualdad debían considerarse estrategias estatales. Decíamos que el fundamentalismo del mercado y la reducción máxima del rol del Estado no producirían un ingreso masivo de capitales que con su derrame mejorarían la situación social. Lo dijimos el 8/8/1989 cuando se trató la Ley de Emergencia Administrativa y Reforma del Estado y lo repetimos a lo largo de toda la década de los 90 en cada una de nuestras intervenciones en contra de las privatizaciones. Y también dijimos en la reforma de la Constitución de 1994 que los recursos del suelo y del subsuelo son derechos inalienables de la Nación. La transferencia a las provincias fue el golpe de gracia para el inicio de la destrucción de YPF como empresa nacional.

La decisión sobre la privatización, como ahora el debate de la reestatización, tienen elementos comunes. Tanto el gobierno peronista atado al Consenso de Washington como el gobierno peronista actual que se dice progresista, plantean el mismo marco: el Congreso aprueba o rechaza, pero no participa de la definición de una política de Estado al respecto. La ley se trata de acuerdo a lo que decide el Poder Ejecutivo.

Hoy, nuevamente el Congreso y la dirigencia política pierden la oportunidad histórica de la concertación y, en este caso, nada menos que para concertar una política



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

energética de Estado.

La Argentina necesita una política de Estado, diversificar su matriz y darle sustentabilidad. Por ello, creemos necesario un acuerdo federal político, social y económico, donde podamos definir con qué recursos energéticos van a vivir las próximas generaciones.

Estamos de acuerdo con la recuperación parcial de YPF, pero ¿alcanza?

Esta iniciativa no es suficiente si no se acompaña de las medidas que presentamos en el debate de comisiones fundamentando nuestra disidencia parcial, y que ha sido expuesto por los legisladores del interbloque FAP que me precedieron en el debate. La importación de combustible de hoy es consecuencia de una política profundamente equivocada, sin controles hacia las empresas petroleras y sin una estrategia nacional. Creemos que el gran debate hoy es qué modelo estatal gestionará la nueva YPF. El proyecto oficial no altera una coma del régimen jurídico (marco regulatorio) de los hidrocarburos vigente desde hace dos décadas, que es el que garantiza un comportamiento predatorio del recurso del conjunto de las firmas que operan en el sector, y no solamente de Repsol YPF. Tampoco dice nada del destino de las utilidades que se generarán, por lo cual resulta necesario fijar como destino de las utilidades futuras de YPF la explotación y la exploración hidrocarburífera en el país.

La gestión del Estado debe ser necesariamente eficaz, eficiente y transparente para no dilapidar más los dineros de las y los argentinos. La Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el propio Congreso deben obligatoriamente controlarla y supervisarla. Debe ser una empresa auténticamente federal con la participación activa de todas las provincias y del Estado nacional. Es insuficiente que participen solo las provincias petroleras. Proponemos que las acciones expropiadas se distribuyan entre todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como la incorporación de la representación parlamentaria en el seno del Consejo Federal de Hidrocarburos, entre otras cosas.

Toda la Nación sufrió el proceso de privatización y desguace de YPF, no sólo las provincias productoras. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, YPF S.A. había desarrollado las siguientes estructuras:

- La divisional Rosario, donde operaba el centro de comercialización para todo el litoral, que fue cerrada después de la venta de la destilería San Lorenzo, concentrando la actividad comercial en la terminal San Lorenzo.
- La planta de despacho de combustibles de la ciudad de Santa Fe, que terminó siendo cerrada y desguazada en el marco del decreto 2.778/90.
- La destilería San Lorenzo y la planta de despacho de combustibles, que fueron vendidas a capitales privados el 01/04/1993 en el marco del decreto 2.778/90.
- La cabecera del poliducto San Lorenzo y la terminal de despacho de combustibles, que en la actualidad siguen perteneciendo a YPF S.A.

Estos procesos de desguace, dejaron como resultado miles de trabajadores desocupados (que todavía hoy pelean por acceder a los beneficios de las acciones de propiedad participada) y cientos de millones de pesos del Estado dilapidados en la venta y ahora en la compra. Alertamos que estos procesos de avance y retrocesos tienen un costo fiscal altísimo. Lo sabemos muy bien los santafesinos por los costos de la venta del



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Banco de Santa Fe y de la empresa de Aguas. Estos costos los pagan los sectores de menores ingresos. Primero, porque en un sistema impositivo regresivo son los que mayor aporte hacen a los ingresos del fisco y, segundo, porque dejan de recibir servicios de salud, de educación y de justicia porque los recursos no alcanzan y son dilapidados. Debemos ir a un nuevo Estado. No alcanza con una ley que estalice si no cambiamos el Estado. Debe ser transparente y participativo. Vemos con preocupación que en esta crisis institucional que vivimos, la gente no se sienta representada por el Estado. Llegamos como sociedad a la ola privatizadora del los 90 con un Estado y empresas del Estado deficientes, corruptas e ineficaces. No repetir errores del pasado, crear lo nuevo, es hoy lo que viene a plantear a las y los argentinos el interbloqueo del FAP.

9. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CHIENO

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Encuentro necesario recalcar que un objetivo fundamental detrás de la decisión de la presidenta al colocar a YPF nuevamente bajo órbita estatal, es el de superar el discurso privatista que convirtió a YPF en nada más que una empresa multinacional con fines de lucro. La nueva YPF debe entenderse como un instrumento nacional a favor de las banderas históricas del peronismo: soberanía política, justicia social y sobre todo, independencia económica.

Soberanía política e independencia económica, especialmente por la función de los hidrocarburos como recursos estratégicos para la construcción de un Estado desarrollado y no como mero commodities para el lucro de unos pocos. Así, la Argentina avanza en el camino del no “aislamiento” en la esfera internacional, como dicen quienes pretenden que nuestro país continúe siendo una COLONIA, sino de la NO DEPENDENCIA de la esfera internacional, el cual debería ser un objetivo preponderante para todos los Estados. Progresar en el autoabastecimiento a la vez que se mantienen los precios reales y no elevados artificialmente, contribuye a aumentar la competitividad del país en mercados externos.

Si la Argentina consigue autoabastecerse de combustibles en forma sustentable, también estaremos construyendo futuro para las generaciones venideras. Por esto, resulta fundamental que la planificación de la nueva YPF trascienda coyunturas partidarias: el autoabastecimiento energético es objetivo prioritario en el crecimiento económico de las próximas décadas.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

La decisión de nuestra presidenta está también en consonancia con el tercer precepto justicialista, la Justicia Social, por el compromiso asumido tanto por la presidenta como por los actuales y futuros miembros del directorio de la nueva YPF de expandir la producción y el stock de crudo, logrando así que los productos derivados del petróleo sean accesibles tanto por cantidad producida como por precio ofrecido al consumidor; también el aumento en la disponibilidad de puestos de trabajo en la permanente lucha para combatir la desocupación.

Son objetivos fundamentales de esta ley, tanto el reducir costos innecesarios, como el diseñar mecanismos que permitan evitar la fluctuación constante de precios, a la vez que impulsar la industria nacional para aprovechamiento de toda la población. No hay que olvidar que esta variación de precios afecta directamente al salario de la gran mayoría de los argentinos.

Como planteó nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner, “trabajemos juntos, unidos y organizados, para construir un país mejor”.

10. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA COMELLI

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Como diputada neuquina quiero adelantar mi voto positivo al proyecto de ley de expropiación parcial de YPF S.A., en el marco de una estrategia macro para lograr el autoabastecimiento energético.

La actividad hidrocarburífera en mi provincia tiene un rol protagónico y preponderante, desde su misma creación en la década del 50, y determinó la conformación económica, social y cultural de nuestros pueblos. Fuimos testigos a lo largo de la historia de cómo se tomaban las decisiones sobre los recursos naturales, y se creaban asentamientos y ciudades y así también se los abandonaba a su suerte.

Me viene a la memoria lo ocurrido en Cutral Có y Plaza Huincul, pueblos testigos de la privatización de YPF, cuya crisis social miró para otro lado el gobierno nacional de los 90. Recuerdo también que hasta el 2008, cada ley de presupuesto nacional incorporaba un artículo que prometía que el gobierno nacional crearía regímenes especiales de promoción para estas zonas devastadas por las privatizaciones. Pero nada de eso ocurrió. Incluso, seguimos bregando por los derechos de los ex trabajadores de YPF, tanto en relación con un resarcimiento vía propiedad participada como con el régimen de jubilación especial, proyectos que impulsamos desde hace años.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

No quiero detenerme sólo en el pasado. Quiero agregar a este debate una reflexión hacia el futuro. Esta medida, si se la toma en forma aislada, no va a solucionar integralmente el problema de la crisis energética. No basta sólo con discutir las causas, sino que hay que aportar soluciones.

En mi discurso quiero mencionar algunos ejes para tal fin. Uno de ellos es el que viene abogando mi provincia desde hace cinco años, a partir de la gestión del gobernador Jorge Sapag, que es el desarrollo del gas y del petróleo ubicados en yacimientos no convencionales, conocidos como shale oil y shale gas. Por eso, adjunto a este discurso el plan quinquenal presentado por Sapag.

El segundo aspecto es un llamado a la reflexión sobre la diversificación de la matriz energética, una cuenta pendiente que aún tenemos los argentinos en este proceso de desarrollo económico. Con respecto a los hidrocarburos ubicados en yacimientos no convencionales y a la luz de los recientes descubrimientos en la formación geológica Vaca Muerta ubicada en la cuenca neuquina –que YPF tendrá la posibilidad de explotar–, es importante destacar que las inversiones en exploración que se realicen representarán un punto de inflexión en la recuperación de las reservas. La caída constante de las mismas, cuyas causas ya han sido analizadas en este debate, demanda fuertes inversiones en exploración para revertir su tendencia a la baja.

La cuenca neuquina tiene un futuro promisorio para el desarrollo estratégico de la Nación e impulsará los objetivos de soberanía energética que todos propiciamos en este debate –ya se ha delineado una cuenca de 4.000 kilómetros cuadrados en petróleo no convencional y de 3.200 kilómetros cuadrados en gas no convencional–. No lo hará YPF solamente, claro está. Como bien se ha dicho, se requiere del esfuerzo del capital privado y público y mi provincia, en este aspecto, cuenta con una empresa como Gas y Petróleo S.A., titular de numerosas áreas de exploración, que en forma asociada también contribuirá al desarrollo de los objetivos que se plantea este proyecto de ley.

Pero este Congreso tiene que contribuir al desarrollo de estas nuevas tecnologías de exploración y explotación de hidrocarburos, para hacer viable su concreción. Sus elevados costos implican que debemos desarrollar mecanismos de promoción económica que nos permitan atraer las inversiones al sector. Se necesita una política de precios en boca de pozo para estos hidrocarburos no convencionales, que otorgue viabilidad económica a las fuertes inversiones y que genere las condiciones de negocios propicias para la inversión en este caso. No nos olvidemos de que a través de la política nacional de precios de boca de pozo mi provincia ha subsidiado el proceso de reindustrialización nacional de la última década. En este sentido, no podemos dejar de mencionar la necesidad de capacitar recursos humanos en la zona, toda vez que el desarrollo de estas nuevas tecnologías implica una modernización de los conocimientos existentes en la actividad.

Otro de los aspectos fundamentales es la necesidad de definir una política de Estado en materia de energías renovables y éste es el ámbito propicio para ello. Si bien se avanzó mucho al respecto, las metas que nos impusimos como nación nos obligan a hacer una revisión del porqué de tan escasos resultados en materia de generación de energía a partir de fuentes renovables y, si es posible, corregir el rumbo.

La matriz energética argentina está fuertemente dominada por los hidrocarburos (90,8 %



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

del consumo energético primario) y una manera de contribuir al logro del autoabastecimiento -equilibrando la balanza de exportaciones e importaciones-, es crear una política de Estado de expansión y diversificación de la matriz energética. Una política de Estado que se proyecte en el tiempo tiene que pensar la República a 10 o 20 años. Debemos reducir nuestra dependencia energética de los hidrocarburos, como una estrategia de desarrollo regional y global. Todos sabemos lo que ocurre con economías fuertemente dependientes del petróleo, cuando son afectadas por crisis políticas como en Estados Unidos o los conflictos bélicos en Medio Oriente.

El Estado tiene que ser protagonista en el desarrollo de las energías renovables a partir de la creación de las condiciones económicas necesarias para dotarlas de competitividad. Debemos crear polos de desarrollo tecnológico para la investigación y construcción de bienes de capital aplicados a estas energías.

Bien sabemos que en materia de precios las energías renovables están lejos de competir con las centrales térmicas en el mercado argentino. Pero ello no implica que no puedan promoverse medidas para acercar las cifras y crear mecanismos de complementación entre las distintas fuentes energéticas.

Necesitamos crear instrumentos fiscales que atraigan fuertemente la inversión en energías alternativas para equilibrar la balanza comercial. Hoy, lo vemos como una obligación ineludible porque repercute en el escenario macroeconómico.

La soberanía energética es un factor estratégico en el desarrollo de la economía y espero que se entienda que el concepto debe incluir el desarrollo de una fuerte política de Estado de compromiso con las nuevas tecnologías en materia de hidrocarburos no convencionales y de energías renovables

Tenemos un gran desafío y por supuesto el desarrollo tiene que ser sustentable, sostenible, con respeto por nuestro ambiente, por nuestros acuíferos. Hay leyes nacionales y provinciales que son celosos guardianes de nuestros recursos, de todos los recursos. Una política ambientalmente responsable respecto de la explotación de estos recursos emergentes se basa en:

- Tecnología. La aplicación de las tecnologías y prácticas adecuadas debería evitar afectaciones ambientales indeseadas y mitigar sus impactos.
- Regulación. El Estado debe emitir normas y regulaciones precisas y científicamente fundadas y ejercer el consabido control.
- Transparencia. La actividad debe ejercerse en un marco de transparencia. La sociedad debe ser informada adecuadamente para evitar prejuicios e impugnaciones basadas en el desconocimiento. Una nación se construye soberanamente con agua, con energía, con gas, con petróleo, con educación, con alimentos, con trabajo y, sobre todo, cuidando el planeta.

Por último, un tema no menos importante es el objetivo de equidad social y creación de empleo del artículo primero. Sin duda es trascendente y mucho más para estos pueblos como los de la Patagonia que han vivido y se han desarrollado alrededor las cigüeñas petroleras.

Por todo lo expuesto y como diputada neuquina, de una provincia esencialmente petrolera, voy a votar positivamente por el proyecto de ley de expropiación parcial de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

YPF S.A. como pilar de una política tendiente a lograr el autoabastecimiento y el ejercicio de la soberanía.

PLAN QUINQUENAL

2012 – 2016

“Neuquén Más Energía”

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

Objetivo

“Incrementar la producción nacional de petróleo y gas, implementando medidas que promuevan la actividad hidrocarburífera nacional, aumenten las reservas de petróleo y gas, generen valor agregado, disminuyan la importación de hidrocarburos y reduzca el déficit comercial energético.”

Matriz de Consumo Energético Argentino

- Consumo de Energía concentrado en hidrocarburos.
- Recursos no renovables y escasos, que alcanzan el 90,8% del total del consumo energético primario en la Argentina.

Situación Actual

Reservas Comprobadas de Gas y Horizonte de Producción – Total Argentina

Experiencia Internacional

Producción de gas natural años 1990-2035. En millones de m3 por año.

Shale en Estados Unidos: El Impacto en el Gas Natural

Shale en Estados Unidos: El Impacto en Petróleo

Cuenca Neuquina vs. Otras Cuencas

Evolución e incorporación de reservas en Neuquén

PETRÓLEO

Situación Actual y Pronóstico sin Plan Quinquenal

PETRÓLEO

Plan Quinquenal



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Producción Total de Neuquén con desarrollo de Petróleo No Convencional

Área de desarrollo de Shale Oil Neuquén 4.200 km²

Petróleo No Convencional Neuquén. Inversiones Previstas en Plan NQN+E

Petróleo No Convencional Neuquén

GAS NATURAL

Situación Actual y Pronóstico sin Plan Quinquenal

GAS NATURAL

Plan Quinquenal

Área de desarrollo de Shale Gas Neuquén 3.000 km²

Producción Total Neuquén con desarrollo de Gas No Convencional

Gas No Convencional. Inversiones Necesarias

Impacto del Desarrollo de Gas y Petróleo No Convencional PLAN NQN+E.
Contribución al Balance de Divisas.

Plan de Desarrollo Petróleo + Gas. Impacto Fiscal

Ingresos a la Nación en concepto de Impuesto a las ganancias e ITF y a las Provincias en concepto de regalías, Imp. Sellos e IIBB.

Requerimiento de Equipos de Perforación Adicionales

Insumos necesarios para el desarrollo del Plan NQN+E

Trabajadores Necesarios para el desarrollo del Plan Quinquenal

Neuquén Más Energía

Condiciones necesarias para el desarrollo del Plan NQN + E

Para el GAS NO CONVENCIONAL

- Establecer pautas claras, simples y estables para el PLAN QUINQUENAL.
- Asegurar precios en boca de pozo que viabilicen estos proyectos desde el punto de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

vista económico (inferiores a los de importación de manera de generar un ahorro neto al país y sustitución de importaciones) y que permitan la participación de capitales e inversiones de riesgo.

- El gas que sustituya importaciones tendrá un precio equivalente de importación de Bolivia menos un descuento.
- Diferimiento de IVA y/o Ganancias y/o amortización acelerada para Inversiones de Riesgo.
- Limitar el redireccionamiento de la producción de gas.
- Habilitar los permisos de importación automáticos para los bienes de capital y suministros necesarios para desarrollar la actividad (hasta lograr el autoabastecimiento).
- Implementar acciones inmediatas para la capacitación de los recursos humanos.

11. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CONTI

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

La presente exposición se basa en los tres temas centrales del proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional (N° de expediente 29-S.-2012): (1) la intervención temporaria de YPF; (2) naturaleza jurídica de los directores de YPF una vez sancionada la expropiación y (3) exclusión de YPF S.A. respecto de los controles previstos por el art. 85 CN y por la ley 24.156 (Ley de Administración Financiera) en cuanto al control externo de la AGN.

I.- LA INTERVENCIÓN TEMPORARIA DE YPF

Aun cuando el decreto 530/2012 de intervención de YPF S.A. y el decreto 557/2012 de intervención de Repsol YPF Gas S.A. no lo mencionen en forma expresa, pueden encuadrarse legalmente dentro de las atribuciones que la ley 21.499 establece en los arts. 57, 58, 59 y ss., denominadas como “ocupación temporánea”. Estas normas disponen:

“ARTICULO 57. — Cuando por razones de utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinados, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos, podrá recurrirse a la ocupación temporánea.”

“ARTICULO 58. — La ocupación temporánea puede responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa, o súbita, o a una necesidad normal no inminente.”

“ARTICULO 59. — La ocupación temporánea anormal, puede ser dispuesta



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

directamente por la autoridad administrativa, y no dará lugar a indemnización alguna, salvo la reparación de los daños o deterioros que se causaren a la cosa o el pago de daños y perjuicios debidos por el uso posterior de la cosa en menesteres ajenos a los que estrictamente determinaron su ocupación.”

GELLI explica sobre este instituto que “[l]a ley 21.499 admite la expropiación del uso de la cosa. Con un criterio de razonabilidad, el Estado toma, de la propiedad, sólo lo estrictamente necesario. En el caso de la ocupación temporánea normal no existen mayores problemas pues la utilidad del uso del bien por un plazo determinado es declarada por ley e indemnizada. En cambio, la ocupación anormal, opera sin ley, puede ser dispuesta por la autoridad administrativa y no recibe indemnización alguna, salvo los daños causados a la cosa. Dado que la expropiación temporánea anormal procede ante una necesidad imperiosa, urgente o súbita, es razonable no exigir ley pero no siempre resultará equitativo prescindir de la indemnización.”

De esta forma, dado que por un principio jurídico básico, quien puede lo más puede lo menos, debe considerarse que en este caso, el PEN se encuentra facultado para intervenir por razones de urgencia hasta que se sancione la expropiación mediante ley formal del Congreso puesto que, de por sí, ya podía ocupar temporáneamente por dichas razones. En este caso, hay un actuar unificado y coherente que intenta precaver perjuicios mayores que podrían haberse originado de la demora en la ocupación de YPF S.A.

II.- LOS DIRECTORES

Respecto de la naturaleza jurídica de los directores representantes de las acciones del Estado nacional, cabe remitirse a lo mencionado por la doctrina nacional.

En este sentido, MAIRAL ha señalado que, “tratándose de sociedades anónimas con participación mayoritaria estatal y de sociedades de economía mixta, la Procuración del Tesoro [...] consideró que los directores que representan el capital estatal no están vinculados con la Administración por una relación de empleo público. Para ello adujo los siguientes argumentos: i) en el caso de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, su carácter de empresa privada y la aplicación de la legislación comercial, así como la inexistencia de facultades disciplinarias de parte del Estado, el que sólo puede recurrir a la remoción del director mediante los mecanismos propios de la normativa societaria; ii) en el caso de la sociedad de economía mixta, su carácter “no estatal” y la existencia de una relación de mandato entre el Estado y sus representantes en dicha sociedad según la opinión de caracterizada parte de la doctrina.”

No obstante ello, este autor advierte sobre “la existencia de un precedente judicial en el cual se consideró funcionario público al presidente y a los directores designados por el Estado, en una sociedad de economía mixta que tenía a su cargo la prestación de un servicio público.”

MAIRAL, luego de citar el dictamen de la Procuración del Tesoro mencionado, afirma: “[p]or nuestra parte consideramos que es imposible sostener el carácter de funcionario público de estos directores dado que los mismos se rigen por las normas de la Ley de Sociedades cuyos arts. 59 y 274 fijan un régimen especial de responsabilidades ajeno a



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

la responsabilidad disciplinaria del derecho administrativo. Es incorrecto exigir a una persona la diligencia de un buen hombre de negocios y al mismo tiempo sujetarlo a responsabilidades de índole administrativa dado que la primera exige una celeridad en las decisiones y una asunción de riesgos que no son propias de la actividad burocrática.” Vale asimismo trasladar a los directores de sociedades anónimas con participación estatal, las conclusiones a las que MAIRAL llegó para los directores de las sociedades del Estado, al afirmar que “es claro que no se aplica a dichos directores la ley 22.140 (Adla, XL-A, 21) que establece el régimen de la función pública ni tampoco, atento su exclusión expresa prevista por la ley 20.705, la Ley de Contabilidad en cuanto fija normas sobre responsabilidad de los estipendiarios de la Nación. Tampoco están sujetos al deber de obediencia ya que están excluidos de toda relación jerárquica, ni gozan de estabilidad dado que, como se ha dicho, de acuerdo con la Ley de Sociedades sus mandatos son revocables "ad nutum".” En este sentido, MAIRAL concluye que estos directores “no tienen responsabilidad administrativa ni están sujetos a sanciones disciplinarias.” Pero, ello no es todo. “[c]omo consecuencia aún más importante, no se les aplican las disposiciones del Código Penal que rigen para los funcionarios públicos. A este respecto conviene detenerse en el análisis.”

”Es sabido que de acuerdo con su art. 77, el Cód. Penal considera funcionario público o empleado público a "todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente".”

”En este caso nos encontramos con personas que han sido designadas en el ámbito de una asamblea regida por la Ley de Sociedades por lo cual no cabe considerar que existe a estos efectos designación por autoridad competente. Por otra parte, tampoco corresponde desde un punto de vista sustancial otorgar a los directivos de una sociedad del Estado la protección, ni imponerles las obligaciones que el Código Penal reserva para quienes ejercen funciones gubernamentales administrativas.”

”En cuanto a la protección, consideramos que no es correcto establecer sanciones criminales para quienes desobedezcan las órdenes dadas por los directores de una sociedad del Estado como de otra manera podría interpretarse el art. 240 del Cód. Penal. En el mismo sentido tampoco corresponde proteger la actuación de estos directivos, que actúan la más de las veces en el campo del comercio y de la industria, mediante la figura del desacato que pena la ofensa al honor o decoro dirigida al funcionario a causa o en ejercicio de sus funciones según el art. 244 del Cód. Penal.”

”Pero, recíprocamente, tampoco procede aplicar al director de las sociedades del Estado las normas del título XI de la parte especial del Código Penal que establecen delitos específicos para los funcionarios públicos como ser la malversación de caudales públicos, la omisión de actuar, la demora en el pago, el abuso de autoridad, etcétera.”

”En este sentido cabe agregar que dicho título XI reúne dentro de sí gran variedad de delitos "contra la administración pública" para cuya tipificación se ha tomado en cuenta la regularidad funcional de los poderes clásicos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no la actividad empresarial que el mismo pueda realizar. De allí que el catálogo de infracciones se refiera a los funcionarios -cuyo querer y obrar se imputan al Estado- que con su incumplimiento entorpecen el regular funcionamiento de dichos



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

poderes y a los particulares que también lo obstruyen únicamente cuando el tipo incriminado admite al particular como sujeto activo (caso del art. 237. Cód. Penal) o lo equipara expresamente con los funcionarios públicos (arts. 239 y 265, Cód. Penal)."

"Esto no significa que queden impunes conductas disvaliosas sino simplemente que, en su caso, serán de aplicación otras figuras del Código Penal: art. 110 (injuria), 172 (estafa), 173, inc. 7º y 174, inc. 5º (defraudaciones), 301 (actos antiestatutarios), etcétera."

"Mención especial merece el delito de malversación de caudales públicos que tal como lo fija el art. 260 del Cód. Penal consiste en dar "a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados".

"Es obvio que si bien la aplicación de fondos de una partida presupuestaria a un destino distinto al dado a esa partida puede implicar este delito en una sede administrativa, lo mismo no puede ocurrir en una sociedad regida por las normas de la Ley de Sociedades, salvo que se atente contra la rapidez de decisión y flexibilidad necesarias en las actividades comerciales."

"Por otra parte el Directorio, como órgano de derecho privado, goza de capacidad, a diferencia de la competencia que ejerce el funcionario público y que consiste en una obligación, y no solamente en una facultad, para actuar."

"No procede, pues, sancionar, por ejemplo, al director que en los términos del art. 264 del Cód. Penal "teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario" ni tampoco en caso al que "retardare hacer algún acto de su oficio" (art. 249, Cód. Penal), o incurriere en omisión de ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere (art. 248, Cód. Penal)."

Las conclusiones efectuadas por MAIRAL hace más de 30 años respecto de los directores de las sociedades del Estado son plenamente aplicables a los directores de las sociedades anónimas con participación estatal, por una razón obvia. Si un director de una S.E. no es un funcionario público, mucho menos puede serlo un director de una S.A. en los términos de la ley 19.550 (Ley de Sociedades) con cierta participación estatal. En este sentido, CASSAGNE llega a una conclusión similar a la de MAIRAL.

III.- EL CONTROL INTERNO Y EXTERNO

El art. 15 del proyecto PEN establece:

"Para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónima continuará operando como una sociedad anónima abierta, en los términos del capítulo II, sección V, de la ley 19.550 y normas concordantes, no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los estados provinciales tengan participación."

A primera vista pareciera que esta norma entra en contradicción con el art. 85 de la Constitución Nacional cuyo texto dispone:

"El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos será una atribución propia del Poder Legislativo.

"El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación.”

”Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.”

”Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.”

Ahora bien, cabe resaltar que esta última norma establece concretamente el mecanismo del control externo del SECTOR PÚBLICO NACIONAL.

Para desentrañar qué se entiende por sector público nacional, debemos recurrir al art. 8 de la Ley 24.156 (Ley de Administración Financiera), que dispone:

“Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que a tal efecto está integrado por:

”a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.

”b) Empresas y sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

”c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.

”d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.

”Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación está a cargo del Estado nacional a través de sus Jurisdicciones o Entidades.”

Citadas todas las normas aplicables, vale destacar que la composición de YPF SA no parece encuadrar en ninguno de los tipos establecidos por el art. 8 mencionado, básicamente porque se trata de una sociedad anónima constituida en los términos del capítulo II, sección V de la ley 19.550, que además tiene una composición accionaria inter-estadual.

Y he aquí donde radica la diferencia.

La Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho que en determinados casos, cuando



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

el Estado nacional participa de una sociedad “cuyos socios son entes de distinta jurisdicción constitucional como el caso del CEAMSE” “se ha admitido la inaplicabilidad de algunas normas administrativas nacionales a los entes inter-estadales (Dictámenes 118:238; 142:202; 146:278 y 155:329, especialmente 347). Ello así, por cuanto el derecho administrativo es por esencia y constitucionalmente un derecho local, y por ende no podría aplicarse al ente formado por los estados locales –cada uno de ellos facultados para darse su propio régimen administrativo– el derecho local de alguno de ellos. No obstante, Gordillo propicia la aplicación de las normas administrativas nacionales –entre ellas las vinculadas a las contrataciones– pero en forma supletoria, ya que reconoce la facultad al ente interestadual de darse sus propias normas administrativas (“Empresas del Estado”, pág. 138).”

Siguiendo esta doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación cabe concluir entonces:

- El art. 85 CN y la ley 24.156 en cuanto al control externo de la AGN se aplican sólo al sector público nacional, siendo normas de derecho administrativo de orden nacional.
- El derecho administrativo es esencial y constitucionalmente un derecho local.
- A partir de su expropiación, YPF SA se convertirá en una sociedad anónima interestadual.
- Este hecho (ser una sociedad anónima interestadual) determina, prima facie, la inaplicabilidad del régimen administrativo nacional o el de alguna provincia participante, ya que no podría aplicarse el derecho local de uno de los socios al resto de los estados locales, ya que todos los estados locales así como el Estado nacional tienen las mismas facultades constitucionales propias para dictarse su propio régimen administrativo.
- Atento ello, el propio ente interestadual deberá dictarse sus propias normas administrativas y, sólo ante la ausencia de las mismas y en forma supletoria, en caso de vacío, podría recurrirse al derecho administrativo nacional.
- Sin embargo, este último supuesto de ausencia de regulación propia de la sociedad interestadual no se da en el presente caso, ya que el art. 15 del proyecto PEN excluye expresamente a YPF S.A. de las normas administrativas de administración, gestión y control de las empresas y sociedades del Estado nacional o de las provincias que tengan participación. Y, justamente, el art. 16 del proyecto PEN establece los principios sobre los que se deberá sustentar esta gestión y control, siendo que el art. 17 del proyecto PEN, por su parte, regula sobre las fuentes de financiamiento.

A mayor abundamiento, valga agregar que la doctrina tiene señalado “que la utilización de la norma jurídica de la Sociedad Anónima permite realizar una gestión eficiente en el logro del objetivo buscado (industrial o comercial) al no encontrarse limitada por las reglas propias de los entes públicos estatales (derecho administrativo) especialmente por la existencia de inadecuados controles, que si bien pueden ser válidos para el derecho público resultan un freno para la rapidez y eficiencia que requiere una empresa comercial.”



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

12. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FAVARIO

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Las restricciones en el tiempo que tengo para expresar mi posición en el curso del debate me obligaron a solicitar esta inserción y, al mismo tiempo, poder hacer una reflexión al respecto. Parece de antología; el domingo, durante el transcurso de Fútbol para Todos, un comentarista tuvo más tiempo para dedicarse a hablar a favor del proyecto de YPF que el que yo dispongo desde la banca de diputado nacional. La referencia marca la realidad lamentable del Parlamento argentino.

Dijimos que, a nuestro entender, se ha violado groseramente la Constitución y la ley. Ya señalé el prepotente incumplimiento del artículo 17 de la Constitución en lo que hace a la expropiación y a la discriminación inexplicable de expropiar solamente las acciones de Repsol y salvar las del grupo Petersen (Ezquenazi) lo que constituye un incumplimiento evidente del tratado de inversiones celebrado con España.

Pero no es sólo eso. La intervención a la sociedad dispuesta por medio de un DNU (decreto de necesidad y urgencia) no se ajusta a derecho. Se trata de una sociedad anónima sujeta a normas del derecho privado; la intervención sólo puede hacerse por decisión judicial. El Poder Ejecutivo no tiene competencia para ello. Se podía pedir como medida cautelar a la Justicia, pero la presidente también acá optó por violar la ley. Lo cierto y lo concreto es que los medios ilegítimos de expropiar y de intervenir no va a salvar la falta de inversiones, porque la verdad es que se están generando nuevos problemas para nuevas y necesarias inversiones. Hacen todo lo posible para estar cada vez más relegados entre los países de América Latina que reciben inversiones. En el 2011, Brasil recibió U\$S 65.500 millones, México U\$S 17.900 millones, Colombia U\$S 14.400, Perú U\$S 7900, y la Argentina U\$S 6300. Sigamos así, que cada vez estamos mejor.

Dijimos que creemos en la necesidad de diseñar una política de Estado en materia hidrocarburífera en la estuviera incluida YPF, para que haya controles legales y del Congreso por medio de la Auditoría General de la Nación, para que se hagan licitaciones públicas y contrataciones transparentes y se termine con las contrataciones directas que constituyen una puerta abierta para la corrupción que conocen en demasía numerosos funcionarios de este gobierno.

Pero todo esto no se va a dar en la nueva YPF que será una nueva dependencia del gobierno exenta expresamente de controles y sin licitaciones.

El fracaso estrepitoso de la política energética de este gobierno se evidencia en el hecho



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

que este año vamos a importar energía que nos costará entre U\$S 12.000 millones y U\$S 14.000 millones cuando antes éramos exportadores.

El fracaso del gobierno en la materia se demuestra también con ENARSA, la empresa que inventó Néstor Kirchner para terciar y competir con las empresas multinacionales, con participación de las provincias y de capital privado. Las provincias jamás participaron y los privados nunca fueron convocados. Conclusión: ENARSA no sirvió para nada; no abrió un solo pozo ni realizó una sola exploración, solamente fue una mera intermediaria para importar combustible para lo cual se llevó 10.000 millones en subsidios sin control. El gobierno le había adjudicado en exclusividad la exploración petrolera en aguas profundas y tampoco hizo nada. ¡Que ejemplo de eficiencia!, y ahora estos personajes que dirigieron la empresa son los mismos que van a dirigir YPF.

Si el gobierno kirchnerista fracasó en la gestión energética hasta sumirnos en esta crisis, nosotros no vamos a ser tan ingenuos de creer que en lo futuro va a tener éxito.

Como representante de un partido de auténtica vocación federalista no puedo dejar de señalar que con esta ley la Argentina unitaria vuelve a ganarle a la Argentina federal. A pesar de ser las titulares de dominio del petróleo, conforme el art. 124 de la Constitución, las provincias por la vía de la sindicación pasarían a ser dependientes del Poder Ejecutivo. La regulación de las áreas petroleras que debe ser facultad de las provincias pasará a ser facultad de la Nación, con lo cual las provincias pierden también la recaudación.

En lo que hace a las provincias no petroleras, como la de Santa Fe, que es mi provincia tendrá la función honorífica de sentarse en el Consejo Federal de Hidrocarburos y, a pesar de tener plantas petroleras, a pesar de contribuir con sus recursos a la expropiación, funcionamiento y explotación de YPF, no participarán en la distribución de dividendos de la empresa ¡Después nos rasgamos las vestiduras hablando de federalismo! Ha llegado a tal extremo el ataque al federalismo argentino, que algún adscripto al bloque oficialista llegó a decir el otro día en la reunión conjunta de Comisiones, que la reforma constitucional neoliberal le hizo perder a la Nación en manos de las provincias el poder de los recursos naturales, lo que ahora se recupera por medio del mecanismo de la sindicación. ¡A confesión de parte relevo de prueba para demostrar el ataque avieso al federalismo argentino! Claro, ese señor diputado había olvidado que fue la hoy presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la informante del dictamen de comisión que en la Convención Nacional Constituyente propuso la redacción del artículo que consagró el principio federal en nuestra Constitución Nacional.

Se incentiva la exaltación de sentimientos emocionales; se quiere simular una epopeya heroica levantando públicamente la bandera de la soberanía que le dio éxitos políticos recientes a la señora presidente con motivo de un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas. La soberanía en este tema es una declamación y una expresión voluntarista. ¿De qué soberanía estamos hablando si YPF tiene solamente el 30% de producción y el 70% restante le corresponde a otras empresas con capitales extranjeros? ¿De qué soberanía nos hablan si de esa empresa que genera el 30% de nuestra producción vamos a expropiar solamente el 51% de las acciones? ¿De qué soberanía nos hablan si el dominio de los recursos naturales le corresponde a las provincias? Para que haya



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

soberanía es prioritario recuperar la capacidad de exploración y explotación; hay que recuperar el autoabastecimiento que se perdió con los gobiernos de los Kirchner. La realidad, la esencia del proyecto que estamos discutiendo, no pasa por las reacciones emocionales que despierta, al extremo que se exhiben resultados de encuestas populares como si fuesen garantía del éxito futuro de la empresa parcialmente recuperada. La realidad del proyecto – digo – a mi entender tiene dos razones: una, la necesidad de la caja a la que no le alcanzan los recursos de la ANSES, ni el uso de las reservas del Banco Central porque ahora, inexorablemente, también tienen que afrontar el gasto monstruoso que generan las importaciones energéticas para afrontar los requerimientos internos y segundo, porque la magnitud del escándalo en que se encuentra involucrado el vicepresidente de la Nación necesitaba de un episodio de esta trascendencia nacional para tratar de diluirlo.

12. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FAVARIO

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Las restricciones en el tiempo que tengo para expresar mi posición en el curso del debate me obligaron a solicitar esta inserción y, al mismo tiempo, poder hacer una reflexión al respecto. Parece de antología; el domingo, durante el transcurso de Fútbol para Todos, un comentarista tuvo más tiempo para dedicarse a hablar a favor del proyecto de YPF que el que yo dispongo desde la banca de diputado nacional. La referencia marca la realidad lamentable del Parlamento argentino.

Dijimos que, a nuestro entender, se ha violado groseramente la Constitución y la ley. Ya señalé el prepotente incumplimiento del artículo 17 de la Constitución en lo que hace a la expropiación y a la discriminación inexplicable de expropiar solamente las acciones de Repsol y salvar las del grupo Petersen (Ezquenazi) lo que constituye un incumplimiento evidente del tratado de inversiones celebrado con España.

Pero no es sólo eso. La intervención a la sociedad dispuesta por medio de un DNU (decreto de necesidad y urgencia) no se ajusta a derecho. Se trata de una sociedad anónima sujeta a normas del derecho privado; la intervención sólo puede hacerse por decisión judicial. El Poder Ejecutivo no tiene competencia para ello. Se podía pedir como medida cautelar a la Justicia, pero la presidente también acá optó por violar la ley. Lo cierto y lo concreto es que los medios ilegítimos de expropiar y de intervenir no va a salvar la falta de inversiones, porque la verdad es que se están generando nuevos problemas para nuevas y necesarias inversiones. Hacen todo lo posible para estar cada



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

vez más relegados entre los países de América Latina que reciben inversiones. En el 2011, Brasil recibió U\$S 65.500 millones, México U\$S 17.900 millones, Colombia U\$S 14.400, Perú U\$S 7900, y la Argentina U\$S 6300. Sigamos así, que cada vez estamos mejor.

Dijimos que creemos en la necesidad de diseñar una política de Estado en materia hidrocarburífera en la estuviera incluida YPF, para que haya controles legales y del Congreso por medio de la Auditoría General de la Nación, para que se hagan licitaciones públicas y contrataciones transparentes y se termine con las contrataciones directas que constituyen una puerta abierta para la corrupción que conocen en demasía numerosos funcionarios de este gobierno.

Pero todo esto no se va a dar en la nueva YPF que será una nueva dependencia del gobierno exenta expresamente de controles y sin licitaciones.

El fracaso estrepitoso de la política energética de este gobierno se evidencia en el hecho que este año vamos a importar energía que nos costará entre U\$S 12.000 millones y U\$S 14.000 millones cuando antes éramos exportadores.

El fracaso del gobierno en la materia se demuestra también con ENARSA, la empresa que inventó Néstor Kirchner para terciar y competir con las empresas multinacionales, con participación de las provincias y de capital privado. Las provincias jamás participaron y los privados nunca fueron convocados. Conclusión: ENARSA no sirvió para nada; no abrió un solo pozo ni realizó una sola exploración, solamente fue una mera intermediaria para importar combustible para lo cual se llevó 10.000 millones en subsidios sin control. El gobierno le había adjudicado en exclusividad la exploración petrolera en aguas profundas y tampoco hizo nada. ¡Que ejemplo de eficiencia!, y ahora estos personajes que dirigieron la empresa son los mismos que van a dirigir YPF.

Si el gobierno kirchnerista fracasó en la gestión energética hasta sumirnos en esta crisis, nosotros no vamos a ser tan ingenuos de creer que en lo futuro va a tener éxito.

Como representante de un partido de auténtica vocación federalista no puedo dejar de señalar que con esta ley la Argentina unitaria vuelve a ganarle a la Argentina federal. A pesar de ser las titulares de dominio del petróleo, conforme el art. 124 de la Constitución, las provincias por la vía de la sindicación pasarían a ser dependientes del Poder Ejecutivo. La regulación de las áreas petroleras que debe ser facultad de las provincias pasará a ser facultad de la Nación, con lo cual las provincias pierden también la recaudación.

En lo que hace a las provincias no petroleras, como la de Santa Fe, que es mi provincia tendrá la función honorífica de sentarse en el Consejo Federal de Hidrocarburos y, a pesar de tener plantas petroleras, a pesar de contribuir con sus recursos a la expropiación, funcionamiento y explotación de YPF, no participarán en la distribución de dividendos de la empresa ¡Después nos rasgamos las vestiduras hablando de federalismo! Ha llegado a tal extremo el ataque al federalismo argentino, que algún adscripto al bloque oficialista llegó a decir el otro día en la reunión conjunta de Comisiones, que la reforma constitucional neoliberal le hizo perder a la Nación en manos de las provincias el poder de los recursos naturales, lo que ahora se recupera por medio del mecanismo de la sindicación. ¡A confesión de parte relevo de prueba para demostrar el ataque avieso al federalismo argentino! Claro, ese señor diputado había



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

olvidado que fue la hoy presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la informante del dictamen de comisión que en la Convención Nacional Constituyente propuso la redacción del artículo que consagró el principio federal en nuestra Constitución Nacional.

Se incentiva la exaltación de sentimientos emocionales; se quiere simular una epopeya heroica levantando públicamente la bandera de la soberanía que le dio éxitos políticos recientes a la señora presidente con motivo de un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas. La soberanía en este tema es una declamación y una expresión voluntarista. ¿De qué soberanía estamos hablando si YPF tiene solamente el 30% de producción y el 70% restante le corresponde a otras empresas con capitales extranjeros? ¿De qué soberanía nos hablan si de esa empresa que genera el 30% de nuestra producción vamos a expropiar solamente el 51% de las acciones? ¿De qué soberanía nos hablan si el dominio de los recursos naturales le corresponde a las provincias? Para que haya soberanía es prioritario recuperar la capacidad de exploración y explotación; hay que recuperar el autoabastecimiento que se perdió con los gobiernos de los Kirchner.

La realidad, la esencia del proyecto que estamos discutiendo, no pasa por las reacciones emocionales que despierta, al extremo que se exhiben resultados de encuestas populares como si fuesen garantía del éxito futuro de la empresa parcialmente recuperada. La realidad del proyecto – digo – a mi entender tiene dos razones: una, la necesidad de la caja a la que no le alcanzan los recursos de la ANSES, ni el uso de las reservas del Banco Central porque ahora, inexorablemente, también tienen que afrontar el gasto monstruoso que generan las importaciones energéticas para afrontar los requerimientos internos y segundo, porque la magnitud del escándalo en que se encuentra involucrado el vicepresidente de la Nación necesitaba de un episodio de esta trascendencia nacional para tratar de diluirlo.

13. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA FERRÁ DE BARTOL

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con motivo de presentar el proyecto de ley que tratamos en el día de la fecha, expresó el pasado 16 de abril: "Este tubito que ustedes ven allí corresponde al pozo número dos descubierto el 13 de diciembre de 1907 en Comodoro Rivadavia. Me lo regaló la familia Bernal, Federico Bernal, que ha escrito libros sobre este tema. Luego, más tarde, otro presidente, Hipólito Yrigoyen,



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales que desarrolló desde entonces una tarea muy importante. YPF es de todos, quiero que lo tengamos muy claro”

La historia quizás sea poco conocida y mi vocación docente me lleva a explayarme a fin de echar luz sobre el hecho relatado por la primera mandataria del país que a mi entender tiene valor histórico.

La terminación de la perforación del primer pozo surgente de petróleo de la Argentina —el llamado número dos— se produjo en Comodoro Rivadavia el 13 de diciembre de 1907.

Un grupo de perforadores, a cargo de Humberto Beghin, informó al gobierno federal argentino que en lugar de agua habían hallado petróleo.

El suceso, que fue presentado oficialmente como descubrimiento inesperado, determinó la apertura de un proceso histórico que tuvo como motor la explotación de hidrocarburos, logrando quebrar la tendencia al aislamiento de las poblaciones patagónicas y posibilitando que se tome debida conciencia de la necesidad de afianzar su integración al resto del territorio nacional.

La región se asemejaba a un archipiélago en el que las diminutas islas, si bien económicamente activas, estaban excluidas del circuito productivo argentino, orientado exclusivamente a la ganadería intensiva y pobladas por seres humanos de múltiples orígenes que aceptaban vivir bajo el imperio de la ley argentina. Separadas entre sí las pequeñas poblaciones, con escasas vías de comunicación y alejadas por igual del centro del poder con asiento en Buenos Aires. Esta era la realidad en los primeros años del siglo XX, y era de esperarse que todo continuara así por mucho tiempo, si no fuera porque el 13 de diciembre de 1907 se confirmó la sospecha de algunas mentes lúcidas acerca de la existencia de yacimientos petrolíferos en territorio argentino.

La existencia del petróleo en distintos puntos del territorio nacional no era desconocida, pero su trascendencia para el futuro argentino no fue correctamente ponderada. Debería esperarse que los avances tecnológicos y los conflictos mundiales terminaran por imponer a los combustibles basados en hidrocarburos como una herramienta de poder y dominación para que su verdadera importancia fuera valorada.

No fue casualidad que apenas se constató la presencia de petróleo, prácticamente desde que fue enviado el telegrama a las autoridades nacionales por Humberto Beghin —el argentino más relevante del grupo de perforadores de la Patagonia Central— dando cuenta del hallazgo, se percibiera la importancia estratégica del hecho informado. No fue casualidad que Beghin pidiera expresamente al telegrafista que la comunicación fuera enviada en castellano desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires.

Y tampoco lo fue la casi inmediata reacción del gobierno argentino de entonces que en menos de una quincena ordenó la conversión de la zona prospectada en reserva nacional, exenta de ser explotada por particulares, fueran estos argentinos o extranjeros, contrariando la política minera vigente desde los tiempos coloniales que autorizaba lo contrario para casi todos los minerales.

En menos de una década, en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial y la definitiva consagración del petróleo por sobre el carbón como fuente de combustible, tanto en la paz como la guerra, fue que quedó más que justificada aquella medida, que sólo los más lucidos intuyeron como necesaria en el primer momento.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Demasiadas vocaciones de dominación rondaban la cuestión petrolera a escala planetaria para que la región patagónica argentina y sus tesoros estratégicos pasaran desapercibidos.

El descubrimiento gestó un impulso no pensado para los territorios nacionales del Sur argentino, que el gobierno del peronismo plasmó en la etapa de provincialización de mediados del siglo pasado, incor-porándolos a una plena participación democrática. Expresamente, Raúl Scalabrini Ortiz aludió al tema en el tenso período de entreguerras despejando todas las dudas al respecto: “En caso de guerra el petróleo de Comodoro Rivadavia puede ser más vital para Inglaterra que el del Asia menor, por cuya posesión tanto y tan hábil-mente peleó. Es más importante que el petróleo de Rumania, que el de Monsul, que el de Irak y quizás más vital que el de la India...”.

Así valoraron nuestros grandes hombres la importancia que tenía este recurso estratégico para el futuro de la nación. Así fue a principios del siglo XX y así es cien años después. En el primer cuarto del siglo XXI, el petróleo es y seguirá siendo la principal fuente energética en las próximas décadas.

El general Perón, el gran estratega del siglo XX, no fue indiferente al debate sobre la política petrolera que la Argentina debía implementar. Las directrices que dispuso durante la primera y segunda presidencia (1946-1955), confirman el componente realista y pragmático que orientó su accionar en la materia. Perón nunca mostró desinterés por la explotación de un recurso estratégico y potencialmente disponible en territorio argentino; por el contrario no fue indiferente y se involucró decididamente. Así lo demostró en cada una de las decisiones de agenda interna y externa vinculadas con el desarrollo social y económico de nuestro país. No fue nunca principista, por ello el monopolio estatal del petróleo no era para él un dogma. Se preguntaba si el Estado argentino estaba realmente capacitado para su explotación en forma eficiente. Su nacionalismo nunca fue de medios, solo los fines le quitaban el sueño. Se nota cabalmente en los primeros dos gobiernos que encabezó. Una primer etapa, de 1946 a 1948, caracterizada por un modelo económico estatista, orientado hacia el consumo interno y de marcado tono nacionalista, restrictivo a la participación del capital extranjero. Rasgos presentes en el texto del Primer Plan Quinquenal para 1947-1951. La segunda etapa -iniciada a partir de la crisis económica de 1949, y que abarcó los años de la segunda presidencia de Perón (1952-1955)- sería de reemplazo del modelo estatista y mercado internista por uno más abierto y con mayor sesgo exportador, que le daba la bienvenida al capital extranjero. Rasgos presentes en el Segundo Plan Quinquenal y en ejemplos como la sanción de la ley de inversiones extranjeras, en agosto de 1953, y la firma del polémico convenio con la California Argentina de Petróleo SA, subsidiaria de la empresa norteamericana Standard Oil de California, en mayo de 1955.

El proyecto que tratamos hoy camina por la misma senda de los pio-neros Huergo, Mosconi, Yrigoyen, Perón; busca lograr el objetivo prioritario del abastecimiento de hidrocarburos, dinamizando la prospección, exploración, explotación, industrialización, transporte y comercializa-ción del recurso.

El Estado interviene sí, pero no nos creamos que es estatismo en estado puro. Fue la misma presidenta Cristina Fernández la que ha aclarado que “el modelo que hemos elegido no es de estatización sino de recuperación de la soberanía sobre los recursos”.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Con ese designio se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento de YPF Sociedad Anónima y de Repsol YPF Gas Sociedad Anónima.

El petróleo y el gas son recursos imprescindibles para el desarrollo de nuestro país, y el hecho de contar con yacimientos de los dos combustibles nos ofrece ventajas competitivas a nivel internacional y una oportunidad para garantizar el desarrollo económico con equidad.

La iniciativa se complementa con la decisión de recuperar el control de la petrolera, que históricamente ha sido una empresa testigo en todos los segmentos de la industria hidrocarburífera.

Las acciones que hoy recuperamos para los argentinos no son sólo papeles con algún valor, representan también un avance en la recuperación de nuestra soberanía que imperceptiblemente se fue perdiendo a partir del encuadre jurídico que surgió de leyes (24.145 y 24.474) que posibilitaron el ingreso de la multinacional Repsol a fines de la década de los noventa. A tres lustros de estas normas el panorama muestra una YPF que nos llevó al fracaso de las metas planteadas en tales circunstancias.

Desde ya que la privatización y la desnacionalización concebida como el mejor camino hacia el autoabastecimiento no lograron alcanzar, siendo indulgentes, las expectativas mínimas. Es obligación del Estado garantizar el blindaje de las economías nacionales respecto de los vaivenes que periódicamente se producen a nivel internacional respecto de la producción de hidrocarburos; eso es imperioso y la respuesta ensayada por la presidenta ha sido valiente y adecuada a los tiempos que corren.

La iniciativa, cuya presentación celebré, va en busca de recuperar para el Estado el control de la política de hidrocarburos que no debe quedar en manos de las leyes del mercado, a la vez que marca un cambio de paradigma en la materia. Por tal motivo, votaré favorablemente el proyecto de ley que entiendo acompaña la inmensa mayoría del pueblo sanjuanino al que, con todo orgullo, represento.

14. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FERRARI

Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Hoy nos gustaría estar discutiendo otras cosas:



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Que hacer con ENARSA para que cumpla con los nobles fines de su objeto social.

Como hacer para que explore y se convierta en un actor clave del mercado energético, una verdadera empresa testigo, competitiva, que intervenga activamente en la exploración y no que sea una mera intermediaria.

Como fomentar las inversiones, las llegadas de capital productivo.

Nos gustaría estar rediscutiendo una nueva Ley Nacional de Hidrocarburos, replanteándonos la matriz energética.

En definitiva, discutiendo sobre estrategias serias y a largo plazo en materia de política energética, no solo de hidrocarburos, sino de las muchas otras fuentes de energía.

No seamos ingenuos, el problema energético no se reduce a una sola de las firmas que interviene en el negocio. Repsol YPF solo participa en un 34% de la producción de gas y petróleo.

Ni siquiera se trata de un problema exclusivo de hidrocarburos. Que se ha hecho, que se ha pensado respecto a las fuentes de energía alternativas?.

Lamentablemente, la situación actual, el desmanejo, el descontrol, la falta de política energética, la muy mala “nacionalización”, si así puede llamársela, de YPF a través de la introducción de Eskenazi (en realidad de una sociedad radicada en Australia) al paquete accionario de la empresa, mediante un mecanismo -un negociado diría- que ha llevado a la desinversión, al licuado del patrimonio de lo que fue la empresas más importante del país, hoy nos obliga a tener que estar discutiendo una MEDIDA EXTREMA, de ultima ratio, una EXPROPIACION.

Sin lugar a dudas el Gobierno Nacional podría haber evitado llegar a este extremo, tenía todas las herramientas para hacerlo. Los recursos hidrocarburíferas son de las provincias, el Estado Nacional se ha reservado el diseño y aplicación de la POLITICA ENERGETICA. De que “interés público” estamos hablando si la Constitución y las leyes ya lo consagraban. El Gobierno tenía sentado en la empresa un Director. Que hizo en todo este tiempo para evitar que YPF llegara al desmadre actual. Evidentemente, el PACTO con la flia. Eskenazi le ha impedido, hasta último momento, oponerse al vaciamiento. Solo tuvo que hacerlo cuando la situación llegó a un punto de no retorno. Pero no porque preocupe la FALTA TOTAL de POLITICA ENERGETICA, sin por la sencillas razones de CAJA. Otros años de bonanza en el erario, que hoy no lo son tal, han motivado este relajamiento, pero lo que nunca preocupo, ni parece que preocupe, es la ORFANDAD TOTAL DE IDEAS. Todo se reduce a un tema de caja.

El Gobierno se vanagloria de un Estado cada vez más presente. Creo que esto no es lo que se vio en materia energética en los últimos 10 años.

Tampoco es lo que ocurre con el sistema ferroviario, donde pasa exactamente lo mismo. Un Estado que llega tarde y mal. Un Gobierno con amplias facultades y obligaciones de controlar que no las ejerce. Porque no lo hace? Porque tanto Repsol YPF como TBA, para poner los dos ejemplos más explícitos, son empresas construidas al amparo del capitalismo de amigos.

No es casual que el Gobierno quiera que su socio Eskenazi siga detentando su participación accionaria en la empresa. Tampoco es casual que Cirigliano siga a cargo de TBA.

Completa perdida del autoabastecimiento energético y 51 vidas es lo que el Gobierno



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

esperó para reaccionar cuando podía haberlo hecho antes.

Pero además reacciona mal. Energía y transportes no es un problema de YPF o TBA. Esto es un reduccionismo absurdo que evidencia que este Gobierno es absolutamente incapaz de diseñar políticas de Estado a largo plazo. Solo se limita a revolverse en la coyuntura. A pasar el día. A la batalla diaria para responderle a los medios de comunicación previa “lectura militante”.

Este Gobierno se irá dejando poco, muy poco, en materia de auténticas políticas de Estado que, a partir del consenso, puedan ser reasumidas por los Gobiernos siguientes. Debo reconocer que el Gobierno, aún frente a este contexto inocultable, ha sabido platear ingeniosamente el problema, y de forma muy oportuna, teniendo presente la coyuntura política domestica. Lo ha planteado como una cuestión de “SOBERANIA ENERGETICA”, de NACIONALIZACION de los RECURSOS ESTRATEGICOS, la NECESIDAD de que el ESTADO PARTICIPE MAYORITARIAMENTE en la EMPRESA más IMPORTANTE DEL PAIS.

Quien puede no estar de acuerdo con estos conceptos?. Nadie, aún cuando, repito, el Estado contaba con todas las herramientas legales y estaba en situación de materializar estos nobles fines.

Por supuesto que todos los argentinos estamos de acuerdo con estos principios básicos, así lo demuestran las encuestas. Pero que pasa si la cuestión es reformulada en otros términos.

- 1) Esta de acuerdo en que el Estado haya negociado la participación de Eskenazi en YPF de la forma en que lo hizo?
- 2) Esta de acuerdo con la falta total de controles del Estado sobre la empresa?
- 3) Esta de acuerdo con que el representante del Estado en el Directorio haya consentido durante años el vaciamiento de YPF, aprobando balances y distribución de dividendos.
- 4) Esta de acuerdo con la falta total de políticas energéticas estratégicas?
- 5) Esta de acuerdo con el rol que terminó teniendo ENARSA?
- 6) Esta de acuerdo con la expropiación de la empresa en los términos en los que se la pretende hacer?
- 7) Esta de acuerdo con su ocupación por fuera de toda regla y en los términos policíacos en los que se la llevó adelante?
- 8) Esta de acuerdo con que los interventores sean justamente los responsables de esta situación?
- 9) Esta de acuerdo con que la empresa no este sujeta a control alguno?
- 10) Cree que la ocupación de la firma puede ser entendida en términos positivos por la enorme cantidad de inversores que hoy buscan economías confiables y términos previsibles en toda América?

Creo que ante estas preguntas la respuesta es otra.

La expropiación es un recurso extremo al que debemos recurrir hoy por la desatención del Gobierno a la gestión de YPF y la falta de una política energética seria. La expropiación en estos términos ya es un costo que habremos de pagar todos los argentinos.

Creemos que la “soberanía” sobre los recursos estratégicos podría haberse conseguido por otros medios menos conflictivos y sin mengua de la seguridad jurídica,



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

indispensable para atraer inversiones que haga viable el autoabastecimiento.

Bastaba cumplir con el Acuerdo de Inversiones firmado con España y aprobado por Ley. Ya sea por vía de la negociación y, en su caso, a través de una expropiación consensuada, y que no viole uno de los principios básicos de ese acuerdo, la NO DISCRIMINACIÓN de quien ha confiado en invertir en el país.

Las consecuencias negativas de la falta de cumplimiento de la palabra empeñada y cristalizada en un acuerdo aprobado por ley son clarísimas. O acaso se piensa que los argentinos no tenemos otros intereses en el mundo, hoy respaldados por acuerdos o normas de similar naturaleza. Parece mentira que se tire este Acuerdo al tacho cuando justamente estamos luchando para que se cumpla con el Derecho Internacional en la cuestión Malvinas.

Estamos de acuerdo en la necesaria participación mayoritaria del Estado en YPF, pero la “nacionalización” de la firma no es lo mismo que su expropiación, menos aún su confiscación.

Por ello, si el Gobierno ha llegado al extremo de tener que expropiar, debe hacerlo en un marco de estricto respeto a la Constitución y las leyes, con un sentido social y federal, y garantizando el control de la firma para que lo que pasó no vuelva a ocurrir.

Por ello, estos son los pilares que inspiran nuestra propuesta de dictamen:

1. CUMPLIMIENTO DE LOS TRATADOS: No discriminación

Se postula la EXPROPIACIÓN del 51% del patrimonio de YPF SA pero no solo sobre las acciones pertenecientes a Repsol YPF S.A, sino también las de Petersen Energía S.A, en proporción a sus respectivas tenencias accionarias.

Ello a los efectos de respetar el principio de no discriminación, que a su vez está expresamente establecido en el ACUERDO PARA LA PROMOCION Y LA PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL REINO DE ESPAÑA, suscripto en 1991 y aprobado por Ley 24118 al año siguiente, que en su ARTICULO V “Nacionalización y expropiación” dispone que “La nacionalización, expropiación, o cualquier otra medida de características o efectos similares que pueda ser adoptada por las autoridades de una Parte contra las inversiones de inversores de la otra Parte en su territorio, deberá aplicarse exclusivamente por causas de utilidad pública conforme a las disposiciones legales y en ningún caso deberá ser discriminatoria”.

Por otra parte, no es razonable declarar de “utilidad pública” solo la porción de uno solo de los accionistas. La “utilidad pública” debe ser lógicamente sobre un porcentaje mayoritario del paquete accionario, independientemente de su titularidad, por lo que la expropiación debe ser ecuaníme.

2. FEDERALIZACION EN EL REPARTO:

Se garantiza la participación de todas las provincias y la CABA en el reparto del 49% del paquete accionario a expropiar, sean o no productoras nucleadas en el OFEPHI, permitiendo que estas sean titulares de un 25% de la empresa.

Debe tenerse presente que las provincias petroleras ya perciben REGALIAS y que la intervención del resto de las jurisdicciones en el circuito de industrialización y



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

comercialización no es menor y debe ser justipreciado.

El criterio distributivo del Proyecto no será totalmente justo y equitativo si la participación en la propiedad de YPF se limita a las provincias que tienen esa riqueza bajo sus pies, y deja afuera a las que participan activamente de un segmento capital de la producción petrolera, como son las que poseen sobre su suelo las destilerías de ese recurso.

Y en ese plano no caben dudas de que la provincia de Buenos Aires debe formar parte de los futuros accionistas estatales de la empresa: en su territorio están asentadas tres de las más grandes refinerías del país, ubicadas en nuestra región, Avellaneda (Dock Sud) y Bahía Blanca y una de las cuales -la de Ensenada- pertenece justamente a YPF.

La importancia de las destilerías asentadas en Buenos Aires se refleja en el hecho de que en ellas se refina el 65% del petróleo de todo el país y se elabora, por ejemplo, el 100% de los lubricantes y más del 60% de las naftas y el gasoil.

Ese desarrollo convierte a esta provincia en un "socio" clave del proceso argentino de producción de combustibles y, como contrapartida, por tratarse de una industria esencialmente contaminante más allá de los recaudos que se adopten, le genera un importante pasivo ambiental. Son estos, por lo tanto, dos factores que alcanzan sobradamente para fundamentar por qué la Provincia no debería estar ausente del futuro esquema accionario de YPF.

Es para mi una obligación, como Diputado Nacional que accedí a mi bancas por el voto de los bonaerenses, asumir la representación de los legítimos intereses de la Provincia en un tema capital como lo es la estatización de YPF y el futuro esquema accionario.

Por otra parte, el Dictamen que proponemos establece que los términos y condiciones de la cesión serán fijados no por el PEN sino por el Consejo Federal de Hidrocarburos, asegurando que la distribución de acciones entre las jurisdicciones que acepten su transferencia se realice en forma equitativa y con un rol EMINENTEMENTE SOCIAL, en proporción a su participación en la producción e industrialización de hidrocarburos, así como la población de cada una de ellas:

3. CONTROLES DEL ESTADO

A los efectos de no repetir la experiencia que nos llevo a esta situación y evitar situaciones similares a la falta de transparencia de AA, se establecen los siguientes principios:

- sujeción expresa de la empresa a los controles interno y externo previstos en la LAF 24.156.

- control y transparencia en la gestión de compras y contrataciones, a partir del tratamiento igualitario y la libre concurrencia de interesados y oferentes, así como la publicidad en los procedimientos y actuaciones. No le volvamos a abrirle la puerta al negocio de la "patria contratista".

- control parlamentario a través de una Comisión Bicameral ad hoc: fijando un estricto régimen informativo a los efectos de transparentar la nueva gestión y analizando que se ha hecho mal y que se ha dejado de hacer en materia de hidrocarburos en los últimos años a los efectos de evitar los mismos errores.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

- mirando hacia adelante, la Comisión deberá requerir información sobre la gestión y emitir opiniones.
 - mirando hacia atrás, deberá evaluar y expedirse respecto a la gestión del Estado Nacional en materia de política hidrocarburífera durante los últimos 20 años.
- Se pretende a su vez, que realice una auditoría integral -financiera, de legalidad y de gestión- sobre la actividad de YPF Sociedad Anónima desarrollada entre los ejercicios 1999 y presente, cuyos resultados serán informados a cada Cámara.

Si el problema de Repsol YPF fue la falta absoluta de controles, parece una broma de mal gusto que el Proyecto del Poder Ejecutivo excluya expresamente a la empresa del contralor Estatal, pretendiendo consagrar en YPF la misma situación que en Aerolíneas, donde existe un oscurantismo total en el manejo de los millonarios fondos que le asigna el gobierno, fondos de todos los argentinos.

Preocupa que, a poco de analizar el organigrama de la intervención estatal que el Gobierno dispuso sobre Repsol YPF, se desprenda con meridiana claridad que:

- 1) no habrá mayores controles: ya que la mitad los cargos fueron cubiertos con los mismos artífices del actual desmadre, con Julio De Vido a la cabeza.
- 2) Se tratará de otro nicho para financiar los sueños políticos de La Campora: ya que el resto de los cargos está cubierto por personal que está allí por responder a dicha agrupación política, no por su idoneidad técnica en materia de hidrocarburos.

4. INTEGRACIÓN EQUITATIVA DE CONSEJO FEDERAL DE HIDROCARBUROS:

Se reformula su integración para que tanto Nación como Provincias y CABA tengan un integrante cada una.

El Proyecto oficialista le confiere al PEN 4 representantes, distorsionando el equilibrio que debe reinar en un Consejo eminentemente Federal, teniendo en cuenta que los hidrocarburos son propiedad de las provincias y son estas quienes deben participar en pie de igualdad con el Gobierno Nacional en el diseño de la política energética. Es este el rol que esperamos del Consejo: que fije desde un ámbito participativo y federal las pautas para discutir una nueva Ley Nacional de Hidrocarburos.

5. AMPLIACIÓN DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO FEDERAL DE HIDROCARBUROS y JERARQUIZACIÓN TÉCNICA:

La forma en que está plantado el Consejo en el Proyecto del PEN, al que se le asignan facultades intrascendentes, limita absolutamente la posibilidad de que este, como autoridad verdaderamente federal, participe activamente en el diseño de la política energética.

Relegando el Proyecto oficialista el rol del Consejo Federal, y reservándose el Estado Nacional, a través de los arts. 1 y 2, el poder absoluto para intervenir en toda la cadena de exploración, extracción, producción, transporte, industrialización y comercialización, subvierte el principio constitucional de la PROPIEDAD PROVINCIAL DE LOS RECURSOS.

Por ello proponemos un Consejo fuerte y proactivo, en línea con el Conselho Nacional



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

de Brasil, a los efectos de participarlo activamente en el desarrollo y control de la política energética con criterio federal.

Se crea a su vez dentro del Consejo una COMISON ASESORA integrada por expertos designados por concurso a los efectos de garantizar su idoneidad en aras de dotar de recursos técnicos al órgano.

A su vez, se prevé que dicha Comisión elabore informes trimestrales sobre la actividad hidrocarburífera y publique periódicamente estadísticas del sector para garantizar un seguimiento intensivo de la política hidrocarburífera.

6. CUMPLIMIENTO CABAL DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN:

El Dictamen prevé que el PEN consigne judicialmente el valor que provisionalmente se presupueste, en los términos de los arts. 13 y 25 de la Ley 21.499, previo al ejercicio de los derechos societarios que las acciones a expropiar le confieren.

El PEN, vulnerando el derecho de propiedad garantizado en la Constitución, ha ocupado la empresa a través de un DNU (estando en funcionamiento el Congreso y sin que existan razones de urgencia) y mediante un procedimiento francamente inconstitucional, previsto en Ley de expropiación de la Dictadura, que incluso ésta calificó como “ocupación anormal”.

Y aún pese a la flagrante inconstitucionalidad de este procedimiento “manu militari” que consagró esa Ley de 1977, ni siquiera se dieron en el caso los requisitos para que este pueda ser instrumentado.

La Ley prevé que este procedimiento “anormal” se de solo en casos de necesidad “urgente, imperiosa, o súbita”, pero ninguno de estos extremos se verifica en el caso de Repsol YPF en tanto la situación de la empresa no podía ser desconocida por el Estado, más aún teniendo el PEN un representante en el Directorio.

El Gobierno no solo ha echado mano a un mecanismo pensado para una época en la que reinaba el terror y el autoritarismo, sino que lo ha hecho sin que siquiera se den los recaudos que planteaba el propio Gobierno militar.

7. FUENTES DE TRABAJO:

Se incluye en nuestro Dictamen la garantía de preservación de las fuentes laborales en el proceso de continuidad operativa de la empresa, reaseguro que fue omitido en proyecto del PEN.

No queremos que el personal técnico y con experiencia en la empresa sea reemplazado por militantes camporistas, como ya ha ocurrido en el INDEC.

Es por ello que en haras a la transparencia se le solicita al PEN que acompañe al Congreso un listado del personal actual en relación de dependencia de YPF y contratada (locación de servicios) y que año a año acompañe la nomina para que nosotros sepamos de la política de recursos humanos de la empresa Si el PEN realmente quiere que YPF sea una empresa líder, no creemos que se oponga a este informe que nosotros solicitamos se comprometa a cumplir"



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

8. PROHIBICIÓN de FINANCIAMIENTO al TESORO:

Se dispone que bajo ningún concepto YPF pueda financiar directa o indirectamente al Tesoro Nacional, a excepción de sus obligaciones tributarias.

Es necesario despejar cualquier duda en torno a que el producido económico de la empresa será utilizado para explorar, en aras de volver a garantizar el autoabastecimiento, y no desviándolo para atender las conocidas y apremiantes necesidades de caja del Gobierno.

Ya hemos dicho que el sorpresivo avance del Gobierno sobre la empresa (una de las tantas del sector), aún cuando la crisis energética era conocida y anunciada por todos, pareció haber respondido más a una necesidad de caja que de rediseño de la política energética.

9. LIMITACION DE LA DECLARACION DE INTERES PUBLICO:

La Declaración de Interés Público que planteamos se limita al logro del autoabastecimiento y a la exploración y explotación de hidrocarburos

Ello a los efectos de evitar cualquier injerencia abusiva del Estado en la cadena de producción, distribución y comercialización de los hidrocarburos.

Incluir la industrialización, el transporte y la comercialización, como lo hace el Proyecto del PEN de forma tan amplia, y delegar en el Poder Ejecutivo la fijación de la política en esta materia, sin ningún tipo de marco legal, como lo hace el art. 2 del Proyecto, dará cobertura a eventuales intervenciones arbitrarias en el mercado y a excluir la intervención de las provincias en el diseño de la política energética.

Las reglas de juego de este sector estratégico de nuestra economía no pueden delegarse de esta forma tan ambigua, con un cheque en blanco al Gobierno, sino que debe ser producto del consenso y a través de una nueva ley nacional específica en materia de hidrocarburos.

En tal sentido, el Dictamen dispone que el PEN deberá formular y remitir al H.

CONGRESO un proyecto de ley que garantice previsibilidad y seguridad jurídica para las inversiones que se realicen en el sector; criterios que permitan la asociación amplia entre el capital privado y el público; nuevas condiciones de ejercicio de sus facultades de control por parte del Estado; participación de las provincias; mecanismos promocionales para el desarrollo de las inversiones necesarias para sostener el proceso de autoabastecimiento energético y la optimización de la matriz energética.

Al efecto se propone constituir un grupo de trabajo con la participación de funcionarios competentes en la materia, así como especialistas sugeridos por las Comisiones de Energía de ambas Cámaras del Congreso.

CONCLUSION

Una política estrategia en Hidrocarburos y el rol de ENARSA es lo que debemos seguir discutiendo para que el notable costo de esta expropiación no caiga en saco roto.

Seamos sinceros, el problema energético de la argentina no puede reducirse a YPF. Sin una política energética que fije las estrategias a mediano y largo plazo y de un adecuado marco jurídico que de previsibilidad a las inversiones, en nada habrá de variar el preocupante estado de situación y no alcanzaremos el fin del



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

AUTOABASTECIMIENTO que nos hemos propuesto.

Lamentablemente, no habremos de incidir en nada sobre el Proyecto del PEN. Aún cuando compartamos parcialmente la necesidad de garantizar la participación del Estado en YPF, nada podremos hacer en aras de mejorar la Ley, garantizando más control, más transparencia, mayor intervención de las provincias. Solo cabe concluir que el Gobierno no esta de acuerdo con esto.

Otra vez siento que perdemos la oportunidad de alcanzar una norma inteligente, y que solo se estará consiguiendo una declaración muy oportunista en términos políticos y de caja, y de corte meramente demagógico con graves consecuencias en el clima inversor y en las relaciones internacionales.

Los Estados no son más soberanos en la medida en que pueden tomar medidas drásticas y arbitrarias en diametral oposición a los intereses de otro Estado o parte, sino en tanto son capaces de respetar su institucionalidad política, sus propios principios constitucionales, las leyes que se han dado, y los acuerdos que voluntariamente han arreglado con otros países.

No se trata solo de un tema de seguridad jurídica, de previsibilidad, de fomentar el clima de negocios e inversiones. Solo en el respeto a la Ley la Argentina podrá defender y reclamar con autoridad sus propios intereses nacionales, sean estos comerciales, políticos o territoriales.

16. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GDANSKY

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Breve resumen histórico

Descubrimiento de los primeros yacimientos

Los primeros yacimientos de petróleo fueron descubiertos en el entonces pueblo de Comodoro Rivadavia. El primero apareció el 13 de diciembre del año 1907, cuando una perforadora estaba realizando un pozo para encontrarlo, a tres kilómetros del Cerro Chenque. La máquina llegó a los 170 metros de profundidad, pero los obreros decidieron abandonar el trabajo ya que el equipo del que disponían no les permitía llegar más hondo.

Después de nueve meses de trabajo, y llegando a perforar un total de 500 m, comenzó a brotar del suelo un líquido viscoso, aceitoso y con olor a nafta. Las Oficinas de Minas



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

en Buenos Aires recibieron un comunicado desde Comodoro Rivadavia que decía: "Se cree haber dado con una napa de kerosene". Fue el día 13 de diciembre que llegó un nuevo telegrama que confirmó la existencia de hidrocarburos a casi 540 metros de profundidad, por lo que se comunicó oficialmente el descubrimiento de un yacimiento de petróleo en el pueblo de Comodoro Rivadavia. Se había descubierto por primera vez petróleo en suelo argentino. En ese momento, se formaron dos interrogantes: por un lado, quien sería el propietario del petróleo, y por otro, qué empresa o emprendedor debería explotar el hidrocarburo.

El comienzo del petróleo en el gobierno de Yrigoyen

Hipólito Yrigoyen fundó YPF y durante su gobierno se realizaron varias obras para la producción de petróleo. Sin embargo, no llegó al autoabastecimiento.

Cuando en 1918 terminó la Primera Guerra Mundial, se inició un período expansivo para la naciente industria petrolera argentina. La paz permitió normalizar las relaciones comerciales y financieras internacionales; así se pudo lograr mayor disponibilidad de materiales, equipos, fletes y capitales.

En esa época apareció el motor de combustión interna, que ocasionó otra revolución industrial y aumentó la demanda de combustibles. La expansión de los automóviles como medio de transporte auguraba una demanda sostenida de productos derivados del petróleo, principalmente combustibles, aceites y grasas. En aquellos tiempos, las empresas estadounidenses y europeas también empezaron a expandirse en busca de reservas; estas acciones estaban avaladas por el gobierno, preocupado por contar con el tan requerido mineral estratégico: el petróleo.

El gobierno de Hipólito Yrigoyen anunció el Plan de Tierra y Petróleo, por el cual se trató de que el Estado se reservara un papel de intervención decisivo. Durante su gobierno, se creó en 1922 la empresa más grande destinada a explotar y comercializar el petróleo: YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), y se le ofreció la conducción de ésta al general Enrique Mosconi, quien ocupó la dirección de YPF entre 1922 y 1930.

Durante sus ocho años de gestión, el General logró casi triplicar la producción de petróleo, de 348.888 metros cúbicos en 1922, a 872.171 metros cúbicos en 1929.

En el año 1925, se finalizó la construcción de la destilería de La Plata (todavía en funcionamiento), para producir nafta, kerosene y fuel oil y combustible para aviones a tan solo unos meses de su habilitación. Esta destilería llegó a ser la décima más grande del mundo e YPF llegó a tener 50.000 empleados.

Petróleo con los gobiernos militares de la década infame

Después del golpe de estado, el 6 de septiembre de 1930, Enrique Mosconi renunció al directorio de YPF, negándose a trabajar con un gobierno de facto, y fue Enrique Zimmerman quien asumió la dirección de YPF.

Durante el gobierno de José Félix Uriburu, las empresas petroleras privadas, prácticamente duplicaron la producción, pero en cambio YPF creció menos del 10%.

En el año 1931 se empezaron a construir dos destilerías privadas, una en Dock Sud, y se construyó una planta de aceites lubricantes, grasas, parafinas y asfaltos de la destilería de La Plata. Se importaron surtidores de nafta para los vehículos, en vez de producirlos en la Argentina como hacía Mosconi.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

El petróleo durante el gobierno peronista

El general Juan Domingo Perón no logró el autoabastecimiento debido a falta de capitales, y los bloqueos que impuso Estados Unidos a la compra de máquinas.

El general Juan Domingo Perón contó durante su mandato con una YPF muy débil, debido a las políticas de los anteriores gobiernos militares YPF no contaba con los recursos para alcanzar el autoabastecimiento petrolero.

Sin embargo, se creó la empresa distribuidora Gas del Estado, para distribuir el recurso hidrocarburífero. Se inauguró con fecha 29 de diciembre de 1949 el primer gasoducto que va desde la ciudad de Comodoro Rivadavia hasta la Ciudad de Buenos Aires, contando con una longitud de 1.600 kilómetros.

Durante sus años en el exilio, Perón dijo al respecto de YPF:

"Yo creo que YPF no tiene ni capacidad organizativa ni capacidad técnica ni capacidad financiera para un esfuerzo de esa naturaleza. Los sistemas empleados en la Argentina distan mucho de los nuevos métodos de exploración, prospección, cateo y exploración racional de los yacimientos modernos. Los costos de producción de YPF son absolutamente antieconómicos. Hacer de esto una cuestión de amor propio es peligroso y estúpido... Estos nacionalistas de opereta han hecho tanto mal al país con sus estupideces como los colonialistas con su viveza. Unos negativos y otros excesivamente positivistas representan dos flagelos para la economía del país".

Arturo Frondizi y el autoabastecimiento petrolero.

El presidente Arturo Frondizi logró el autoabastecimiento en tan sólo 4 años de mandato. Sus medidas trajeron sin embargo aparejadas fuertes protestas y repudio.

El 1 de mayo de 1958, Arturo Frondizi asumió el gobierno y la petrolera estatal, seguía siendo una empresa incapaz de alcanzar el autoabastecimiento de petróleo, un objetivo que Frondizi al igual que Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, quería alcanzar.

Pero existía un problema muy grande de consumo y producción: nuestro país tenía un consumo de 15.000.000 de toneladas de petróleo, de los cuales a nivel local sólo se producían 5.000.000, por lo tanto debían importarse 10.000.000 de toneladas para llegar a abastecer de petróleo el país. Todo esto tenía un valor que representaba la tercera parte del producto de las exportaciones, generando un gasto de 300 millones de dólares en importación de petróleo.

El gobierno sentó tres pilares básicos para la política petrolera:

1. Nacionalización del petróleo.
2. Monopolio de YPF.
3. Autoabastecimiento petrolero.

El artículo N 1º de la ley 14.773, de nacionalización del petróleo, establecía que: "los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos... son bienes exclusivos, imprescriptibles e inalienables del Estado nacional. ... estarán a cargo de YPF, Gas del Estado y de YCF".... El artículo 4º de esta misma ley dice que: "Queda prohibido en todo el territorio nacional el otorgamiento de nuevas concesiones...."

Los contratos eran de locación de obras, en donde las compañías no tenían derecho



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

sobre el petróleo. El crudo era entregado directamente a YPF, y una vez allí, se repartía un 60% para la empresa argentina, y el 40% para la empresa que haya extraído el crudo. Durante el gobierno de Frondizi se creó YCF (Yacimientos Carboníferos Fiscales), empresa encargada de la exploración y extracción del carbón. En la actualidad Argentina usa este carbón para calefacción o para abastecer a las centrales térmicas para producir electricidad; siendo ello de suma importancia para las industrias.

La batalla del petróleo

El 24 de julio de 1958, el presidente pronunció un discurso ante el país, explicando los problemas y las consecuencias que tenía el seguir importando petróleo. En dicho discurso afirmó que el país no podría seguir sosteniendo esa política petrolera. El gobierno así anunció "la batalla del petróleo", el objetivo de ésta era el de lograr el autoabastecimiento petrolero, sea como fuera. En su discurso dio la razón de su giro ideológico, la cual fue que la Argentina no tenía más divisas para comprar petróleo, y que habría que atraer los capitales extranjeros para explotar el hidrocarburo, pero, las petroleras se tendrían que llevar parte de las ganancias.

Esta política petrolera estaba basada en lo que Frondizi y Frigerio llamaron "nacionalismo de fines", contrapuesto al "nacionalismo de medios". El primer "nacionalismo" instaba en alcanzar los objetivos por cualquier medio, mientras que el segundo se centraba en los medios a cómo conseguirlos.

El polémico giro del presidente

Según Frondizi y su libro *Petróleo y Política* del año 1954, YPF no necesitaba medios para lograr el autoabastecimiento del "oro negro". Sostenía que podían hacerlo por cuenta propia, criticando duramente la radicación de empresas estadounidenses para la explotación de petróleo y el monopolio de YPF. La postura de Frondizi en su obra estuvo dotada de un gran antiimperialismo.

Sin embargo a unos pocos meses de asumir el gobierno, Frondizi reconoció que YPF no era capaz de lograr el autoabastecimiento, para lo cual sería necesario la ayuda de capital extranjero. Sin duda alguna, el cambio, generó conflictos de variada índole e intensidad; y muchos de los que habían dado su voto a Frondizi (como la izquierda y peronistas), participaron de varias manifestaciones y realización de huelgas en contra de los contratos petroleros.

Políticas petroleras y resultados

Se habían comprado 36 equipos perforadores de pozos petroleros, la mayor adquisición en su historia. En 1960, se llegó a tener más de cien equipos trabajando, el doble de lo que normalmente tenía YPF para trabajos por administración, pudiendo dar una solución a la crisis energética que había hacia 1958, acabando así con la "dieta eléctrica" y los apagones. En ese mismo año, se construyó el gasoducto Campo Durán, en la provincia de Salta, creándose así una industria petroquímica que ubicó al país como segunda potencia regional en el rubro.

Con todos los avances, (léase compras de maquinarias, construcción de oleoductos y de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

otras infraestructuras), YPF logró duplicar su producción, superando las 10.400.000 toneladas de crudo.

No obstante, para lograr una producción de 15.600.000 toneladas el gobierno tuvo que suscribir contratos de locación de obras y servicios, en especial con tres compañías: Banca Loeb en la Provincia de Mendoza, Panamericam en la ciudad de Comodoro Rivadavia y con la compañía Tennessee en la provincia de Tierra del Fuego. Fue así que la Argentina logró por primera vez llegar al autoabastecimiento de petróleo en menos de cuatro años, rompiendo con cincuenta años de abastecimiento importado por los monopolios extranjeros.

De igual modo, Frondizi firmó un contrato de explotación con una subsidiaria de Standard Oil; contrato éste al que le siguieron otros tantos, alcanzando un total de 13 acuerdos por un total de 200 millones de dólares.

En 1960, se construyó un segundo gasoducto (contando ya con el de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires), llamado "Gasoducto General San Martín". A diferencia del primero, éste contaba con mayor diámetro, y en consecuencia, mayor capacidad. De este modo llegó el gas por medio de cañerías, reemplazando las garrafas y los combustibles líquidos y sólidos.

Cuando la Patagonia fue productora de este recurso en la cuenca neuquina, en los yacimientos de Loma de la Lata, surgieron los gasoductos NeuBA I y II, de la provincia de Neuquén a Buenos Aires. Le siguió el que uniría Neuquén con Mendoza y hacia el Este, para llevar el gas a otras regiones del país. Esta red de gasoductos troncales, junto con una extensa red de gasoductos secundarios, puso el gas natural al alcance de los hogares más poblados del país, como también a las industrias.

Durante unos cuarenta años, el servicio de gas alcanzó una participación del 40% del consumo de energía primaria, y llegó a ser el combustible esencial y más barato para la mayoría de la población; sirvió también para dar una solución al problema energético. Sustituyó asimismo los combustibles líquidos para generar electricidad en grandes industrias.

Gobierno de Arturo Illia

Una de los primeros actos del gobierno de Arturo Illia, fue anular algunos de los trece contratos firmados en la época de Frondizi, y lo que llevó a que YPF perdiera su capacidad de autoabastecimiento. En ese contexto, la producción petrolera en 1965 fue inferior a la del año anterior. Sin embargo, y pese a que Illia rectificó su política de nulificar los contratos celebrados, las empresas siguieron en el país. Solamente la Shell y la Esso (viejas importadoras de petróleo que habían firmado contratos de exploración para aumentar las reservas de YPF con la cláusula del riesgo minero), aceptaron de inmediato la anulación y recuperaron los 50.000.000 de dólares invertidos, y que por dicha cláusula del riesgo habrían perdido al no encontrar yacimientos productivos. Argentina Cities Service (ex Banca Loeb) y Amoco (ex Panamericam) continuaron con la extracción de los yacimientos de Mendoza y Comodoro Rivadavia; no sólo durante el gobierno de Illia, sino también en los sucesivos gobiernos militares y civiles, incluyendo el de Raúl Alfonsín, tiempo éste último en el que llegó a una producción más importante.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

La Revolución Argentina y el petróleo

Durante el gobierno de Onganía, se modificó la ley 14.773, hecha por Frondizi, siendo dictada en su lugar la ley 17.319; manteniéndose el mismo principio de la propiedad del petróleo, y que debía ser entregado directamente a YPF; pero eliminándose el monopolio y la prohibición de entregar nuevas concesiones.

La época del Proceso de Reorganización Nacional

Durante el proceso de reorganización nacional, YPF (principal empresa petrolera en el momento), aumentó su deuda por dieciséis, de 372 a 6.000 millones de dólares en solo siete años. La empresa despidió a 13.000 empleados y aumentó la productividad en un 80 %.

En ese momento, al no contar con destilerías, YPF tenía que entregar el petróleo a empresas como Shell y Esso, para su refinación.

Gobiernos peronistas posteriores

El presidente justicialista Carlos Menem, mediante tres decretos (1.055, 1.212 y 1.589) firmados en los primeros meses de su gobierno, desreguló el mercado petrolero argentino, disminuyendo el poder de control del Estado respecto de las empresas privadas. Los anteriores contratos de servicio fueron transformados en concesiones con libre disponibilidad del petróleo extraído, y se licitaron áreas centrales y marginales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El 31 de diciembre de 1990, mediante el decreto 2.778, el Poder Ejecutivo transformó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima. En el año 1992, la ley 24.145 transfirió el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias. La ley también privatizó a YPF; así la Argentina perdió totalmente el poder de decisión sobre la política petrolera.

Esta política de privatizar YPF fue implementada debido a los diez puntos que aconsejaba el Consenso de Washington. El mismo expresaba entre otras cosas, la necesidad de privatizar empresas públicas. Fue impuesto por organismos como el FMI y el Banco Mundial. De aquí surgió la privatización de varios servicios estatales, como Ferrocarriles Argentinos, la ya citada YPF, Gas del Estado, ENTEL y Aerolíneas Argentinas.

La supuesta desregulación, que sólo cambió un monopolio estatal por el oligopolio extranjero, no trajo inversiones de ningún tipo. Sólo vinieron empresas (privadas, preponderantemente extranjeras), a extraer petróleo de los yacimientos ya descubiertos por YPF, pero no se realizaron inversiones para descubrir nuevos pozos.

Dos años después, en la reforma constitucional de 1994, fue incorporada la federalización del petróleo, mediante el artículo N° 124, en la Constitución Nacional Argentina, que reconocía el "dominio originario" de las provincias. No obstante, la federalización de las reservas sólo pudo llevarse a cabo después de la denominada "ley corta" en 2006.

A las nuevas empresas petroleras se les permitió la libre disponibilidad del petróleo extraído, ya sea poniendo el precio para importar, como también la libre disponibilidad de las ganancias obtenidas por las exportaciones. A causa de esto la extracción del petróleo para exportar superó el 50%, por encima de las necesidades del mercado interno. En consecuencia, hubo una brusca caída en las reservas del país, a la vez que se



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

agravaron por la falta de inversiones en exploración de nuevos pozos, desde mediados de la década de 1990 hasta la actualidad, en la que la privatización aún se encuentra vigente.

La venta de YPF a Repsol

La empresa española Repsol compró todas las acciones de YPF por un total de 15.000 millones de dólares. Repsol sólo explotó los yacimientos heredados de YPF, vendiendo el petróleo extraído. Se exportaron grandes cantidades de crudo al mercado internacional. Al tener la libertad en las ganancias obtenidas, las mismas fueron usadas para comprar yacimientos en otros lugares, como Bolivia, Trinidad y Tobago y Libia. Repsol (ahora llamada Repsol YPF), obtuvo ganancias de 2.000 millones de dólares anuales, pero como los yacimientos argentinos no eran rentables, la inversión de Repsol YPF en exploración de nuevos yacimientos fue inexistente. Así fue que las reservas bajaron.

El Paquete accionario de Repsol-YPF, antes de la expropiación: El petróleo en la década de 2000.

Durante el período de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-actualidad), se realizaron varias obras como oleoductos y gasoductos para el transporte de petróleo y gas, pero se realizaron escasas inversiones para la explotación de combustibles. Mientras la economía e industria fueron creciendo a lo largo de la década del 2000, el consumo de combustible se fue acrecentando, en un determinado momento, el consumo superó a la producción, provocando que la Argentina tenga que importar combustibles para satisfacer las demandas hogareñas e industriales. La ruptura de esta balanza se registró años atrás: la extracción de metros cúbicos de petróleo fue en 2010, menor en 5 millones de metros cúbicos, comparando con el año 1997. Se destinaron 160 millones a Cammesa en el 2005 para la adquisición de fuel oil para alimentar las centrales térmicas. En 2006, el total de subsidios para las importaciones de combustibles fue de 3.700 millones de pesos; al año siguiente, la cifra se fue a 9.200 millones, de los cuales 4.400 millones se destinaron a la compra de fuel oil, cuando dos años antes habían sido sólo 160 millones de pesos. En 2008, el monto que tuvieron las importaciones del sector se fue a los 16.200 millones de pesos, pero la crisis del año siguiente ayudo a reducir los gastos, pasando a un monto de 15.944 millones de pesos. El 9 de marzo de 2010 se registró desabastecimiento de naftas en varias estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires, y también en varios lugares de la Argentina. En consecuencia, YPF debió importar 50 millones de litros de nafta para detener el desabastecimiento en las estaciones de servicio, y poder abastecer a los automóviles, camiones y máquinas agrícolas.

El desabastecimiento siguió provocando la caída de 55.000 puestos de trabajo, y el cierre de 3.500 estaciones de servicio, según el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes.

Asimismo, durante la ola de frío de julio, el consumo de electricidad y gas aumentó en cifras no esperadas. El gran consumo de gas llevó a tener que importar gas (electricidad también) a países limítrofes como Bolivia, y también se tuvo que comprar fuel oil y gasoil para abastecer las centrales térmicas. Este desabastecimiento de gas afectó al polo



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

petroquímico de Bahía Blanca, y a las provincias de Santa Fe, Córdoba y Tucumán. La producción de derivados del petróleo creció un 3% en 2010, revirtiendo la baja del 1,2% de 2009, según el informe que brindó la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES). Sin embargo, la producción no alcanzó para satisfacer la demanda, afirmación brindada por el informe de la consultora Ecolatina, la cual también prevé que el año 2011 finalizará con un déficit récord de 26 millones de dólares entre el déficit industrial y energético. Cerrando el año 2011, el déficit dado por la importación de combustibles como gas, fuel oil, gasoil, naftas y lubricantes es de 5.000 millones de dólares, además de la importación de energía eléctrica para cubrir la demanda. Cuando en el 2003 solo existía un desequilibrio de 548 millones, las exportaciones aumentaron en un 710%, alcanzando los 4.448 millones de dólares en el 2010.

Proceso de expropiación de Repsol YPF

En la última semana de marzo de 2012, gobiernos provinciales han expropiado áreas con yacimientos petroleros que estaban en concesión de Repsol YPF, debido a la baja producción de la empresa y a la falta de inversiones durante muchos años. Hasta la fecha, tres tierras han sido quitadas a la petrolera: en la provincia de Neuquén, una llamada "Don Ruiz" de 109,1 kilómetros cuadrados y Chihuido de la Salina Sur y Portezuelo Minas, que suman una superficie de 242,4 kilómetros cuadrados. En consecuencia, las acciones de YPF decayeron un 15% en las bolsas. Provincias como Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro y Mendoza han dado de baja tierras de YPF. Finalmente, el 16 de abril, Cristina Fernández de Kirchner anunció por cadena nacional que envió un proyecto de ley al Congreso Nacional en donde, además de expropiar el 51% de YPF, declara de "interés público y nacional" al "autoabastecimiento de hidrocarburos". La presidenta dijo claramente que este proyecto se trata de "una recuperación de la soberanía".

Expropiación de YPF

Fundamentos

La expropiación de YPF recupera una filosofía de país, no sólo porque se recupera la soberanía nacional en la producción, refinación y distribución de hidrocarburos, sellando un claro y valiente avance hacia la profundización del modelo iniciado en el 2003, sino también porque estamos dejando atrás otra página del modelo neoliberal, privatizador y desnacionalizador, escribiendo una página que concreta esta vez su soberanía sobre sus recursos naturales, cediendo a la energía la consideración de valor estratégico.

Es la hora de pasar de la mercantilización de los hidrocarburos a una concepción de derecho a la energía. La posición de este proyecto apunta a su proyección como bien público, con contenido social, en el marco de la integración regional de nuestro territorio.

Esta decisión soberana y democrática se produce en un contexto económico y social pensado e ideado políticamente, acompañado desde el crecimiento del empleo, la autonomía económica, la inversión y reindustrialización económica, con independencia



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

financiera y saldos positivos de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Por eso, debemos entender que los intereses de la Patria están por sobre los de los hombres; y en este sentido consideremos a la energía como un bien social común y estratégico y no un negocio de combustibles para algunos privilegiados.

Nuestros recursos energéticos del subsuelo pertenecen a la Nación Argentina, cuyo Estado ha encomendado a las empresas privadas, a través de procesos de concesiones, su captación, tratamiento y distribución, que no supone de ninguna manera que se arroguen el derecho de hacer y deshacer a su antojo la disponibilidad de los mismos, ejerciendo maniobras especulativas que afectan al pueblo.

Ahora se expropia una parte de las acciones de Repsol YPF (51%) en el marco de una decisión soberana del Estado, que necesita de una herramienta para el desarrollo de una política energética autónoma. Y se recupera, también, una filosofía de pensamiento: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, además de dar trabajo genuino, construía caminos, escuelas, fomentaba la cultura en los pueblos, tenía un concepto integrador. Era la empresa que realizaba los pozos de exploración, la que fortalecía la industria nacional, la que realizaba un gran fomento al desarrollo nacional al llevar combustible a poblaciones lejanas y rutas alejadas de los grandes centros de consumo; ejecutaba una política social, con fuertes desembolsos en todas las zonas productivas, logrado el autoabastecimiento petrolero y gasífero, porque el petróleo es un recurso natural que permite entre otras cosas, el funcionamiento de nuestras fábricas y maquinarias, generando consecuentemente fuentes de trabajo para miles de argentinos.

Actualmente, la exportación de crudo aumenta, y debemos recuperar YPF para asegurar el abastecimiento interno, fijar los precios locales en función de los costos de producción y no del precio internacional. Debemos asegurarnos de que cualquier empresa nacional en la que exista participación de capitales extranjeros, reinvierta en nuestro territorio el porcentaje JUSTO de las ganancias obtenidas en nuestra república y las que obtienen a través del uso y producción de crudo en pozos NACIONALES.

Debemos reconvertir el saldo negativo de estos últimos años, en donde las reservas petroleras se redujeron de un 18 al 7 por ciento y en gas del 30 al 7 por ciento.

También será oportuna una correcta auditoria que analice los pasivos ambientales, que tenga como objetivo el cuidado del medio ambiente, dilucidando si los pasivos que fueron generados por falta de inversiones se han reflejado en ductos con pérdidas, suelos empetrolados o accidentes injustificados. La actividad petrolera es una preocupación no sólo para las ONG que defienden los recursos naturales, sino también para las autoridades ambientales y gubernamentales, impulsando la recuperación de suelos contaminados y la tarea de saneamiento, que son además generadoras de mano de obra y de inversión dineraria.

Es de público conocimiento que con Repsol a cargo de YPF, nuestra tradición hidrocarburífera cambió. El centro de las decisiones estratégicas de la empresa se mudó de Buenos Aires a Madrid, la política de inversiones en la Argentina quedó condicionada a las decisiones globales de inversión del grupo español, y la política de distribución de dividendos se volvió fuertemente agresiva, involucrando millonarios flujos de fondos desde la Argentina a España (casi U\$S 1.500 millones anuales en 2001 y 2005) imprescindibles para que Repsol pagara las deudas contraídas por comprar



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

YPF.

Es por eso que, en materia de políticas económicas, las decisiones deben ser adoptadas inteligentemente, procurando que ellas no terminen siendo perjudiciales para los intereses que, en definitiva, se busca proteger. Es este el momento adecuado para expropiar YPF, puesto que el contexto nacional e internacional así lo permiten. Nuestra economía ha logrado estabilizarse luego de la gran crisis del año 2001; nuestras exportaciones han aumentado considerablemente permitiendo el ingreso de divisas a nuestro territorio, lo que nos permitiría respaldar a una empresa que hoy cuenta con un pasivo millonario.

Sin embargo, supeditar el apoyo a la ley de expropiación hoy debatida, a un mero análisis de quiénes fueron los culpables, quiénes apoyaron la privatización y por qué se esperó hasta ahora para repensar una política hidrocarburífera, resultaría una de las desinteligencias más grandes que puedan cometerse. Esos interrogantes deben ceder, frente a la necesidad de regularizar una situación energética que merece pronta solución; más luego, podremos y deberemos analizar lo ocurrido, para evitar cometer los mismos errores y crecer como país defensor de los intereses de sus ciudadanos.

De este modo, la expropiación de YPF también nos permite repensarnos como sociedad. Y en este camino, debemos discurrir un nuevo proyecto de educación pública que asegure nuestra independencia nacional, nuestra soberanía política y la justicia social. Tanto en el ámbito primario, como en los secundario y terciario se carece de verdadera formación nacional; se sabe más de historia, de geografía y de problemas económicos universales que de nuestra propia situación.

Por ello, es necesario comenzar un nuevo proceso educativo que ponga énfasis en destacar las realidades nacionales, única manera de formar ciudadanos con un profundo conocimiento de los problemas, con el fin, no sólo de fortalecer la fe nacional, sino también para formar ciudadanos que en el futuro deberán continuar la tarea creativa de sus antecesores, para lo cual se requiere ante todo un correcto análisis de la realidad.

El rumbo de la Argentina hacia un destino de grandeza está trazado. Los intereses particulares, a través de maniobras especulativas, no deben impedir este camino de construcción para la población presente y las generaciones futuras.

Bases y sustento jurídico de las facultades que posee el Estado para llevar adelante una expropiación

PRIMERO: el Estado, al igual que los particulares, puede adquirir bienes y servicios por vía del derecho privado, dándose en la especie una serie de variables que para el caso es de inútil referenciación.

En lo que nos importa, el Estado en su carácter de soberano por vía del derecho público, y haciendo uso del instituto de la expropiación, puede por causa de utilidad pública y por medio de un acto unilateral de la administración del Estado adquirir bienes, previa formalización de un proceso en principio declarativo del propio estado regente, donde exprese la satisfacción del bien común -tanto sea de naturaleza material, como espiritual- por el que impulsa su propuesta, para luego ser tratada en la Legislatura,



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

como expresa la ley que indica que dicho bien será expropiado, al tiempo que finalmente se le abonará al titular del fundo que se expropia una indemnización.

SEGUNDO: debe quedar en claro que no se requiere el consentimiento del particular afectado; si bien es cierto que en ocasiones la administración pública procura obtener los bienes requeridos por otro medio, por ejemplo compraventa o permuta, ello se debe más a razones de economía en los procedimientos administrativos que a un requisito teórico o legal, de intentarla con antelación a la expropiación. Otro medio legal con el que el Estado cuenta para adquirir bienes.-

En este orden de cosas, es basal y claro saber a ciencia cierta cuando estamos en presencia de un bien que puede ser declarado de utilidad pública o no. Para ello, debemos saber que habrá utilidad pública cuando un bien o servicio, material o cultural, común a una importante mayoría de la población, es considerado por el poder público de primordial importancia para protegerlo o proporcionarlo. La utilidad pública con motivo de servicios públicos, caminos y puentes, parques, embellecimiento y saneamiento de poblaciones, conservación de lugares históricos, artísticos y de belleza panorámica, guerra exterior o interior, abastecimiento de artículos de consumo necesario, conservación de elementos naturales explotables, distribución de la riqueza, impedir plagas, incendios o inundaciones, y por último, empresas de beneficio general. Como se ve el objetivo reposa sobre el interés general, en aras de satisfacer el bien común.

¿Qué bienes pueden ser expropiados conforme al artículo 4° de la ley 21.499?

Cualquier bien puede ser expropiado, sea éste mueble o inmueble, siempre y cuando pertenezca a un particular, ya que el Estado no puede autoexpropiarse bienes. Para que un bien sea susceptible de expropiación se requiere que sea precisamente el adecuado para satisfacer la causa de utilidad pública que pretende ser atendida con él. Tengamos en cuenta que el art. 3° de la ley 21.499 hace clara referencia a que los extremos de la ley de expropiación podrán promoverse contra cualquier persona, sea de carácter público o privado, sin hacer disquisición o excepción alguna.-

Siguiendo el orden de ideas plasmado, no escapa al presente análisis que el Estado ha tomado como prioritarios y estratégicos determinados recursos naturales que ha decidido conservar bajo su dominio directo. En este especial caso que hoy aquí nos ocupa, “LOS HIDROCARBUROS”.

Según lo expuesto acerca del dominio directo, podemos conceptuarlo como un sector de recursos naturales sobre los cuales el Estado se reserva su explotación exclusiva y que excepcionalmente podrá concesionarlo, todo lo cual surge en especial del juego armónico de lo expresado por nuestra propia Carta Magna Nacional en su art. 17 y cc. de la misma, como así también la reserva ensayada en la ley 17.319 de Hidrocarburos, ley 21.499 de expropiación y demás legislación vigente en la materia.-

La referenciada manda constitucional reza sobre la inviolabilidad el derecho de propiedad, pero hace una expresa excepción que está dada por la facultad expropiatoria del Estado, fundada en causas de utilidad pública. Como se ve ya desde nuestro máximo orden normativo se refleja la legalidad y legitimidad del instituto usado y no como las



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

autoridades de Repsol afirman que estamos en presencia de un accionar ilegal por parte del Estado Argentino.

La cuestión no se agota allí, pues existe un ordenamiento específico vigente para el caso que es la ley 21.499, que fija los términos, condiciones y procedimientos que se deben llevar a cabo para concretar un proceso expropiatorio, todos los cuales hasta el presente han sido respetados y ensayados, dando de bruces también por dichos argumentos todas las falsas imputaciones vertidas por el expropiado y el Estado español.

¿Cómo es el procedimiento para decretar la expropiación?

El camino expropiatorio se inicia a través de un decreto presidencial, a publicarse en el Boletín Oficial. Este decreto deberá estar debidamente fundado y motivados los requisitos antes mencionados para declarar de utilidad pública el bien producto de la expropiación.

Esta declaratoria de utilidad pública suele incluirse en el mismo instrumento de expropiación, de tal manera que el decreto presidencial se refiere a tres cosas: la declaratoria de utilidad pública, la vía de expropiación intentada y la posterior finalidad que es la incorporación del bien al dominio público.

A partir de aquí comienza el devenir legislativo, el cual trasunta las vías de tratamiento de hecho y de derecho que debe surcar cualquier proyecto de ley para convertirse en tal. Ahora bien, como consecuencia de la aprobación del mentado proyecto y su posterior promulgación como nueva ley de la Nación, y ya adentrados dentro del ámbito de aplicación, pueden suceder distintas situaciones.

La primera de ellas, en aras de avanzar con el proceso expropiatorio y declarada la utilidad pública, en cumplimiento de lo normado por el art. 13 y cc. de la ley 21.499, es que toma intervención el Tribunal de Tasaciones de la Nación, a efectos de determinar el valor del bien materia de expropiación.

En tal inteligencia, son varias los escenarios con los que nos podemos encontrar. Uno esta signado por la figura del advenimiento, por el cual acepta el titular del bien expropiado la indemnización propuesta. Otro caso sería que no estuviera de acuerdo y, conforme lo previsto por el art. 18 y cc. de la ley 21.499, se debe iniciar una acción de expropiación por parte del Estado. Finalmente, también podría darse la figura de la retrocesión, pero no tiene sentido su análisis porque en el caso que aquí nos ocupa sabemos que no están dados los extremos para su ocurrencia.

Poniendo en blanco sobre negro, son frondosos los argumentos de hecho y derecho que han dado vida y fundamento al decreto presidencial, al que se le han sumado voces del acontecer político, todas ellas que holgadamente justifican la intervención por vía de ocupación temporánea, que faculta a la autoridad administrativa en la especie a tomar dicha determinación. En consecuencia, emergen así las causales que dan legitimidad al preliminar acto.

17. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO HELLER

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Es cierto, como ha dicho hace un rato un señor diputado, “que hay otra Argentina posible y que es mejor”. Es la que se comenzó a construir trabajosamente en el 2003, sobre el país devastado que dejó el “vendaval neoliberal”.

Estoy convencido de que hoy estamos legislando sobre un tema crucial para el desarrollo de nuestro país y para el bienestar actual y futuro de los argentinos. En ese sentido, quiero adelantar el voto favorable en general y en particular del Bloque del Frente Nuevo Encuentro.

El petróleo, a pesar del surgimiento y la evolución de fuentes no convencionales de energía, sigue siendo un elemento estratégico en el proceso de desarrollo de los países centrales y en desarrollo. En la matriz energética mundial, el petróleo participa con un 34% y el gas con el 21%. A diferencia de lo que ocurre en la Argentina el carbón, con sus graves perjuicios sobre el medio ambiente, explica un 27% de la oferta energética mundial.

Varios elementos dan muestra de este carácter estratégico.

El elevado precio en el mercado internacional que se explica por el aumento de la demanda (en particular de los países en desarrollo que lideran el crecimiento mundial) y por los costos crecientes de explotación.

Además de su importancia como fuente de energía los hidrocarburos son insumos esenciales para el proceso productivo en general y para el proceso industrial en particular. El sector de hidrocarburos es un importante demandante de bienes industriales y es un insumo de industrias claves como la petroquímica (fertilizantes, plásticos).

El mercado mundial del petróleo está dominado por gigantescas empresas transnacionales que avasallan las soberanías nacionales, que alientan y financian guerras, con el objetivo de asegurarse el dominio de los yacimientos. La mayor parte de los conflictos y golpes de Estado posteriores a la Segunda Guerra Mundial tienen un fuerte olor a petróleo. Los gobiernos de los países imperialistas representan a menudo los intereses de sus gigantes petroleros, mientras que en muchos países dependientes los gobiernos actúan como sus socios, en detrimento de los intereses nacionales. Los ejércitos de los países centrales, a menudo constituyen las avanzadas que desbrozan el camino para que las petroleras puedan desplegar sus negocios. El nombre de Haliburton ha quedado como símbolo de esta estrategia en la invasión a Irak.

Veamos la lista de la revista Forbes de las compañías más grandes del mundo. Dentro de las 20 mayores, Exxon ocupa el primer lugar, siendo además la empresa más rentable del planeta. El 4º lugar lo ocupa la Shell, el 7º Petro China, el 10 Petrobras, el 11 British Petroleum, el 12 Chevron y el 15 Gazprom (Rusia). Es decir de las 20 empresas más grandes, 6 son petroleras, tres de ellas de países centrales (EEUU y Gran Bretaña) y



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

otras 3 del grupo de países denominados BRICs, China, Brasil y Rusia. Es un interesante mapa que refleja la distribución del poder mundial.

Dada esa configuración del poder planetario, la mayoría de los países ha entendido que sólo los Estados nacionales cuentan con el poder y las herramientas necesarias para asegurar la soberanía y colocar la actividad hidrocarburífera al servicio de los procesos nacionales de desarrollo y del bienestar de la población. Veamos cuáles son esas herramientas:

La adopción de marcos legales que otorgan a la actividad hidrocarburífera el carácter de actividad de “utilidad pública” o de “recursos estratégicos”, con todas las derivaciones que de ello se desprenden. Muchas veces, para que estas definiciones tengan más fuerza, se las inscribe en las Constituciones nacionales. El establecimiento de políticas energéticas e hidrocarburíferas que incluyen además de las empresas estatales, un marco regulatorio para alinear los objetivos de las empresas petroleras (estatales, privadas y mixtas) con los objetivos nacionales y para lograr que la renta petrolera, es decir las ganancias extraordinarias, no sea apropiada por las empresas privadas en lugar de beneficiar al Estado, los trabajadores y los consumidores.

El sector de hidrocarburos en la Argentina

La Argentina cuenta con una rica historia petrolífera, en la que la creación de YPF en el año 1922 constituye uno de sus hitos más destacados.

Veamos lo que decía el general ingeniero Enrique Mosconi sobre la empresa YPF:

¿Qué representa YPF para la Nación?, (9 de julio de 1936)

“Haber suprimido para nuestro país la situación de peligro, de inferioridad y de desventaja que existió hasta el año 1922, transformándola en situación de seguridad, de progreso y ventaja...”.

“El conocido y generalizado concepto de que el Estado es mal administrador, deja paso a otro nuevo, respaldado en hechos, de que el Estado es buen administrador cuando quiere serlo”.

“El espíritu nacionalista que YPF ha marcado en su labor, señala el camino de nuestra liberación económica, de nuestro desarrollo industrial emprendido por nosotros mismos, con nuestra voluntad, nuestro esfuerzo y nuestros capitales...”.

“YPF ha dado a la Nación la comprobación de que nuestro país ha alcanzado madurez técnica y administrativa para organizar y conducir con éxito las más difíciles empresas que caracteriza la compleja estructura económica de las naciones modernas. Este sería, sin duda, el rumbo que debíamos marcar para convertir a nuestro país en centro de gravitación de las naciones meridionales de nuestra América”



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

En el plenario de comisiones para el tratamiento del actual proyecto de ley, un diputado señaló que “el petróleo no tiene ideología”, que lo único que importaba eran los logros cuantitativos de extracción y comercialización.

Nada más lejos de la realidad. Las diferentes políticas petroleras aplicadas por los diferentes gobiernos, reflejaron la ideología de las clases dominantes y de los gobiernos. Los dilemas estatal vs. privado, nacionalización vs. extranjerización, regulación vs. desregulación y dominio estatal vs. dominio provincial, han sido encarados de diferentes modos en la historia argentina, en función de la ideología de los gobiernos y de los intereses y de la presión de las empresas petroleras. Comparemos aquellos dichos de Mosconi con la tristemente célebre frase de Dromi, “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado, y saquemos conclusiones sobre si el tema es ideológico o no.

Obviamente, no podemos desarrollar en esta intervención la evolución histórica de la actividad hidrocarburífera de nuestro país, pero sí queremos hacer una breve referencia a la evolución del sector en el marco del modelo neoliberal de los años 90, proceso que ha dejado una profunda huella en la situación del sector.

La solución de los dilemas planteados fue tajante: se optó por la privatización, la extranjerización, la desregulación y la provincialización de la producción de petróleo y gas. La política neoliberal no sólo redujo la participación del Estado en el sector energético. La desregulación transfirió a las grandes empresas del sector toda la política de hidrocarburos.

La política neoliberal negó el carácter estratégico del sector, reconociendo exclusivamente su valor económico. El petróleo y el gas eran tratados como cualquier otro bien, pudiendo las empresas privadas, decidir su mix de producción, la cuantía de sus exportaciones y la política respecto de las reservas.

La desregulación tomó cuerpo en tres decretos firmados a principios de 1989 (decretos 1.055, 1.212 y 1.589), que reconfiguraron profundamente la estructura del sector. Estos decretos traducían un afán desregulador a favor de las empresas privadas extranjeras. Los decretos convirtieron los contratos de exploración y explotación vigentes en concesiones de libre disponibilidad. Las empresas pasaron a controlar el petróleo extraído sin reconocimiento monetario alguno a YPF y sin preocuparse por la evolución de las reservas. Estos decretos, que siguen vigentes, deberán ser anulados a la luz de las transformaciones que el proyecto que hoy estamos tratando impondrá en el sector de hidrocarburos.

Al mismo tiempo, se implementó un proceso de dismantelamiento progresivo de YPF, vendiendo refinerías, buques, gasoductos, petroductos y declinando su participación en importantes yacimientos.

Finalmente, la ley 24.145/92 convirtió a YPF en una sociedad anónima. En 1997, se inició la desnacionalización de YPF y en 1999 prácticamente la totalidad de las acciones estaban en poder de Repsol, que pasó a controlar la compañía. Las decisiones relativas a la marcha de YPF comenzaron a tomarse en España obedeciendo a los objetivos de Repsol, los cuales se divorciaban en forma creciente de los intereses nacionales.

Los objetivos de Repsol consistían, exclusivamente, en maximizar y girar a España las utilidades, política que conducía a reducir las tareas de exploración y, en consecuencia,



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

a una declinación continua en las reservas comprobadas.

Según el diario español El País, Repsol “decidió comprar YPF para dejar de ser una pequeña empresa local, sin apenas producción, para jugar en la primera división de la liga petrolera”.

Sin embargo, las recetas que los españoles querían aplicar en nuestro país se encontraban en las antípodas de lo que recomiendan para sus propios recursos. En la Constitución española, su artículo 128, denominado “la función pública de la riqueza” dice lo siguiente:

“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

“Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en el caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.”

Cuando lo hacen ellos responde al interés general, cuando lo hacen los países en desarrollo como el nuestro lo denominan “confiscación” y acuden al remanido argumento del “clima de negocios o de la “seguridad jurídica”.

Los resultados de la privatización han sido altamente favorables a Repsol y fuertemente desfavorables a los intereses de la Nación Argentina. Entre 1997 y 2010, YPF distribuyó dividendos por U\$S 13.246 millones, el 85% de las utilidades netas del período, lo cual anuló las posibilidades de capitalización de la compañía. Con ellos financió su expansión global para posicionarse en Trinidad Tobago, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador y Argelia entre otros países. Es decir, lo que debían haber invertido en la Argentina, se invirtió en el exterior, en negocios que, según su presidente, Antonio Brufau, le generaban mayor valor agregado (eufemismo por ganancias) y disminuían el riesgo gracias a la diversificación geográfica.

Durante 2011, YPF realizó la exploración de 30 pozos, cuando tenía concesionadas unas 60 áreas, un valor exiguo si lo comparamos con los 110 pozos exploratorios por año que, en promedio, realizaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales antes de la privatización.

Repsol intenta distorsionar la realidad y encubrir su verdadero accionar a través de una costosa campaña en los diarios, campaña que es apoyada por los medios de comunicación monopólicos y por algunos legisladores que repiten los argumentos españoles (“inseguridad jurídica”, “aislamiento internacional”, “represalias a las exportaciones argentinas”).

La verdad es que desde que Repsol ingresó a YPF la producción de petróleo de esa compañía se redujo en un 44%, entre 1997 y 2011. Repsol fue responsable del 54% de la caída en la producción de petróleo y 97% de la reducción de la producción de gas en ese período.

Caída de la producción y reservas, disminución de la actividad de exploración, maximización del giro de utilidades al exterior configuran un comportamiento depredatorio del recurso y de virtual vaciamiento de la empresa.

El sector de hidrocarburos en la Argentina



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

En la matriz energética argentina la oferta proveniente del petróleo alcanza al 36,8% y del gas el 51.6%. La suma de ambos arroja un 88,4%. Además, el 92,4% proviene de recursos no renovables. En la comparación internacional se destaca una muy alta participación del gas en la oferta energética nacional, mientras que sus reservas -gracias a la política de exportación del recurso diseñada en los 90- y a una caída en la exploración y la producción-, cayeron del equivalente a 17 años en 1997 a sólo 7 años en 2011.

Entre las primeras 15 empresas que más venden en el país hay tres empresas del sector energético: YPF en el puesto 1°, Panamerican Energy en el 6° y Esso en el 12. Es decir, el sector está privatizado, fuertemente concentrado y desnacionalizado.

El nuevo proyecto

Como lo han planteado otros diputados, somos partícipes de una jornada trascendente, un día de recuperación de la soberanía nacional, una jornada que pasará a la historia como un acto reparador de esa triste sesión en la que se festejó la privatización de YPF, una empresa que desde su nacimiento y en buena parte de su vida posterior se constituyó como un emblema de la nacionalidad y un motivo de orgullo para los argentinos.

Se trata, nada menos que de recuperar para el Estado nacional la propiedad mayoritaria y el control de las decisiones de una empresa clave del sector hidrocarburífero. Estamos dejando atrás otra página del modelo neoliberal, desregulador, privatizador y desnacionalizador vigente en los años 90 y escribiendo una página de soberanía concreta -no declamatoria- sobre nuestros recursos naturales.

Estamos recuperando las mejores tradiciones de nuestra rica historia petrolera, sumándonos a esta oleada de actos también valientes y trascendentes que otros países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador y Venezuela han llevado a cabo en defensa de su soberanía sobre los recursos naturales. Para algunos de estos países se trata de medidas inéditas, que se adoptan por primera vez desde el nacimiento de su independencia política. Sabemos que el neocolonialismo, mantenía formalmente la soberanía nacional mientras que depredaban los recursos naturales en beneficio de las compañías transnacionales y los Estados imperialistas.

Nuestro país ha registrado, desde el año 2003 hasta la actualidad el proceso de crecimiento más importante de su historia. Esta expansión productiva no puede explicarse sin un vigoroso proceso de inversiones. Por eso no tiene sentido lo que plantean algunos gurús sobre el proceso de inversión. Para defender su posición señalan que nuestro país recibe menos inversión extranjera directa que la que captan otros países de América Latina. No comprenden (o no quieren comprender) que este modelo no se basa en la inversión extranjera. Los actores principales del proceso de inversión son los actores domésticos, las empresas (incluidas las pymes) y la mayor inversión pública.

Y lo más significativo es que este aumento de la producción ha sido acompañado por la inclusión de amplios sectores de la población gracias a un drástico aumento del empleo y a una mejora en la distribución del ingreso, explicada por la inclusión de cientos de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

miles de compatriotas a través de medidas tales como la asignación universal por hijo y el aumento de la cobertura del sistema previsional. En el plano de la lucha contra la pobreza, la mayor inclusión y la mejora en la distribución del ingreso queda mucho camino por recorrer, lo que no significa no reconocer los grandes logros que se han alcanzado.

¿Por qué es importante la sanción de la ley que hoy estamos debatiendo?

Para mantener un ritmo sostenido de crecimiento debemos contar con una infraestructura energética que lo haga posible. La combinación de aumento en la producción y la industria y caída en la producción de hidrocarburos sólo cierra con una mayor importación, mayor uso de divisas y más erogaciones fiscales. Sería un proceso no sustentable que, en algún momento del tiempo, se traduciría en desaceleración del crecimiento y el empleo.

Es cierto que la Argentina tiene que diversificar su matriz energética, disminuyendo su dependencia de los hidrocarburos y ampliando la participación de energía hidráulica, atómica y recursos no convencionales (eólica, solar). Pero estos procesos estructurales son lentos. Durante muchos años los hidrocarburos seguirán siendo el componente central de la matriz energética.

Algunos diputados preopinantes han señalado que la expropiación de las acciones de Repsol solo conseguiría que el Estado contara con el 15% del mercado de hidrocarburos (la mitad de la participación de YPF en el mercado local).

Se trata de una falacia: las acciones conjuntas del Estado nacional y las provincias estarán cohesionadas gracias a un pacto de sindicación por 50 años, que les permitirá tener el 51% de las acciones de YPF. ¿Una reflexión al respecto: a los señores diputados que piden que también se expropie al Grupo Petersen, no se les ocurrió pensar que tal vez sea la mejor solución para los intereses de ese grupo?

Pese a que la participación de YPF en la producción de petróleo cayó del 42% al 34% entre 1997 y 2011 y la de gas del 35% al 23% en ese mismo período, YPF sigue siendo un actor protagónico de la exploración, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos y puede recuperar rápidamente su participación anterior, en la medida en que gracias a esta legislación se implemente un plan estratégico de aumento de la producción y las reservas.

En otras palabras, YPF será una herramienta poderosa para avanzar en el objetivo de aumento de la producción, impulsar el proceso de reindustrialización, establecer un mix de productos acorde con las necesidades, actuar como “empresa testigo” en materia de precios y, en definitiva, recuperar el autoabastecimiento perdido (eliminación del déficit energético).

Las alianzas con otras empresas petroleras, privilegiando a aquellas empresas estatales de países en desarrollo, permitirán obtener recursos adicionales para aumentar la exploración y la explotación, y aplicar nuevas tecnologías.

El control estatal de YPF permitirá que el Estado, los consumidores y los trabajadores tengan una mayor participación en la renta petrolera, es decir la diferencia entre el precio internacional y los costos de producción. Esta renta petrolera crece con el aumento de la cotización internacional del crudo, que ha más que compensado la reducción de la producción. Una estimación de la renta petrolera permite estimar que en



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

el año 2011 se aproxima a los 13.000 millones de dólares. La recuperación de YPF permitirá tomar decisiones sobre cómo distribuir la renta petrolera (las ganancias extraordinarias) entre la Nación, las provincias, las empresas, los consumidores y las empresas petroleras.

El corazón del proyecto de ley es su artículo 1º, que declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la Republica Argentina el logro del autoabastecimiento. Entre los dilemas de la política petrolera que mencionáramos anteriormente, este proyecto es parte de una política energética que opta por la regulación y la mayor participación del Estado, revertir la desnacionalización y lograr un equilibrio entre los intereses de la Nación y las provincias.

Este proyecto se inserta decididamente en un proceso de creciente participación del Estado en las áreas estratégicas de la economía. Las formas de mayor participación estatal incluyen la mayor propiedad pública, la mejor regulación y un control eficiente, de modo de contribuir a fortalecer este modelo de desarrollo e inclusión que estamos llevando adelante.

Quienes se oponen a esta medida recurren nuevamente al remanido argumento de la intrínseca ineficiencia del Estado para llevar adelante proyectos que hacen al bien público. YPF ha demostrado en su historia que cuando la empresa desarrolla su actividad en un marco regulatorio adecuado y con profesionales eficientes y consustanciados con los objetivos de la empresa, los resultados son muy positivos. No dudamos de que éste será el camino que recorrerá una YPF controlada por el Estado nacional.

La presidenta Kirchner ha señalado que la reforma constitucional de 1994 le sacó poder de negociación al Estado porque fragmentó ese poder dejándolo en manos de provincias que debieron enfrentarse a compañías de altísimo poder de inversión; una expresión con la cual acuerdo. A resolver este problema se encamina la distribución de las acciones expropiadas, con el 51% para el Estado nacional y el 49% para las provincias productoras, a partir de un pacto de sindicación de esas acciones que permite obtener un control eficiente y una gestión cohesionada.

Además, el proyecto de ley del Ejecutivo incorpora una fuerte barrera a futuras privatizaciones, al declarar que la actual expropiación se realiza por causa de utilidad pública, prohibiendo la transferencia de tales acciones salvo con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Parlamento, lo que le da una fuerte impronta de continuidad y seguridad jurídica.

El gobierno español ha salido en defensa de Repsol anunciando distintas medidas de retaliación, como las de cesar las importaciones españolas provenientes de la Argentina y denunciar a la Argentina ante organismos internacionales. Nuestro país ha adoptado una decisión soberana basada en la declaración de utilidad pública y fundada en su legislación de expropiación, tal como España lo prevé para la defensa del interés público en su Constitución. No podemos descartar la continuidad de las presiones españolas en favor de su empresa, aunque la única vía legal que le queda a Repsol será, probablemente, acudir al CIADI en función del Tratado Bilateral de Inversiones entre la Argentina y España, lo que pone de relieve la vigencia de los más de cincuenta tratados bilaterales de inversión que limitan significativamente la soberanía argentina, sobre los



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

que habría que evaluar su desactivación, como otro avance más en la profundización del modelo.

Si bien con la recuperación de YPF para el Estado nacional hemos dado un gran paso, quedan pendientes una serie de medidas para reconfigurar el sector de hidrocarburos en función de nuestro desarrollo nacional independiente.

Entre ellas cabe mencionar:

Diseñar una política energética integral que incluya planes de corto, mediano y largo plazo para que el modelo de desarrollo e inclusión no encuentre en la infraestructura energética un obstáculo insalvable.

Dentro de esta planificación, el plan de acción de la YPF recuperada ocupa un lugar preponderante.

Cambiar la matriz energética desarrollando otras fuentes de energía, en primer lugar la hidráulica, cuyos recursos son renovables y no afectan al medio ambiente. También la energía nuclear debería tener una mayor participación, sabiendo que contamos con los recursos científicos y tecnológicos necesarios. Otras fuentes no tradicionales, como la eólica y la solar merecen también un rol más importante en la oferta energética.

Es necesario también anular las leyes y decretos sancionados en la década de los 90, que siguen vigentes y que apuntan a un proceso de desregulación en favor del capital nacional y transnacional más concentrado.

Hay que revisar los tratados bilaterales de inversión firmados en la década de los 90 que, como se pone de manifiesto en el caso del petróleo podrían limitar la adopción de medidas soberanas. Esta revisión debe extenderse a la Ley de Inversiones Extranjeras - ley 21.382- sancionada en 1993.

Se deben conformar alianzas y proyectos conjuntos con otras empresas petroleras estatales de nuestra región (los nombres de Petrobras y PDVSA aparecen como los primeros candidatos) de modo de contar con recursos adicionales para las cuantiosas inversiones que necesitamos en el sector.

Pero, queda claro que estas tareas pendientes no deben menoscabar la importancia histórica de la ley que estamos tratando. El consenso mayoritario que se advierte en la población y en el seno de las fuerzas políticas constituye, sin dudas un hecho auspicioso. Este consenso se asienta en una recuperación del rol de un Estado inteligente y eficiente en un modelo de desarrollo con inclusión y equidad distributiva.

18. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MONGELÓ

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Vengo a manifestar mi profundo convencimiento de que hoy estamos dando un paso trascendental en la consolidación de la soberanía y de las reales posibilidades que como nación tenemos de desarrollarnos, de las reales posibilidades que como nación tenemos de crecer y de las reales posibilidades que como nación tenemos de avanzar de una manera real y concreta en la industrialización de nuestra patria.

La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin duda, se enmarca en los grandes hitos de la historia del patriotismo y de la defensa de los intereses nacionales ante el embate de las grandes transnacionales que, desde el comienzo de los tiempos, se llevaron el oro y nos trajeron su peso en adoquines.

Recuperar YPF tiene un profundo sentido nacionalista, entendiendo que nunca antes el Estado se debió desprender de la conducción y manejo de un recurso estratégico como lo constituyen los hidrocarburos. En la década de los noventa, la Argentina era uno de los pocos países que tenía el control sobre sus reservas hidrocarburíferas, y es entonces cuando comienza un proceso sistemático y profundo de privatización de las empresas del Estado, y es en el marco de esa filosofía funesta que se produce la mayor de todas las entregas del patrimonio de los argentinos, la entrega de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y con ellos la más grande porción de soberanía entregada voluntariamente. Al poco tiempo de su entrega, a los pocos días se corre el velo y queda al descubierto cuál fue la verdadera estrategia, la estrategia oculta de un plan siniestro de extracción de nuestros recursos y de las utilidades que le son propias, las que eran automática y sistemáticamente llevadas fuera del territorio nacional para avanzar en un mecanismo de especulación financiera que iba lentamente matando a la histórica empresa privatizada. Nunca, la empresa española Repsol invirtió un centavo en la producción; nunca la empresa española Repsol invirtió un centavo en la exploración y nunca la empresa española Repsol invirtió un centavo en la investigación de nuevos pozos petrolíferos, y cuando se detectaba alguno de ellos sólo era a los efectos de que los especulativos dividendos crecieran en las bolsas del mundo. Este colapso quedó claro con los cerca de diez mil millones de dólares que el país tuvo que importar durante el año 2011. Este colapso quedó claro con los altos precios y las largas horas de espera que todos los argentinos debemos soportar para obtener el preciado recurso, y esto marcó claramente el límite de tolerancia del gobierno y del país que, a través de la decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se recupera y toma nuevamente el control de los recursos estratégicos y de la histórica empresa, y digo "histórica" porque, a través de la decisión que hoy estamos tomando, pondremos nuevamente a YPF tal cual en sus comienzos, como la idearon don Hipólito Yrigoyen, Mosconi, el General Perón y tantos otros patriotas al servicio de los grandes intereses nacionales.

YPF tenía cincuenta y cinco mil empleados cuando era nacional, es cierto, y luego de la privatización sólo quedaron seis mil, con lo que cuarenta y nueve mil personas quedaron en situación de desocupación y con ellas cuarenta y nueve mil familias de clase media argentina vieron aflorar un futuro incierto. Ciudades enteras como General Mosconi, Tartagal, Luján de Cuyo, Berisso, Ensenada, Cutral Có, Plaza Huincul y Caleta Olivia, entre otras localidades petroleras de nuestro país, sufrieron el embate de esta privatización y las graves consecuencias sociales que conlleva.

Párrafo aparte merece el sistema de explotación de gas envasado en garrafa que, según



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

el costo del mercado, todos los argentinos deberíamos estar pagando no más de siete pesos la garrafa de diez kilogramos, cuando hoy nos la están cobrando infladamente treinta y ocho pesos, y éste no es un dato menor si tomamos en consideración que los usuarios son cerca de trece millones de argentinos, y éste no es un dato menor si tomamos en consideración que hay aproximadamente dos millones de argentinos que por no poder contar con una garrafa de gas, dos millones de argentinos que por no poder pagar una garrafa de gas deben cocinar con leña, con carbón o utilizar cualquier otro tipo de combustible, hasta basura de ser necesario y ésta es una realidad que se da no sólo en mi provincia.

Quiero también en esta noche realizar un reconocimiento y homenaje a quien fuera diputado nacional por la provincia del Chaco, un dirigente político profundamente nacionalista, un dirigente político profundamente humanista, por sobre todas las cosas, un dirigente político profundamente patriota, el diputado nacional, mandato cumplido, Claudio Ramiro Mendoza, quien en el momento de efectuarse la votación que privatizaba la emblemática YPF se oponía tenazmente al avance privatizador de los yacimientos petrolíferos, y esta oposición le significó la expulsión del bloque al que pertenecía entonces. El tiempo, la historia y un gobierno nacional y popular le han dado la razón, y es para mí hoy un altísimo honor poder reivindicarlo en este recinto.

Por eso, mi voto será a favor de la recuperación y nacionalización de los hidrocarburos, nada más señor presidente.

19. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA PILATTI VERGARA

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Estamos haciendo historia, porque estamos recuperando nuestra soberanía y, a la vez, impulsando una profundización de las transformaciones sociales y políticas iniciadas en la Argentina a partir del 25 de mayo de 2003.

En este momento, con coraje y entusiasmo patriótico, el pueblo argentino nos acompaña.- Y nos acompaña mayoritariamente porque el pueblo sabe que el mundo actual es escenario de luchas implacables por los recursos naturales, que se llevan a cabo con botas militares o agazapadas en privatizaciones arregladas.- Para comprobar lo que decimos, basta con observar la conflictividad social e internacional vigente en los últimos tiempos. Y ello, con una matriz, cual es la concepción neoliberal de que el Estado debe estar al servicio de la rapacidad multinacional. YPF Repsol es un calco



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

repetido de esta experiencia impuesta por el neoliberalismo en el mundo. El modelo consistió siempre en que el Estado privatizador debía asumir las deudas de la empresa, mientras ésta implementaba solamente las inversiones necesarias para obtener su máxima rentabilidad y, por lo tanto, omitiendo y excluyendo todas las implicancias de las inversiones y las estrategias productivas relacionadas al interés nacional y al bien común. Y por eso, justamente, es que el accionar de empresas como Repsol YPF deriva en situaciones inverosímiles, como que países con grandes reservas y potencial de producción energética se ven obligados a importar energía a precios mayores que los que les costaría producir. Por esta simple razón los medios de comunicación que se oponen al despliegue del interés nacional, se han esforzado en tergiversar la necesidad y la trascendencia del proyecto de ley. Tampoco han ahorrado manipulaciones mediáticas sobre el contenido y la significación de las medidas adoptadas por el gobierno, a sabiendas de que el país no puede crecer sin manejo autónomo y soberano de la energía, que la continuidad del desarrollo actual y del futuro se hace imposible sin el manejo de los recursos propios.- No son comunicadores sociales comprometidos con la verdad. Están comprometidos con la promoción y sustentación del neocolonialismo extractivista, que disfraza el saqueo bajo el ropaje de la apertura comercial internacional. Tras este concepto que se pretende dogma de fe que debemos abrazar, se esconde la idea y la práctica de que el Estado está para abogar por empresas tramposas como Repsol, y no para servir a la sociedad y preservar el futuro de la Nación. Por todo ello, debemos asumir que la expropiación del 51% de las acciones de Repsol, la intervención de YPF y la introducción de la gestión estatal en la empresa, son medidas necesarias para comenzar A REVERTIR LA DEPRDACION ENERGETICA.- Según el informe del equipo dirigido por el investigador y economista Claudio Katz: “Durante una década REPSOL lidero el vaciamiento de pozos, reservas e instalaciones preexistentes. Extrajo lo máximo posible sin invertir y expatrió ganancias en forma escandalosa. Sin embargo, esta conducta no irritó a ninguno de los críticos neoliberales de la expropiación en curso.”- Ahora cuestionan la “violación del orden jurídico”, olvidando el total incumplimiento de los contratos por parte de la firma.- Y recíprocamente, estos mismos personeros son los que aprueban los atropellos contra los derechos de los trabajadores petroleros, sin extender a ellos, los mismos principios de seguridad jurídica.

En su afán por conmocionar a la opinión pública, para empañar de algún modo la alegría y el fervor que despiertan las medidas de recuperación de YPF, advierten tenazmente sobre las apocalípticas consecuencias de “aislarse del mundo”, sin mencionar el récord Guinness de pronósticos fallidos que los han acompañado en estos últimos nueve años.

Alertan sobre todo contra el inminente conflicto que la expropiación suscitará entre argentinos y españoles, como si Repsol fuera la representación del pueblo español, cuando en realidad es una empresa privada en la que el grueso del capital se encuentra distribuido en varios centros financieros del mundo. Además, no se especializa en enriquecer el mercado interno español, sino en localizar sociedades en paraísos fiscales,



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

POTENCIANDO ASI LA EVASION IMPOSITIVA QUE HA DETERIORADO las finanzas españolas, contribuyendo a la necesidad de ajuste y a la recesión, que enfrentan al gobierno defensor de Repsol contra su propio pueblo.

Por todo lo dicho, el proyecto de ley que estamos tratando es una propuesta emancipadora. Inicia una etapa de la vida nacional hacia el destino buscado por todos los grandes argentinos. Y eso exige y obliga a todos los argentinos de bien, a comprometer su apoyo, porque hoy se abre un proceso para hacer entre todos el país que soñamos. La Argentina ha dado muestras -a lo largo de su historia- de su capacidad para realizar y llevar adelante los grandes emprendimientos de la modernidad.- Y también esa misma historia ha dado muestras de que todos los intereses estratégicos del país han sido siempre blanco de otros grandes intereses que codician el usufructo de nuestras riquezas.-

Los procesos de los 90 y las denostaciones sistemáticas de hoy, no estaban fundados sólo en la rentabilidad de nuestras empresas y patrimonios estratégicos, sino en la voluntad de desmantelarnos como Nación.

Por eso es que en la actualidad la tarea esencial no trata sólo de déficit más o déficit menos, sino en volver a organizar el desarrollo de la energía, la siderurgia, los transportes... y en estos campos sólo el Estado puede actuar con el objetivo de beneficiar a la Nación y por extensión, al pueblo argentino. Por esta razón, hoy como siempre la disputa por el futuro se resume en: procesos populares o neoliberalismo. El viento no se puede parar con las manos: la Argentina marcha ahora, irremediabilmente, hacia su destino.

20. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA PERRONI

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Estos días marcarán la historia de nuestro país. Estamos viviendo un momento histórico para todos los argentinos.

Brevemente, voy a referirme a la expropiación de YPF desde mi lugar de militante, ya que muchos compañeros se refirieron desde lugares históricos y técnicos.

Quiero expresar mi alegría y orgullo por formar parte de este proyecto nacional que se iniciara en el año 2003 con Néstor Kirchner como conductor político del actual proyecto y modelo de país, proyecto que hoy continúa nuestra querida Presidenta Cristina Fernández de Kirchner

Esta ley marcará un antes y un después para el país, y esto quedará reflejado en el



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

desarrollo de industrias y empresas. Dejaremos de ser un país agroexportador para convertirnos en una Nación con capacidad de poder incorporar valor agregado a nuestra producción local.

Por otro lado, quiero agradecer a los diputados radicales de la provincia de Corrientes por apoyar en general el proyecto que estamos tratando. Pero quiero recordar al diputado Portela que hasta el 2008 se presentaban como “radicales K” y se empujaban para salir en la foto con Néstor Kirchner.

Después de 13 años de gobierno radical en Corrientes le pregunto ¿cuál es la política energética que impulsan desde el gobierno provincial de Corrientes?

Además, deseo aclarar en este honorable recinto que las obras energéticas más importantes que se realizan en mi provincia son ejecutadas con fondos del gobierno nacional.

Desde el 2003, hay en la Argentina un cambio saludable en el patrón de desarrollo del país, que nos permite tener un crecimiento económico sostenido en los últimos años.

YPF será a partir de ahora de todos los argentinos.

Señor presidente: como militante de este proyecto nacional y popular quiero decir que voy a votar en forma afirmativa por el dictamen de mayoría.

¡Señoras y Señores legisladores YPF es ARGENTINA!

21. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ROGEL

Texto y fundamentos del proyecto de ley del que es coautor el señor diputado por el que se derogan los decretos 1.055, 1.212 y 1.589/1989 y se revierten al Estado nacional determinadas concesiones de explotación y permisos de exploración

INSERCIÓN DIP. ROGEL – PROYECTO 2361-D-2012

FUNDAMENTOS

El problema de los recursos de hidrocarburos que afecta ya gravemente a nuestro país, es simplemente el emergente de un colapso generalizado que se ha empezado a detectar a través de los propios informes de las compañías petroleras más importantes del mundo. Las informaciones disponibles, muestran que lo que decimos, no son simples manifestaciones de oportunismo político, sino lo que hemos receptado de esos informes. Como ejemplo podemos citar que Chevron Texaco, la segunda empresa energética de los EE.UU. informa de la existencia de un notable desequilibrio entre su producción y la restitución de sus reservas. Royal Dutch Shell declaró que había sobreestimado sus reservas de crudo y gas natural en un 20%, habiendo bajado sus reservas en más de un 10%, lo que implica una pérdida de neta de 5.300 millones de barriles de crudo. Es importante mencionar que la tasa de reposición de Repsol YPF, es la más baja entre las compañías petroleras del mundo, siendo de 18%.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Estos ejemplos demuestran que la voracidad financiera de las empresas, donde lo único importante ha sido extraer, vender sin explorar nuevas fuentes, está creando complicaciones cada vez mayores, con un horizonte a la vista altamente preocupante. Al respecto Mike Rodgers que firmara un estudio publicado por PFC ENERGY de Washington D.C. sostuvo que "En efecto, las existencias mundiales de crudo son todavía muy dependientes de las posesiones de antaño, descubiertas durante los tiempos de auge de la exploración" lo que revela la falta de exploración y de búsqueda de nuevas reservas, y el Dr. Michael Klare, profesor del Hampshire College, y autor de *Blood an Oil: The Dangers and Consequences of America's Growing Petroleum Dependency*, es contundente al explicar "Qué tan pronto ocurrirá el aplastamiento energético y qué tan severo puede ser son materia de un debate considerable. En gran medida, este debate gira en torno al concepto de "clímax petrolero" o producción máxima sostenible diaria. En los cincuenta un geólogo del petróleo, M. King Hubbert, publicó una serie de ecuaciones que muestran que la extracción de cualquier pozo o reserva de crudo seguirá una curva parabólica en el tiempo. La producción aumenta rápidamente después de la perforación inicial y luego pierde fuerza conforme la extracción alcanza su máximo, su "clímax" o "pico", como se lo conoce por lo común. Este se alcanza casi siempre cuando se ha extraído la mitad del monto total del petróleo de dicha fuente, después de lo cual la producción cae a una tasa de caída más y más pronunciada. En 1956 y usando esas ecuaciones, Hubbert predijo que la producción de crudo convencional (es decir líquido) en Estados Unidos tendría un pico o clímax a principios de los setenta. Su predicción provocó mucha mofa en esa época, pero le dio gran renombre cuando en efecto la extracción estadounidense llegó a su nivel pico en 1972. Debido a los insuficientes datos que había entonces, Hubbert no pudo aplicar sus ecuaciones a la producción estadounidense. Sin embargo, él predijo que la producción global -al igual que la estadounidense- alcanzaría eventualmente su nivel pico y después iniciaría su declive irreversible. Sostuvo que "Aun con una producción mayor de tales sustitutos, la inevitable contracción en las existencias mundiales de petróleo solo pospondrá unos cuantos años la crisis. Eventualmente, los científicos y los ingenieros podrían desarrollar fuentes totalmente nuevas de energía -por ejemplo sistemas geotérmicos, de biomasa o con base de hidrógeno- pero a las tasas actuales de desarrollo, ninguna de estas alternativas estará disponible en la escala suficiente cuando los productos del petróleo comiencen a ser escasos.

Así, aunque en este momento los principales accionistas de Exxon, Chevron y otros gigantes del petróleo no manifiesten su preocupación, el resto de nosotros quedamos muy perturbados por los informes recientes. Pese a todo el optimismo mostrado por Washington, estamos ante una amenaza difícil de escapar y sustancial: la escasez global de energía solo traerá penosas consecuencias para nuestra economía y la de resto del mundo. Esta escasez próxima no puede evadirse con solo desecharlo ni puede borrarse perforando en el refugio nacional ártico, que contiene, por lo que se sabe tan poco petróleo que no hace diferencia significativa en las existencias estadounidenses. Solo un ambicioso programa en materia de conservación de la energía que entrañe la imposición de estándares mucho más estrictos de eficiencia en los combustibles usados y un financiamiento masivo en la investigación y desarrollo y luego un despliegue de gran



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

escala de combustibles alternativos, ambientalmente amigables, pueden ofrecer la esperanza de evitar la crisis que de otra manera se avecina."

Si el panorama global que muestra el distinguido investigador estadounidense es preocupante, lo referido al caso argentino llega a extremos de gravedad que no pueden soslayarse y demuestra que todo el proceso de desregulación y desnacionalización de los hidrocarburos, no fue el producto de decisiones desacertadas de política económica, sino el resultado de un plan deliberado para agotar nuestros recursos, sin las inversiones indispensables para restablecer el equilibrio necesario entre la explotación y las reservas.

Como se podrá ver en datos que se consignarán más adelante al consignar las consecuencias de la desregulación la explotación irracional de los recursos energéticos preanuncia una crisis que es necesario evitar. Y los antecedentes que se pueden mostrar lo evidencian claramente. Solo cabe recordar que el 26 de marzo de 2004 la Secretaría de Energía dio a conocer la Resolución 265 por medio de la cual se ponía de manifiesto que la situación de abastecimiento de gas al parque generador termoeléctrico se transformó en complicada dado que el mismo "no está plenamente en condiciones de operar física y financieramente sobre la base de combustibles líquidos". Eso la llevó a establecer un programa de racionalización energética, buscando la importación de combustibles líquidos y gaseosos y estableciendo un plan para alentar la reducción del consumo de gas y electricidad (Resolución 415) Estas racionalizaciones determinadas por un comienzo de crisis, no reparaban que se hablaba de reducciones al consumo, ignorando el hecho de que hay más de 13 millones de personas que carecen de provisión de gas por redes según el INDEC, aunque nuestros propios estudios llevan esa cifra a 15 millones de personas. A partir de allí y no obstante las medidas restrictivas adoptadas, la situación no ha variado sustancialmente, y es por eso que es necesario importar gas, para cubrir el faltante necesario que satisfaga el consumo interno. Ejemplo de ello es el preacuerdo firmado por ENARSA con la empresa Qatargas de Qatar para importar durante veinte años 5 millones de metros cúbicos anuales de GNL.

No existiendo una auditoria integral de reservas, por parte de técnicos argentinos independientes, no vinculados a las empresas privadas no se puede saber con exactitud el nivel de reservas existentes, ya que no resultan confiables los datos que suministran las petroleras privadas.

En el actual estado en que se encuentra la producción, el consumo y la exportación, los niveles de reservas de gas y petróleo no llegan a los 7 y 6 años respectivamente, cuando a fines de la etapa estatal llegaban a 36 y 16 años respectivamente. No obstante ello reiteramos los datos que circulan no nos merecen fe, por lo tanto cualquier decisión técnica, económica o política que se adopte en el futuro sobre la base de los mismos, no es creíble, y tiene grandes posibilidades de estar equivocada. Ante los constantes requerimientos de desgravaciones impositivas para los gastos exploratorios, son muchos los técnicos independientes que piensan que realizando una estimación disminuida de las reservas de petróleo, los concesionarios pueden conseguir exenciones impositivas desusadas en el mundo. También existen presunciones sobre una sobrestimación de las gasíferas, originada en la necesidad de conseguir autorizaciones de exportación, que se ha convertido en la parte más rentable del negocio de gas natural.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Siendo el conocimiento de las reservas de gas y petróleo un dato insoslayable en la fijación de la política energética, y considerando las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo hasta hoy, la conclusión natural es que la política del sector la siguen fijando las empresas concesionarias de acuerdo a sus intereses, que no son precisamente los de la Nación y el actual estado de cosas está perjudicando de manera irreversible el futuro de la comunidad, al entregar sus bienes estratégicos, limitándose el Estado a ejercer retenciones sobre lo que exportan, como si ello fuera un considerable logro, y aportara recursos importantes. No se tiene en cuenta que tampoco existe el debido control sobre lo que declaran las empresas, lo que no es algo nuevo en nuestro país, pero a lo que debe ponerse fin, y si bien deben liquidar lo que obtiene por exportaciones ello no es suficiente porque el control es casi inexistente.

La crisis energética en ciernes provocada por toda la estructura jurídica inconstitucional del menemismo que no fue modificada quedó una vez más evidenciada, por un importante personaje del mundo petrolero, Alí Moshiri, Presidente de la división para exploración de América Latina de Chevron Texaco, quien el día 10 de agosto de 2006, en la conferencia "Argentina: crecimiento y oportunidades de inversión" que organizó el Consejo de las Américas, dijo "la inversión actual solo alcanza para mantener la producción pero no para sumar nuevas exploraciones", mostrando un gráfico donde se señalaba el agotamiento total de las cuencas de gas y petróleo para el año 2030, lo que fue ratificado por Gustavo Cañonero, economista-jefe del Deutsche Bank quien dijo "la Argentina se beneficiaba de la coyuntura internacional que era muy favorable con las economías que producen commodities. Hasta 2007 está todo controlado. Pero después hacen falta fuertes inversiones. Estamos hablando de un mínimo de 5000 millones de dólares en los próximos cuatro años y 10.000 si lo que se quiere es ampliar la oferta actual" (La Nación, 11 de agosto de 2006) Esta palabra *commodities" del banquero, no es casual y muestra cual es el concepto que nos imponen sobre nuestro petróleo: una simple mercancía negociable. Lo que es un recurso estratégico para las grandes potencias, que prefieren importarlo para cuidar sus reservas, ha pasado a ser en la Argentina, nada más que un simple comoditie, con lo que se lo despoja de su valor histórico y de su utilidad para el servicio público, pudiendo así exportarlo sin limitación Desde el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia el 13 de diciembre de 1907, comenzó una larga lucha para asegurar que esa riqueza fuera explotada en beneficio del país. El 3 de junio de 1922 el presidente Irigoyen dictó un decreto creando la "Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales" y el 19 de octubre del mismo año el presidente Marcelo T. de Alvear mediante un instrumento análogo designó como Director General de la entidad al Coronel Enrique Mosconi, quien desarrolló una fundamental labor para consolidar a la empresa como una de las petroleras más importantes. Su labor permitió demostrar la mentada falacia que era necesario contar con grandes capitales para desarrollar una industria nacional, sin tener en cuenta que esos capitales habrían de obtenerse de los beneficios producidos por la empresa. Es bien conocida la actuación de este notable hombre público que se enfrentó a los trust petroleros, y desplazando a las principales compañías, consiguió controlar todo el mercado interno del petróleo.

Desde ese año 1922, hasta 1989, la industria petrolera sufrió una gran variedad de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

alternativas que no es del caso comentar aquí en homenaje a la brevedad, y que son suficientemente conocidas; pero a pesar de ello, en ningún caso hubo duda alguna que los recursos hidrocarburíferos eran propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación. El art. 40 de la Constitución de 1949 nacionalizó el subsuelo y terminó con las concesiones, y aún cuando esa ley fue derogada por una disposición emanada de un gobierno usurpador, nunca estuvo en peligro cierto la propiedad de los recursos del subsuelo, pese a una serie de alternativas contractuales que llevaron a la celebración de contratos con empresas extranjeras durante la presidencia del Dr. Arturo Frondizi, los que fueron anulados por un decreto del Presidente Arturo Illia.

Aunque no se tenían las ideas de Mosconi, y eran otras las concepciones económicas vigentes, el gobierno presidido por el Gral. Onganía, sancionó la ley 17.319 (B.O. 30/6/67) en cuyo artículo 1º se establece que "Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio del República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio imprescriptible e inalienable del Estado Nacional" y en la exposición de motivos elevada con la firma del Ministro Adalberto Krieger Vasena si bien se admite la intervención de empresas particulares para la explotación de hidrocarburos, queda muy en claro que la misma estará subordinada a la explotación que lleve a cabo YPF, indicando que " La intervención subsidiaria de las empresas particulares en modo alguno afectará el papel fundamental que Y.P.F. y Gas del estado, seguirán desempeñando en la política nacional de los hidrocarburos, ni menoscabará los poderes de que dispone el estado para reglar la exploración, la explotación, el transporte, la industrialización y la comercialización de esas sustancias, desde que tanto la fijación de la política en la materia, como la conducción y el contralor de su aplicación estarán totalmente a cargo del Poder Ejecutivo" agregando que la actividad de las empresas particulares sería "tributaria del quehacer de las empresas estatales, únicas titulares de los derechos mineros referidos a yacimientos de hidrocarburos". Es decir que ni remotamente se suponía que YPF abandonara el papel rector que tenía en materia petrolera ni que el Estado pudiera resignar sus potestades en materia de control sobre tales recursos. Pigretti sostiene que la ley 17.319 es casi una copia literal de la ley española del 26 de diciembre de 1958 sobre Régimen Jurídico de Investigación y Explotación de los Hidrocarburos, es decir que no se trató de algo original de ese gobierno, sino que se adoptó un texto legal que más allá de algunas falencias, seguía asegurando la propiedad estatal de los recursos (cif. Eduardo A. Pigretti, El nuevo Régimen Legal de los Hidrocarburos Líquidos y Gaseosos, ADLA. XXVIII-B 1967, págs. 1486 y sig.).A su vez, y determinando el carácter que tenían los hidrocarburos, la Corte Suprema afirmó: "Que la ley 17.319 -cuyo art.1º fue declarado constitucionalmente válido por esta Corte en la causa "Yacimientos Petrolíferos Fiscales c.Mendoza, Pcia. De y otros/nulidad de concesión minera" del 3 de mayo de 1979- confirió a los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en la República y su plataforma continental, el carácter de establecimiento de utilidad nacional -por su calidad de complejo de obras y servicios-, en los términos del art. 67, inc. 27 de la Constitución Nacional, quedando sometidos a la legislación exclusiva de la Nación y en las condiciones inherentes a la vital importancia que revisten para la economía general del país y su defensa" (CSJN., 6-12-84, "B.J. Service Argentina S.A. c. Provincia de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Mendoza", considerando 2º, La Ley 1985-B, 199) y cuatro años después volvió a ratificar tales criterios al sostener "Que si bien la utilidad nacional de los yacimientos de hidrocarburos puede derivarse racionalmente de su propia naturaleza (doctrina de Fallos t.302, p. 1223) cabe señalar que su incorporación entre los establecimientos amparados por el art. 67, inc. 27 de la Constitución es consecuencia de la interpretación de las normas de la ley 17.319 y, por consiguiente, de la voluntad del legislador nacional al que esta Corte ha reconocido, por principio, la atribución de determinar la existencia del fin nacional así como la elección de los modos de satisfacerlo (Fallos, t. 259, pág. 413, consid.. 8º)" (CSJN. 2/8/88, "Provincia de Mendoza c. Estado Nacional, La Ley 1989-A, 447)

Durante la dictadura cívico-militar hubo algunos intentos de privatizar a YPF, a través de proyectos propiciados por el ministro de Economía de Galtieri, Dr. Roberto Alemann, y por los Dres. Juan Alemann y Alberto Grimoldi, pero más allá del descomunal endeudamiento al que se sometió a la empresa durante esa dictadura, que la llevó a tener que afrontar obligaciones por casi 6.000 millones de dólares, YPF seguiría manteniendo el control de la política petrolera. Sería con el advenimiento del presidente Menem, donde se instrumentaría en proceso de liquidación de la petrolera estatal, entregando el dominio de los recursos del subsuelo a empresas extranjeras a través de los decretos desregulatorios 1055/89, 1212/89 y 1589/89 que se convirtieron en un verdadero "corpus" reglamentario para terminar con el control del Estado sobre el sector; convirtiéndose tales normas en los antecedentes inmediatos para proceder a convertir a YPF en una sociedad anónima, despojándola de su carácter de sociedad del Estado, y luego privatizarla hasta la entrega final a la petrolera Repsol.

La producción total de hidrocarburos a fines de 1989 se encontraba en constante aumento, habiéndose establecido en ese año un record histórico de 51.028.000 m3. (26.702.000 de petróleo y 24.326.000 de gas equivalente en valor calórico al petróleo) La cantidad de pozos perforados hasta esa fecha, se mantuvo con altibajos en un promedio del orden los 800 anuales, solamente superado en América Latina por Brasil en los últimos años y superior a los de México y Venezuela, y a países de la OPEP como Arabia Saudita, Nigeria o Indonesia. Los aspectos negativos que podían señalarse estaban dados por la actividad de recuperación secundaria que era inferior en un 13% al promedio mundial. Esto no ocurría por la baja actividad de la industria o por el no alineamiento con la economía petrolera mundial, sino que la baja producción relativa de petróleo se debía a las características geológicas del territorio que situaba a la producción de sus yacimientos en los 7 m3/pozo/día, mientras que en Venezuela es de 100/pozo/día y en Arabia Saudita de 1000m3/pozo/día.

La capacidad instalada de refinación estaba en condiciones de satisfacer las necesidades del país hasta el año 2010. Las destilerías de YPF de La Plata y Luján de Cuyo se encontraban en un nivel tecnológico de avanzada. La balanza comercial energética arroja resultados positivos.

Las grandes obras de infraestructura realizadas hasta 1989 correspondían en gran parte al área de los hidrocarburos, destacándose entre las principales; el aumento de la capacidad de conversión y procesamiento de las destilerías de La Plata, Luján de Cuyo y Campo Durán, de propiedad de YPF, con una inversión cercana a los 1.000 millones



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

de dólares, la construcción por parte de Gas del Estado del gasoducto troncal NEUBA II que demandó una inversión de 480 millones de dólares y la ampliación de la capacidad de transporte del Gasoducto del Norte. YPF, concretó el Oleoducto Puerto Hernández-Cerro Divisadero; la realización de las plantas de tratamiento de gas venteado en la provincia de Mendoza; la finalización y puesta en marcha de las plantas satélites del Polo Petroquímico de Bahía Blanca, con aportes realizados que excedieron los 400 millones de dólares y el avance del 95% de las obras correspondientes al Complejo de Aprovechamiento de Olefinas de Petroquímica General Mosconi en el Polo de Ensenada, con inversiones superiores a los 180 millones dólares

La relación creada entre las empresas estatales del sector con la infraestructura científico-tecnológica de las universidades nacionales, permitió que YPF, en su laboratorio de Florencio Varela, desarrollara exitosamente el primer catalizador de origen nacional, dando así un paso de importancia en la ruptura de la dependencia con el exterior en el campo de los insumos críticos. Todo lo anteriormente mencionado en apretada síntesis se logró por intermedio de la acción desarrollada por las sociedades estatales mencionadas y, a pesar de la continua "sustracción" de ingresos genuinos que el Ministerio de Economía realizaba sobre YPF. Esa apropiación se originaba en un desmedido e ilegal avance tributario sobre la renta o ingresos petroleros que impedía a la empresa estatal efectivizar el total recupero de sus costos y la obtención de una razonable y legítima utilidad. En el caso de Gas del Estado, la situación presentaba ciertas analogías, ya que por razones de política internacional era obligada a adquirir a Bolivia grandes volúmenes de gas natural que no necesitaba, a un precio varias veces superior a los costos de YPF. En razón de esto esta empresa gasífera del Estado, debía cargar en sus resultados empresarios con una pérdida anual aproximada de 250 millones de dólares. Para dar una idea de la magnitud de toda esta situación, incluyendo los préstamos internacionales que se obligó a tomar a YPF sin necesidad durante la dictadura militar, debemos decir que el desvío de ingresos a que era sometido el sector de las empresas del Estado, superaba anualmente los 2.500 millones de dólares, lo que demuestra lo falaz de la afirmación sobre las pérdidas multimillonarias de esas empresas. Solo se trató de afirmaciones sin sustento para justificar la venta de las empresas del Estado y la desregulación de todo el sector-

A fines de 1989, cuando asumió Menem la legislación vigente era:

Ley 17.319 de Hidrocarburos

Ley 21.778/78 de contratos de riesgo

Decreto 1.443/85 y decreto 623/87.

Es decir que existía una legislación, que a pesar de sus falencias conservaba la autonomía de YPF en el sector y el control del Estado sobre las operaciones. El gobierno menemista vendría a modificar todo ese sistema a través de una arquitectura "paralegal" que se iría perfeccionando a través de numerosas resoluciones y diversos actos administrativos para terminar con propiedad estatal, desregulando el sistema. De tal manera y a través de lo ocurrido de allí en adelante el país perdería su renta petrolera, sería enajenada la empresa estatal, y las empresas extranjeras, especialmente, pasarían a ejercer el manejo total de los recursos hidrocarburíferos, sin controles efectivos por parte del Estado.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Pero esta historia comienza mucho antes, y tiene que ver con un plan minuciosamente preparado para quedarse con las empresas públicas, a través del mecanismo de la deuda externa. En efecto, en el mes de octubre de 1983 se reunieron en un "foro" Henry Kissinger, Alan Greenspan, miembro del consejo directivo de Morgan Guaranty Trust, Helmut Schmidt, Valery Giscard d'Estaing y otros prominentes personajes para tratar distintos problemas internacionales, dedicando parte sustancial del encuentro a tratar el "apremiante problema de los países en desarrollo". Allí Greenspan planteó la idea de que los países pagaran con acciones de sus empresas, mientras Kissinger manifestó que la idea era acabar con ciertos conceptos de soberanía que podían obstaculizar los planes. Además de decidir que no se otorgarían más créditos bancarios a los países deudores, se comenzó a planificar una adecuada estrategia para solucionar el problema de las deudas. Fue así que David Rockefeller creó una Comisión de la Deuda Latinoamericana, cuya dirección ejecutiva le fue confiada a Robert Hormats, asistente de Kissinger en la casa bancaria Goldman Sachs and. Co.. Uno de los miembros de esta comisión declaró al poco tiempo en Nueva York "Las leyes de América Latina sobre inversión extranjera, tienen que cambiar, y eso es un problema de soberanía nacional...La Comisión ha recogido las ideas de la mayoría de las empresas multinacionales y los bancos de los Estados Unidos y ahora se las estamos explicando a los gobiernos de América Latina. Por ejemplo nos vamos a reunir en breve con funcionarios del Ministerio de Hacienda de Argentina para decirles lo que los norteamericanos piensan sobre nuevas inversiones...Tomemos el caso de Fabricaciones Militares, propiedad del Ejército y que participa en la industria y la minería mucho más allá de las necesidades militares. Les vamos a decir Tienen que suprimir todos los subsidios de su economía, empezando por las empresas públicas. La verdad es que de algún modo hay que introducir el concepto de quiebra al sector público. Se tienen que cambiar las leyes estatales de Argentina, Brasil, México y otros países. Primero, ningún subsidio estatal a empresas públicas como Fabricaciones que no operan sobre bases comerciales, como cualquiera compañía privada normal. Segundo, se les debe permitir declararse en quiebra o, si necesitan más dinero, abrirlas a la inversión privada extranjera...Una vez que se pueda llevar a una empresa del sector público en quiebra a los tribunales, los acreedores pueden hacer lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos en el caso de la Chrysler o lo que hacen los bancos en Alemania cuando una empresa deudora tiene dificultades. Se convierte parte de la deuda en acciones y se la ayuda a resolver sus problemas...No hay sustituto para el proceso de austeridad... Es completamente cierto que causa caos social, pero las protestas de masas se pueden usar para promover cambios. Debido al desempleo, habrá una tremenda presión pública sobre esos gobiernos para que cambien sus leyes a fin de obtener nuevos créditos. Tenemos que usar la austeridad y el caos social para quebrar las instituciones de esos países y cambiar las leyes" (Cif. EIR, Resumen Ejecutivo, Vol. 1, N° 8. 1 de octubre de 1983)

Estas propuestas, junto a otras que permitían la privatizaciones del sector público de los países latinoamericanos, junto a una justificación teórica que se fue estructurando sobre lo que se dio en llamar el "Public Choise" sirvió para que uno de los principales acreedores de la Argentina en 1989 -el Citibank- pusiera en marcha un plan minuciosamente estudiado para quedarse con las empresas públicas y las industrias más



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

rentables del país. El mecanismo idóneo y la justificación para realizar ese operativo sería la "deuda externa argentina".

El audaz proyecto sería revelado en forma minuciosa al Ministro de Alfonsín Dr. Rodolfo Terragno, en el mes de octubre de 1988, por Edwin Yeo, quien era para ese entonces asesor del Federal Reserve System (el banco central de los Estados Unidos). Yeo le informó a Terragno, que en Estados Unidos se sabía que la economía argentina no funcionaba, que estábamos sitiados por el Fondo Monetario y los acreedores, y que la intención del Citibank, del FMI, y del Tesoro de los Estados Unidos, en particular el subsecretario David Mulford era de que se pagara la deuda con industrias y empresas de servicios públicos. Le indicó que para el Citibank, la deuda no era un problema sino un verdadero negocio a instrumentar.

En el memorando redactado por el Dr. Terragno después de la entrevista consignó que Yeo le había dicho textualmente "Mulford trabajó siempre para los árabes. A fines de los 60 ya era asesor de la SAMA (Saudi Arabian Monetary Agency-banco central saudita) Mulford es el nexo con dictaduras y gobiernos corruptos en América Latina y otras partes del mundo. Les hace prestar todos los dólares que quieran sin garantías. Los gobiernos reciben los que Uds. llaman plata dulce. Los banqueros saben que no van a recuperar capital, pero no les importa. El objetivo de ellos= cobrarse en especie. Ahora están quedando al descubierto. Ahí lo tiene a Rhodes, persiguiéndolos a Uds.; y a Mulford dándole apoyo a Rhodes desde el Tesoro. Ellos quieren que los países deudores conviertan su deuda en bonos. Y los van a ayudar a Uds. a colocar los bonos argentinos en fondos de inversión, que manejan la plata de pequeños ahorristas diseminados en todo el mundo. Cuando llegue el momento de pagar, y no puedan, ¿cómo van a hacer Uds. para renegociar con millones de ahorristas dispersos por todo el mundo? No van a poder. Entonces les dirán: PAGUEN CON ACCIONES. Para resolver el problema de la deuda Uds. tendrán que entregar hasta la última empresa pública. Y no solo eso: los obligarán a que abran de golpe el mercado interno. La industria argentina no lo resistirá y ellos se quedarán también con empresas privadas. El Citi ya está saliendo a comprar bonos de la deuda argentina, y les dice a los tenedores "No esperen 20 años ni corran riesgos; reciban dinero contante y sonante ya mismo; eso si con descuento. El Citi compra títulos de la deuda argentina a 15 y después, cuando quiera quedarse con una empresa argentina les va a dar a Uds. esos mismos bonos como si valieran 100.

Además, ellos quieren transformar créditos en bonos al portador. ¿Por qué? Para facilitar la compra de las empresas a precio vil. O Uds. reaccionan, o esta gente se va a quedar con toda la Argentina" (cif. Rodolfo Terragno, La Simulación- Argentina y el FMI: dos décadas de mentiras y autoengaños. Planeta, Buenos Aires, 2005, Pág. 22) Para posibilitar la puesta en marcha de una política de desguace del Estado Nacional, se dictó la ley 23.696 de Reforma del Estado, que habilitó todo el sistema de privatizaciones y abrió el camino para la realización de sociedades mixtas en las áreas petroleras centrales. También se dictó la ley 23.697 de Emergencia Económica, que determinó la suspensión de los subsidios, la desafectación de los Fondos Energéticos, la fijación de precios y las variables de pago de regalías petroleras. En referencia a este tema puntual, se estableció que las regalías serían abonadas sobre la base del Valor Boca de Pozo (VBP), que el mismo no sería del 80% del valor internacional del



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

petróleo y que esas regalías, que eran del 12%, podían reducirse hasta el 8% del total producido. Dado el apuro con él que intentaba privatizar, se produjeron notorias contradicciones entre las normas, ya que si bien la ley de emergencia prohibía los subsidios, estos se otorgaron generosamente.

Pero además, para perfeccionar ese plan de extranjerización de la economía se dictó la ley 24.156 de administración financiera que daba amplias facultades al Ministerio de Economía de la Nación para renegociar todo lo que tuviera que ver con la deuda externa, tanto en lo relacionado con los acreedores privados, como con los organismos multilaterales de crédito. Esta ley, y todo lo relacionado con el endeudamiento estarían inescindiblemente relacionado con la política de hidrocarburos que se llevaría a cabo en adelante.

Para comenzar la articulación de todo este plan, y después de promulgada la ley 23.696, se comenzó por dictar el decreto 1055 el 10 de octubre de 1989, uno de cuyos objetivos era "reemplazar en forma creciente la intervención del Estado en la fijación de los precios, márgenes de bonificaciones, cuotas, cupos, etc. por los mecanismos de asignación del mercado y el libre juego de la oferta y la demanda" y "la desregulación progresiva e integral de la actividad, que conduzca a la efectiva y libre competencia en todos los segmentos en el menor tiempo posible reflejando los valores internacionales, debiendo en consecuencia conceder la libre disponibilidad de la producción obtenida bajo estos esquemas de explotación tanto en el mercado interno como para la eventual exportación de los productos".

El 8 de noviembre del mismo año se firmó el decreto 1212 por medio del cual se indica la necesidad de transformar a YPF en una empresa competitiva "y darle las condiciones de autonomía que permitan su inserción, en igualdad de condiciones con las empresas privadas, en un mercado local más competitivo y en los mercados internacionales" y posteriormente con el decreto 1589/89, se completó una estructura reglamentaria que serviría para poner en ejecución la política de todo el sector. Se alteró así el régimen establecido en la ley 17.319, dando nacimiento a un mercado de competencia internacional abierto, que determinaría oligopolizar en manos privadas y mayoritariamente extranjeras, todos los segmentos del ciclo económico de los hidrocarburos.

Debemos decir que todo lo que se fue articulando mediante los decretos en cuestión estaba debidamente planificado, con un conjunto de Bancos y con la participación del FMI. No se trató de una improvisación circunstancial, sino que respondió a la necesidad de poner en práctica un nuevo modelo de Estado, que respondiera funcionalmente al sistema en el que debía insertarse el país, cuya asignación geopolítica estaba dada por la llamada doctrina del "realismo periférico" que suponía seguir las políticas neoliberales que se estaban implementando, donde la libre empresa iba a sustituir definitivamente otras concepciones del Estado, el que debía ser reducido a su mínima expresión.

Todo este proceso desregulador arrancaba de la evolución de una serie de teorías económicas, que para uno de sus apologistas ha hecho cimbrar los cimientos mismos de algunas instituciones clásicas del derecho administrativo, y que pueden resumirse en lo que se ha dado en llamar "nueva economía pública" (public choice). Esta nueva escuela ha cuestionado la función intervencionista del Estado, realizando un análisis de las



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

supuestas falencias que tendría como regulador y aún como administrador, entendiendo que toda acción del Estado enderezada al bien común no es más que una simple teoría que los hechos se encargan de refutar a cada paso. La obra clave donde se desarrollan estas teorías, "The Calculus of Consent, (University of Michigan Press, An Arbor, 1962), fue publicada por los profesores James M. Buchanan y Gordon Tullock, del Virginia Politecnico Institute, quienes crearon el Center of Public Choice en 1969. Otros autores como Henri Lepage (Demain le Capitalismo, Le livre de poche, Pluriel, 1978) y Dennis Mueller (Public Choice II, Cambridge University Press, 1989) fueron desarrollando a partir de allí una verdadera escuela destinada a demostrar la validez de estas teorías que en síntesis demolían la concepción jurídica clásica del Estado, atribuyéndole todo un conjunto de inequidades en su estructuración, mientras se ponderaban las virtudes del mercado libre como la única posibilidad de una maximización de posibilidades para el hombre común, quien era caracterizado nada más que como "hombre económico" que solo persigue su interés individual.

En nuestro país, todas estas teorías y aquellas que fulminaban la capacidad del Estado como agente del bien común y promotor de la riqueza nacional, fueron divulgadas por algunos institutos de investigación como CEMA, FIEL, la FUNDACION MEDITERRANEA, que en diversas ocasiones suministraron sus cuadros más importantes para dirigir la economía del país. Como dice uno de sus apologistas refiriéndose a los trabajos preparados por estas organizaciones: "estos trabajos ayudaron a dimensionar la naturaleza de los graves problemas que había que enfrentar, proveyeron datos empíricos y comparaciones internacionales, focalizaron el debate y le dieron mayor profundidad a la discusión sobre políticas instrumentales" (Felipe de la Balze, Reforma y Crecimiento en la Argentina, en "Reforma y Convergencia" CARI y ADEBA, Buenos Aires, 1993, pág. 59)

Por supuesto no fueron trabajos desinteresados, ya que esos institutos de investigación estaban financiados por empresas privadas nacionales y extranjeras, para quienes resultaba prioritaria la desregulación económica, como la forma más viable, para poder controlar las mayores fuentes de recursos del país. Es importante señalar que precisamente en el mismo año en que se promulgó la ley de reforma del Estado, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) publicó un libro que se llamó Los costos del estado regulador (Fiel, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1989) en el que analizaba la imposibilidad de continuar con un Estado como el existente, siendo necesario adoptar un conjunto de medidas económicas que desregularan todos los sectores, para acabar con ese enorme Estado al que resultaba necesario achicar.

Tales concepciones no hubieran pasado de tener un mero interés académico, o ser materia de reflexión para aquellos interesados en el análisis de los aspectos burocráticos del Estado; sin embargo se fueron afirmando en muchos países lo que determinó el concepto de que el Estado-Nación se debilitara, pasando a configurar una nueva forma de Estado: el posmoderno donde confluiría la globalización, con el liberalismo económico, la fluidez mediática, el hiperconsumo de los sectores privilegiados. Así se convirtió a la riqueza en el valor supremo en torno al cual debían girar todas las políticas, pasando el Estado a convertirse en un disminuido administrador de lo poco que le quedaba.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Uno de los propugnadores de esas condiciones limitativas del Estado fue el Dr. Roberto Dromi, propulsor de la reforma del Estado, para quien éste no debe intervenir sino "en subsidio... El Estado más pequeño, con menos funciones, es más libre para actuar. Surge a partir del traspaso a manos privadas de los cometidos prestacionales una nueva administración, la subsidiaria o no estatal, que hereda esas funciones del Estado servidor. (Roberto Dromi, *El Derecho Público en la Hipernormatividad*, Hispania Libros y Facultad de Derecho Universidad Complutense, Buenos Aires, 2005, pág.314) Dromi, como ministro del gabinete de Menem puso todo su empeño para lograr esa disminución del Estado, haciendo realidad la falacia propugnada durante la dictadura militar de que "achicar al estado es agrandar la Nación". Empero resulta de tal magnitud la indignidad del proyecto de reforma, que el citado Dromi habla de los anteriores planes de reforma, que cita como precedentes: "Prebisch (1955) de "restablecimiento económico": Alsogaray (1958), de "austeridad y racionalización"; Krieger Vasena (1966), de "abaratamiento del gastos público"; Gelbard (1973), de "contención del gasto público", Martínez de Hoz(1976), de "racionalización administrativa", que fueron puestos en práctica por gobiernos que decidieron ejercer "siempre una lucha sin límites contra el déficit fiscal, la inflación y el desmedido tamaño del Estado" (cif. Roberto Dromi, *Reforma del Estado y Privatizaciones*. To. I, Legislación y Jurisprudencia, Astrea, Buenos Aires, 1991, pág. 37).

Los precedentes de Dromi no podrían ser más oportunos para poder analizar la filiación ideológica del proyecto que llevó a cabo el gobierno peronista de Menem, bajo la asistencia técnica de su ministro, que elaboró toda la corrupta estructura que posibilitaría el desguace del Estado, y la sustracción continuada de nuestros recursos para ser transferidos al exterior, como ha quedado ampliamente demostrado en hechos que son de público conocimiento. Además el ministro Dromi había confesado en el Congreso de la Nación que el país "estaba de rodillas" ante los acreedores, y no existían otras alternativas que la privatización total. Es decir que el proyecto de los banqueros funcionaría a la perfección encontrando un Poder Ejecutivo, que atropellando normas fundamentales de la Nación procedería a hacer el trabajo que se les exigía desde los bancos acreedores. Hoy este singular administrativista y supuesto asesor del Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, estaría proponiendo un plan para estatizar nuevamente YPF, lo que hace suponer que se trata de una nueva maniobra para beneficiar a algún grupo empresario y no para recuperar la empresa para la Nación. Para llevar a la práctica, esas teorías - perfectamente funcionales al poder de los capitales extranjeros- se utilizaron diversos fundamentos: se habló de la esclerosis productiva, del bloqueo social, de las rigideces regulatorias, de la distorsión en la asignación de los recursos, de la ineficiencia administrativa, etc. etc., todo lo cual ocasionaba una especie de caos operativo que aumentaba exponencialmente los gastos del Estado, produciéndose déficit, que eran un constante factor de perturbación económica y de inequidad social, al que debía ponerse término. También se argumentó sobre la necesidad de solucionar los graves problemas fiscales y amortizar el pago de la deuda externa, ya que los títulos de la misma a podrían ser utilizados como forma de pago por los activos públicos

Una de las formas utilizadas para implementar todo este plan desregulador y



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

privatizador fue mostrar una situación de peligro inminente, como si un caos de consecuencias imprevisibles amenazara la misma estructura del Estado. Si bien es cierto que el gobierno de Alfonsín dejaba un estado hiperinflacionario preocupante, las empresas públicas y entre ellas las de hidrocarburos, funcionaban adecuadamente. Pero el problema no radicaba en ciertas insuficiencias burocráticas, sino en el propósito de entregar los recursos para obtener en el corto plazo fondos que sirvieran para disminuir el problema del sector externo, y además desprenderse de lo que se consideraba eran factores de incremento del gasto público, caballito de batalla que no solo agitaban todos los economistas, sino los medios en su totalidad y los divulgadores de un discurso superficial que se había enseñoreado de la Argentina

Con el argumento del peligro y la necesidad de sanear al Estado, despojándolo de trabas que obstaculizaban su eficiencia se dictaron las leyes de reforma del Estado (23.696), y de emergencia económica (23.697) por las cuales se le dieron amplias facultades al Poder Ejecutivo, para configurar esa situación. Es precisamente en estas dos leyes, donde parte toda esa especie de arquitectura que llamamos "paralegal" que daría fundamento a una singular batería de decretos, parte de los cuales son los que impugnamos, con el único propósito de proceder al desguace del Estado, a quien se le quitarían indispensables fuentes de recursos, para entregarlos a grupos internacionales, en negociaciones previamente acordadas. No es ocioso recordar también la sanción de la ley 24.156 de administración financiera, por la cual se delegó en la Oficina del Crédito Público la potestad legislativa de renegociar la deuda externa, con los organismos multilaterales y contraer nuevas deudas. Fue así que con el sustento de estas tres leyes se puso en marcha el mentado mecanismo de "reforma", determinando que el país se viera privado en corto tiempo de sus principales empresas, despojado de su renta petrolera, endeudado a límites insostenibles, y sometido al control de los grupos financieros y los organismos multilaterales.

Entre los argumentos que también se manejaron para justificar toda la legislación que se pondría en marcha, estuvo: la disminución de la deuda, el autoabastecimiento, el impulso de las exportaciones, ampliar las reservas de hidrocarburos a través de una intensiva exploración, y además garantizar a las nuevas generaciones una riqueza que sería factor fundamental para el crecimiento del país. La deuda no disminuyó sino que subió de 62.000 millones de dólares a 152.563 millones de dólares en 1999, las reservas de hidrocarburos empezaron a disminuir por la falta de exploración siendo muy comprometido el panorama futuro como lo demostraremos más adelante, y a las nuevas generaciones tal política solo les garantizó un futuro de pobreza, de exclusión, y de marginalidad.

La realidad de hoy es demostrativa de la intencionalidad política que tuvo todo el proceso que se llevó a cabo, beneficiando únicamente a las empresas petroleras privadas. Es importante mencionar al respecto, que los teóricos de la eficiencia empresarial solo evalúan en sus análisis la relación costo-beneficio desde una perspectiva de la incentivación de las ganancias, propia de una empresa privada. No se tuvo en cuenta que en determinados casos las empresas estatales -como en el caso de YPF- cumplían una función que la empresa privada no podía realizar, dado que sus objetivos eran sustancialmente distintos. En muchos casos YPF mantenía pozos que no



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

eran rentables debido a que en torno a los mismos se habían desarrollado pueblos enteros que dependían de esa empresa pública. YPF había construido escuelas, hospitales, desarrollado zonas inhóspitas y contribuido con los recursos de la explotación de hidrocarburos a la realización de fundamentales obras de infraestructura que beneficiaron a toda la Nación. Si bien ese manejo empresarial no resultaba demasiado ortodoxo dentro del concepto de la rentabilidad individual de lo que debiera ser una empresa, respondía a una función elemental del Estado que es la de promover el bien común de sus habitantes, aunque para ello necesite prescindir de los habituales mecanismos crematísticos con los que se manejan las empresas convencionales. Por otra parte toda la política privatizadora fue nada más que una herramienta del programa macroeconómico del gobierno menemista, en el que las reformas estructurales no eran nada más que un artificioso enunciado para que los recursos del Estado fueron transferidos al sector privado, en el convencimiento que ello traería una profunda modificación del esquema productivo vigente, con un Estado meramente administrador de los ingresos fiscales. En ese momento los esquemas teóricos de la eficiencia, trazados por diligentes funcionarios subvencionados por las empresas transnacionales, mostraban a ese nuevo modelo como el único posible para insertar a la Argentina en el mundo.

La realidad actual de la política hidrocarburífera, consecuencia de esas políticas, es la que muestra un cuadro altamente preocupante, en el que puede observarse que según cifras oficiales, en el último año bajaron las reservas de petróleo en un xx% y las reservas de gas en un xxx%.

La caída de reservas, producto de la falta de inversión y exploración, no es algo nuevo, ya que estuvo presente desde el comienzo de la desregulación. Después de privatizada YPF, y cuando estaba en plena operatividad la política desregulatoria, comenzaron a caer los niveles de reservas de hidrocarburos. En la memoria de la sociedad de 1993, se confirma esto, cuando se dice que "a partir de 1991, la Sociedad comenzó un programa de transformación que incluyó la enajenación de reservas y otros activos, de acuerdo con la política del Gobierno de fomentar la competencia en la industria del petróleo y gas a través de la participación del sector privado y en cumplimiento del programa estratégico de la Sociedad y su rentabilidad. En gran medida como resultado de estas enajenaciones, las reservas probadas de petróleo y gas de YPF cayeron de 4.100 millones de barriles de petróleo (BPE-652 millones de m3) al 1º de enero de 1991 a 2.500 millones (397 millones de m3) al 1º de enero de 1994, cayendo la producción de petróleo de 127 millones de barriles (20 millones de m3) en 1991 a 109 millones (1,3 millones de m3) en 1993; y la producción de gas disminuyó de 619.000 millones de pies cúbicos (17.528 millones m3) en 1991 a 447.000 de pies cúbicos (12.658 millones de m3) en 1993" (YPF, Memoria, pág. 22) Y así se continuaría, al no haberse establecido compromisos de inversión y exploración que permitieran revertir la caída de las reservas.

Además de los datos que hemos consignado -fácilmente verificables- creemos necesario poner algunos ejemplos de cómo se adjudicaron algunas áreas a los efectos de que se pueda observar las reales intenciones de la desregulación, donde hubo singulares repartos de reservas entre multinacionales importantes y hábiles negociadores locales,



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

que visualizaron la oportunidad de lucrar a costa de los bienes públicos. Enfáticamente podemos decir que las áreas secundarias fueron regaladas a empresas vinculadas con funcionarios del Estado en una increíble colusión de intereses.

1.- Áreas El Vinalar y El Mosquito: tenían 1005 y 763 kilómetros cuadrados respectivamente, con lo que excedían el límite impuesto por el art. 34 de la ley 17.319 de 250 kilómetros. Fueron adjudicadas a la empresa EPP Petróleo el 15 de enero de 1991.

2.- Áreas Puesto Guardían y La Brea: adjudicadas a un consorcio integrado por EPP Petróleo y Tripetrol, que pagó por ellas 8.500.000 y 200.000 dólares respectivamente.

3.- Ésta empresa EPP Petróleo, era del presidente de la "nueva" YPF José Estenssoro y la había constituido junto con él quien fuera Vicepresidente de YPF, Nells León, en el mes de febrero de 1990 con un capital de 2.500.000 australes, equivalente a la suma de 120 dólares estadounidenses. Cuando Estenssoro hizo la presentación en la Inspección General de Justicia para la inscripción de la sociedad, ese mismo día 8 de febrero, se publicaba el edicto llamando a Concurso Público Internacional para la adjudicación de las áreas secundarias, lo que hace presumir cual fue la real intención de constituir la sociedad: quedarse con áreas que tenían la seguridad que les iban a ser adjudicadas.

4.-Área Cañadón Alfa: ubicada en Tierra del Fuego, significó una inversión por parte de YPF de 150 millones de dólares en casi veinte años, a través de diversas obras, habiendo perforado 71 pozos. A través de un extraño procedimiento de unitización (palabra desconocida) que integraba esa área con una explotada por la compañía francesa Total, se cedió a esta compañía el área, quien pasaría a operar y gerenciar el área unitizada, cuya estimación de reservas era de 1.000.000 de metros cúbicos de crudo, con reservas gasíferas aún mayores. A través del contrato firmado YPF le pagaba a Total por el petróleo que esta extraía en el área un precio cuatro veces superior al que le costaba, cuando operaba el área.

5.- Área Puesto Hernández: tenía 535 pozos perforados y 359 en producción, extrayéndose diariamente 40.000 barriles de petróleo, contando con una reserva aproximada de 106 millones de barriles. Se le adjudicó a Pérez Companc en sociedad con la compañía Occidental, por la irrisoria suma de 240,7 millones de dólares

6.- Área El Tordillo: tenía 846 pozos perforados, 376 en producción, extrayéndose diariamente 12.700 barriles, y contando con reservas comprobadas de 47,8 millones de barriles. Se adjudicó a Santa Fe Energy Company of Argentina (empresa norteamericana) y a Tecpetrol (del grupo Techint). El capital de ambas empresas no superaba los 5000 dólares, y Santa Fe Energy estaba asociada con Sol Petróleo, una empresa que Estenssoro había presidido. Por ésta área se pagaron 107,6 millones de dólares, pero no fue un pago en efectivo, sino que solo una parte fue en dinero y el resto en créditos contra el Estado que tenían empresas del grupo Techint.

Las ventas de las áreas centrales solo generó divisas por alrededor de 400 millones de dólares, lo que resultaba una suma ridícula respecto del valor que tenían las referidas áreas. Sin embargo, había que cumplir con el pago de la deuda externa y los objetivos del gobierno eran hacerse en el corto plazo de la mayor cantidad de recursos aunque para ello debiera rematar esos bienes "inalienables e imprescriptibles"

Como decía una representante del Banco Mundial "Uno de los beneficios del programa



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

de privatizaciones en Argentina, ha sido permitir la movilización de los recursos necesarios para normalizar la relación con los bancos comerciales privados a través del Plan Brady, que se completó en 1993. Esto permitió a la Argentina obtener una reducción parcial de su deuda y la reestructuración en términos y condiciones. En gran medida esto se logró mediante el programa de privatizaciones. Bajo este programa, Argentina recibió unos 12.000 millones de pesos (dólares) de las deudas de los bancos extranjeros como pago parcial por parte de los nuevos dueños de las empresas privatizadas. Esto facilitó la reestructuración de unos 19.000 millones de pesos de la deuda externa pública argentina, una reducción de los intereses adeudados por un total de 7.5 mil millones de pesos y una reducción de la deuda en 3.3 mil millones de pesos... Asimismo, Argentina utilizó los créditos de 3 mil millones de pesos de la venta de las acciones de YPF en 1993, con el fin de pagar deudas nacionales... Los ingresos de las privatizaciones no sólo ayudaron al gobierno a concluir con el Plan Brady, sino que esos ingresos fueron también importantes fuentes que ayudaron a financiar el déficit fiscal público en la primera etapa del programa de reformas" (Myrna Alexander, Privatizaciones en Argentina, en Privatizaciones e Impacto en los Sectores Populares. Banco Mundial, Universidad de Belgrano. Instituto de Investigaciones del Nuevo Estado, Buenos Aires, 2000, pág.39-40) Se olvidaba decir la Dra. Alexander que los títulos entregados por las privatizaciones y reconocidos por el gobierno a su valor nominal fueron comprados en el mercado internacional por los bancos extranjeros al precio que fluctuaba entre el 12 y el 17% de su valor nominal, y que ese déficit, provenía precisamente del pago de los servicios de la deuda, ya que de excluir éstos, el país tenía superávit primario.

Para terminar con el análisis de las consecuencias que produjo este remate de la riqueza petrolífera vamos a consignar una serie de cifras oficiales que muestran como la explotación irracional va saqueando al país de este recurso hasta que en poco tiempo no quede nada, y debamos nuevamente recurrir a la importación

EXPORTACION DE PETROLEO

AÑO m3/día INDICE EXP. PET.

1990=base 100

1990 2,839 100.0

1991 3,939 138.8

1992 8,400 295.9

1993 13,789 485.7

1994 32,094 1,130.5

1995 44,353 1,562.3

1996 51,747 1,822.8

1997 52,956 1,865.3

1998 52,562 1,851.5

1999 42,708 1,504.4

2000 43,790 1,542.5

2001 44,816 1,578.6

2002 43,066 1,517.0

2003 36,571 1,288.2



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Como lo indicáramos en los párrafos precedentes, cuando asumió Menem la Presidencia de la Nación, el endeudamiento artificial de YPF era singularmente cuantioso, y sería el pretexto para modificar sustancialmente todo el esquema sobre utilización de los hidrocarburos que regía hasta entonces. Las viejas teorías sobre el "Estado mal administrador" fueron desempolvadas y contra lo que enseñaba la propia experiencia argentina se comenzó a teorizar sobre las virtudes de la empresa privada, mostrando los males que habían aquejado al país por el manejo de empresas que debían entregarse a la explotación particular. Se utilizó una conocida retórica abundante en frases hechas sobre "empresas en crisis" "reducción del gasto público" "Estado ineficiente y burocrático" hábilmente integrada con otras afirmaciones fundadas en esa concepción vulgar pero repetida desde siempre que sostenía la "inevitabilidad de la privatización", "único camino viable", "no hay otra opción". Es decir que la creatividad de las nuevas autoridades para resolver la difícil situación de la administración del Estado, pasaba únicamente por enajenar todo el patrimonio disponible.

Según los artífices del proyecto era necesario descargar al Estado de todo ese peso antifuncional con su secuela de déficit estructural, crónica ineficiencia, carencia de recursos, estancamiento tecnológico, desinversión y falta de rentabilidad. La mejor forma de terminar con esta situación, era poner en práctica un régimen de irrestricta libertad de mercado, y fue el Dr. Roberto Dromi, uno de los que confeccionaría el andamiaje teórico de tal proyecto, que sería utilizado por los grupos financieros para controlar toda la economía del país. Para Dromi: "La libertad de mercado es un principio básico de la democracia económica, el derecho que tiene toda persona humana a definir, por su propia iniciativa, el ámbito del ejercicio de la libertad...La manifestación más excelsa de la libertad económica se traduce en la iniciativa privada. Es incuestionable el papel del trabajo humano disciplinado y creativo con iniciativa y espíritu emprendedor...En el legítimo ámbito de la libertad de la actividad económica no debe intervenir el Estado" (Roberto Dromi, *Empresas Públicas- De estatales a privadas*. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, pág. 26). Naturalmente que estas expresiones nada tienen que ver con la realidad que funciona en cualquier estado periférico, donde el poder de las grandes corporaciones, controla los aspectos fundamentales de la actividad económica, cuando, como en nuestro país, no existen controles de ninguna naturaleza para regular la acción de tales grupos. Por otra parte toda esa infantil teorización del libre mercado no resiste un análisis serio de lo que es la influencia de los sectores monopólicos en la economía. Como con meridiana claridad lo afirmaba el Dr. Rodolfo Bledel en el dictamen presentado en noviembre de 1959 en la Sexta Conferencia Nacional de Abogados: Es un hecho indiscutible que en estos momentos la comunidad argentina está sometida a una firme y definida presión ideológica, realizada en nombre de la llamada doctrina económica de la libre empresa. No importa que la doctrina especializada en el estudio de las economías de los países subdesarrollados o de desarrollo intermedio aconseje, para situaciones similares a la nuestra, una política económica fundada en principios diametralmente contrarios. No importa el fracaso de la política libreempresista en varios países subdesarrollados, en particular de la América Latina. Se trata de imponer por todos los medios el ideario neoliberal. Se instaura el dogma según la cual la empresa privada y no el Estado



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

constituye el agente impulsor del desarrollo económico. Se va más allá del pensamiento de Schumpeter, puesto que él veía en el empresario privado el ente impulsor del desarrollo en el mercado pero acá se trata del empresario privado que asume directamente el poder político y entonces se plantea un problema fundamental: si él puede ser el árbitro del interés público... Si no existe un orden jurídico-institucional que proteja el poder adquisitivo de las masas, que proteja a la industria nacional -que es el fundamento de la liberación económica de un país insuficientemente desarrollado-, si no mantiene o instituye un sistema de industrias claves en manos del Estado, nos encontraremos con que el país será un mercado abierto en el cual predominarán los intereses de los monopolios internos e internacionales. En tal caso habrá ocurrido que en este país habremos pasado de un intervencionismo estatal de bases jurídicas, fundado en el derecho público y en principios de justicia, a un intervencionismo de hecho, en el cual la fuerza de los monopolios, de los oligopolios y de las distintas combinaciones que pueden interferir en el mercado, serán los ejecutores del referido intervencionismo de hecho" El pensamiento de Bledel, era el reconocimiento de cómo funcionaba la economía bajo tales pautas, y el peligro de la injerencia de los capitales en la administración estatal. Por otra parte, esta concepción del Estado como mal administrador, había sido impugnada hacía más de un siglo, por el Gral. Roca, un personaje insospechable de concepciones trasgresoras o revolucionarias, que al oponerse a la venta de Obras Sanitarias a un consorcio inglés en 1897, escribió en una carta dirigida a su amigo Agustín de Vedia: "Ese proyecto de venta de las Obras de Salubridad ha sido, también, un proyecto desgraciado que se ha arrojado a los opositores, como buena presa para clavar su diente lleno de ponzoña. Yo aconsejé en contra, pero no me hicieron caso. Si a pesar de todo, el proyecto, rechazado casi por unanimidad en la forma de contrato, se convierte en ley, será una ley contraria a los intereses públicos en el sentir de la mayoría de esa capital, tan esquilada por las compañías de gas y otros servicios. A estar a las teorías de que los gobiernos no saben administrar, llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil y deberíamos poner bajo bandera de remate a la Aduana, al Correo, al Telégrafo, a los puertos, a las Oficinas de Rentas, al Ejército y a todo lo que constituye el ejercicio y deberes del poder". Tampoco compartía el Presidente Roque Sáenz Peña, los planteos oportunistas sobre la ineficiencia de la administración estatal, y es así que en el decreto firmado el 24 de diciembre de 1910 y refrendado por el Ministro de Agricultura, Dr. Eleodoro Lobos, creando la Comisión Administradora para la Explotación del Petróleo en Comodoro Rivadavia, decía: "Todos los estudios realizados demuestran satisfactoriamente la utilidad de la explotación directa por el Estado...las nuevas y legítimas exigencias de la economía social y financiera no pueden detenerse por el solo peligro de la incapacidad del Estado para llenar sus fines, mientras no se demuestre la ineptitud mayor de sus agentes para sacrificar su comodidad particular al interés común y para hacer efectiva la responsabilidad que comporta este olvido de su misión y sus deberes". Por supuesto que al desenfreno privatizador menemista, no le interesaba resguardar el patrimonio público sino convertir al Estado en un ente que administrara aquello que habían decidido dejarle los grupos financieros que estaban diseñando ese nuevo modelo de país, que respondía a lo que uno de los teóricos de la nueva política llamaría "el



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

realismo periférico"

Pero la propia historia de YPF, era la evidencia más incontestable de las posibilidades de la administración estatal, y del enorme factor de desarrollo que esa gestión había determinado en todos aquellos lugares donde la empresa tuvo presencia, por lo cual todos aquellos argentinos que tuvieron una visión nacional de lo que la riqueza petrolera significaba, vieron la necesidad de preservarla de toda ingerencia privada.

Sin embargo, el advenimiento de la dictadura cívico-militar en 1976, cambiaría todo ese gran proyecto nacional empresario y crearía las condiciones necesarias para justificar todo el posterior proceso de privatización, a través de un demencial e injustificado endeudamiento. En efecto, cuando fue derrocada María E. Martínez de Perón, la deuda de la empresa era de 324 millones de dólares, y la idea del Ministro de Economía Martínez de Hoz, de redimensionarla, encubría en realidad el propósito de generar las causas que posibilitarían su desaparición. Fue así que el endeudamiento de la empresa empezó a crecer, llegando en 1981 a una cifra estimada de 6.000 millones de dólares, tal como lo informara en mayo de ese año su presidente, Gral. Suárez Mason.

Cuando asumió el gobierno nacional el Dr. Raúl Alfonsín se encontró con una empresa petrolífera depredada, y se trató de encarar una reactivación de la misma a través de la implementación de diversos planes. El gobierno invirtió mil millones de dólares a través de un préstamo del Banco Mundial para efectuar la reconversión de las destilerías de Lujan de Cuyo y de La Plata. Luego a través del Plan Comodoro Rivadavia- Houston se realizaron alrededor de setenta contratos de riesgo, para que se explorara el territorio, llegándose a obtener una inversión de 700 millones de dólares. En ningún caso se puso en duda el control que debía ejercer YPF sobre toda la actividad petrolera, y recién a partir de los decretos que hemos citados, comenzó no solamente la reconversión a favor de los capitales trasnacionales, sino el proceso inexorable de enajenación de la empresa estatal, que comenzó gradualmente, para evitar que se manifestara una real oposición a esos proyectos.

Al asumir Menem, y después que firmara todos los decretos desregulatorios a que hiciéramos referencia empezaron las tratativas para dar cumplimiento efectivo al plan que se venía madurando de la liquidación de YPF. Fue así que contando con el asesoramiento de la consultora Mac Kinsey & Company, y previo pago de 1.000.000 de dólares, financiados por el Banco Mundial, se fue estructurando un plan que tendría varias etapas hasta llegar a la venta total de la empresa.

A los efectos de hacer posible el plan propuesto el 24 de septiembre de 1992 se dictó la ley 24.145 (B.O. 6/11/92), mediante la cual se dispuso la federalización de los hidrocarburos, y la transformación empresarial y privatización de YPF.

La última y definitiva etapa del proceso, se produciría cuando Repsol, adquiriera la mayoría accionaria de la empresa en 1999, operándose de tal manera la transferencia a un solo operador petrolero, quien repatriaría cuantiosas ganancias, producto de la explotación de una riqueza de propiedad de toda la Nación. Habiendo citado a las exportaciones, tanto de gas como de petróleo, es necesario señalar que las mismas tienen íntima relación con el nivel actual de reservas, especialmente con las comprobadas. La ley 17.319 ordena mantener un adecuado nivel de reservas y permite exportar sólo excedentes, que se produzcan cuando el mercado local está



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

autoabastecido. En el caso del petróleo, con un horizonte de reservas de aproximadamente de siete años, lejos está de poderse afirmar que estamos autoabastecidos. Con el gas natural, el autoabastecimiento está más lejano, pues tenemos al 60% de la población sin poder acceder al mismo, y faltantes de abastecimiento pronunciados, que han podido ser cubiertos con la importación proveniente de otros países. En forma pública la Secretaría de Energía ha reconocido que solamente se dedica a sumar los informes que le elevan las concesionarias y permisionarias, avalados por los estudios de firmas auditoras especializadas contratadas por ellas mismas, con lo cual la independencia de criterio, sería por o menos dudosa, habida cuenta de los manejos que realizan las empresas, para incrementar sus ganancias. Respecto a las indexaciones a las que hiciéramos referencia, es de conocimiento público, que desde 1991 vivimos bajo el imperio de una ley de orden público llamada de "convertibilidad". Esta ley prohibía en forma expresa, incluso retroactivamente cualquier tipo de indexación. Ni el sector público pudo indexar sus impuestos, ni los propietarios pudieron hacerlo con los alquileres, ni los trabajadores con sus salarios, pero si lo pudieron hacer los concesionarios de producción con el precio del petróleo en boca de pozo, alegando la vigencia de los decretos desregulatorios 1055/89 y 1212/89, siendo numerosísimas las declaraciones de los máximos responsables de las empresas en apoyo de esa postura ilegal. La Ley de Emergencia Económica dictada en el 2002 mantenía la prohibición de indexar, pero las empresas petroleras no la respetaron. Al respecto cabe preguntarse: ¿si la ley era de orden público y fue transgredida, no correspondería la devolución de los importes incorrectamente cobrados a los consumidores? ¿Algún organismo de control, tomó alguna medida para terminar con esta flagrante violación de la ley?. Cabe apuntar que los decretos desregulatorios citados, están en un nivel inferior al de la Ley de Convertibilidad y de la Ley de Hidrocarburos, y de manera alguna puede invocarse su validez, para obviar las disposiciones de las leyes citadas.

Otra muestra de las ilegalidades que venimos señalando, es el que corresponde al origen de los contratos de concesión. La Ley 17.319 considera "absolutamente nulos" a los permisos y concesiones adquiridos de modo distinto a lo establecido por ella. La gran mayoría de los actuales titulares adquirieron esa condición de concesionarios de producción, mediante una "reconversión" de sus contratos de obras y servicios, que son totalmente distintos. Cabe preguntarse también sobre la eventual responsabilidad de estas especiales adjudicaciones directas, sobre áreas que de acuerdo a la Ley citada, deberían haberse adjudicado.

Es importante señalar, que los decretos cuya derogación se pretende con este proyecto carecen de toda legalidad en razón de los puntos que siguen a continuación

1.- Los decretos cuestionados, se dictaron, como supuestas reglamentaciones a la ley, pero como ya lo hemos mencionado, en realidad solo trataron de modificarla, alterando el sentido que se le había dado sobre la indisponibilidad de los hidrocarburos como bienes "inalienables e imprescriptibles" Al decidir la libre disponibilidad, tal como surge del texto de los decretos, se estaba modificando la ley.

2.- Los tres decretos permitieron la reconversión de los contratos de explotación del Plan Comodoro Rivadavia-Houston (decretos 1.443/85 y 636/87), en concesiones de



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

explotación, sin cumplir los requisitos exigidos por la ley 17.319, que exigía que para alcanzar la categoría de concesionario existían dos posibilidades: a) haber sido previamente un exitoso permisionario de exploración o b) haber ganado una licitación realizado por la Secretaría de Energía

3.- Se permitió la acumulación en una misma persona jurídica o física de más de cinco permisos de exploración, lo que hemos detallado en los puntos precedentes, cuando el artículo 34 de la ley establecía con toda claridad que "Ninguna persona física o jurídica podrá ser simultáneamente titular de más de cinco concesiones de explotación, ya sea directa o indirectamente y cualquiera sea su origen. Como era natural para sortear tales limitaciones, el decreto 1212 dispuso en su artículo 18: El Ministerio de Obras y Servicios Públicos elevará en el plazo de treinta días, un proyecto de ley propiciando la eliminación de las limitaciones previstas en los artículos 25 y 34 de la Ley No 17.319, a fin de posibilitar la conversión de los contratos preexistentes al régimen previsto en el presente Decreto y promover la participación del mayor número de empresas en los concursos futuros. Hasta tanto no se produzca la derogación indicada precedentemente, las limitaciones de la ley 17.319 se aplicarán con ajuste a la reglamentación del párrafo siguiente. Para el cómputo de las limitaciones indicadas en los artículos 25 y 34, cuando los titulares constituyan una persona jurídica distinta o asuman la forma de Unión Transitoria de empresas o asociación, la restricción se aplicará exclusivamente respecto a dicha persona, Unión Transitoria de Empresas o asociación con igual composición de integrantes"

La ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 (art. 367) es clara en cuanto a que las Uniones Transitorias de Empresas o asociaciones no constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Es decir que la ficción buscada no tenía ningún respaldo normativo, ya que no existe manera de equiparar una UTE, con una sociedad debidamente constituida. Debe recordarse al respecto que las UTE, son uniones accidentales de empresas que se asocian para emprender un proyecto común. En el caso del petróleo, la ley 17.319, había querido evitar que precisamente se formaran conjuntos empresarios de naturaleza accidental, que a través de esa ficción societaria se apoderaran de áreas, monopolizando la comercialización de lo que extraían

Todas las empresas que hemos mencionado, poseen mucho más de las cinco áreas fijadas por la ley, ya que nueve de ellas, poseen 183 áreas, según datos oficiales de la Secretaría de Energía. Como los datos están agrupados por operador, que es sólo uno de los integrantes del consorcio, los números de acaparamiento de áreas se acrecientan. Todos esos operadores superan el número máximo de cinco fijado en la ley de hidrocarburos, como lo indicamos en los párrafos anteriores. Por otra parte esos nueve operadores que hemos mencionado producen más del 91/92 % de la extracción local de gas y de petróleo; además integran el capital de transportadoras y distribuidoras de gas natural y energía eléctrica; y las dos mayores empresas -las únicas verticalmente integradas Repsol-YPF y Petrobrás- dominan el 65% del mercado de refinanciación y comercialización de los combustibles líquidos, incluido el GLP (gas licuado de petróleo). Esta acumulación de ofertas en muy pocas sociedades obliga a considerar la relación que pueda existir en cuanto aparece la posible trasgresión a las Leyes de Defensa de la Competencia y del Consumidor, e incluso con las nuevas normas



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

constitucionales.

Para mostrar el acaparamiento de áreas que hemos señalado indicamos a continuación las que poseen diversas empresas de conformidad con las informaciones oficiales de la Secretaría de Energía.

PETROBRAS: posee las siguientes áreas:

25 de Mayo-Medanito S.E.

Aguada de la Arena

An-Aike (Santa Cruz II)

Atamisqui

Bajada del Palo

Bajada Fortaleza (Santa Cruz I)

Barda Las Vegas (Santa Cruz II)

Campo Boleadora (Santa Cruz I)

Campo Indio (Santa Cruz I)

Cañadón Deus (Santa Cruz I)

Dos Hermanos (Santa Cruz I)

El Cerrito (Santa Cruz I)

El Mangrullo

Estancia Librum (Santa Cruz I)

Jagüel de los Machos

La Amarga Chica

La Menor (Santa Cruz I)

La Paz (Santa Cruz I)

La Porfiada (Santa Cruz I)

Laguna de Oro (Santa Cruz I)

María Inés (Santa Cruz II)

María Inés Oeste (Santa Cruz II)

Puesto Hernández

Puesto Peter (Santa Cruz I)

Refugio Tupungato

Rincón de Aranda

Río Neuquén

Río Turbio

Santa Cruz I

Santa Cruz I- Fracción A

Santa Cruz I- Fracción B

Santa Cruz I- Fracción C

Santa Cruz II

Santa Cruz II- Fracción A

Santa Cruz II- Fracción B

Sierra Chata (Chihuidos)

Veta Escondida

CHEVRON SAN JORGE posee las siguientes áreas:

Campo Bremen



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Chorrillos

CNQXXVI- Río Negro Norte

Confluencia

El Sauce

Huantraico

La Carmen

La Tehuelche

La Terraza

Las Bases (CNQ-16/A)

Loma Negra (Río Negro Norte)

Moy Aike

Océano

Palermo Ayke

Puesto Flores- E. Vieja- P. Prado

San Cristóbal

PAN AMERICAN posee las siguientes áreas

Acámbuco

Anticlinal Funes

Anticlinal Grande- Cerro Dragón

Cerro Tortuga- Las Flores- Río Chico

Chulengo

Koluel Naike- El Valle

Lindero Atravesado

Los Chorrillos

Piedra Clavada

Tierra del Fuego

PIONNER NAT. RESOURCES.ARG. posee las siguientes áreas:

Al Norte de la Dorsal

Al Sur de la Dorsal

Anticlinal Campamento

Bajo Baguales

Cerro Vagón

Cutral- Co Sur

Dadín

Dos Hermanas

Estación Fernández Oro

La Calera

Lago Fuego

Loma Negra- Zona NI

Meseta Sirven

Neuquén del Medio

VINTAGE OIL posee las siguientes áreas:

Agua Botada

Bella Vista Oeste



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Bloque 127

Cacheuta

Cañadón León

Cañadón Minerales

Cañadón Seco

Cerro Overo

Cerro Wenceslao

El Cordón

El Huemul- Kolhuel Naike

Las Heras

Meseta Espinosa

Meseta Espinosa Norte

Piedra Clavada. (CGSJ IV)

Piedra Colorada- Estruct. Intermed

Sierra Azul Sur

Sur Piedra Clavada

Tres Picos

TECPETROL S.A. posee las siguientes áreas:

Agua Salada

Atuel Norte

Catriel Viejo

El Caracol Norte

El Tordillo

Fortín de Piedra

José Segundo

La Tapera

Los Bastos

Puesto Quiroga

San Antonio Sur

Sierra de Aguaragüe

Tres Nidos

PLUSPETROL S.A. posee las siguientes áreas:

Agua Blanca

Aguada Baguales

Centenario

Cuchuma (Olleros)

El Porvenir

Loma Guadalupe

Loma Jarillosa este

Palmar Largo

Ramos

Puesto Bouquet

Tartagal Oeste

TOTAL AUSTRAL S.A. posee las siguientes áreas:



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

Aguada Pichana

Cam-I (Tauro)

Cuenca Marina Austral

Octan- Pegaso (Cam I)

San Roque

Spica (Cam-I)

Taurus- Sirius (Cam-I)

No transcribimos las 56 áreas que tiene Repsol YPF, pero las mismas pueden consultarse en la Secretaría de Energía. En lo que respecta a las áreas que tiene esta empresa, el artículo 25 de la ley 24.145, eximió a YPF del cumplimiento de los artículos limitativos de explotación de áreas, pero entendemos que tal eximición no rige en la actualidad, por lo cual el acaparamiento es otra muestra del quebrantamiento de la ley. Esto es así porque cuando se dictó la ley en el año 1992, se hizo mención a que YPF era una Sociedad de Estado (art. 3º, decreto 2778/90) y de tal manera, se justificaba históricamente, eximirla de esa limitación. Aún cuando ya se estaba desregulando el sector, el hecho de ser una sociedad del Estado, le daba el razonable privilegio de no encontrarse en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras. Empero la situación varió sustancialmente al ser privatizada en su totalidad, siendo la actual propietaria del paquete accionario Repsol, de allí que la nueva denominación de la empresa sea Repsol YPF S.A. Es decir que la empresa ahora, tiene una distinta conformación jurídica ya que ha dejado de ser una empresa del estado, para ser una convencional empresa privada.

La Ley 17.319, es estricta en cuanto en su artículo 79, inc.c establece que Son absolutamente nulos...los permisos y concesiones adquiridos en modo distinto al previsto en esta ley. Esto determina la nulidad de pleno derecho de todas las concesiones y privilegios concedidos en violación a la norma. Y esta nulidad como hemos dicho se produce desde el mismo comienzo en que el acto es realizado, por lo cual reviste el carácter de nulidad insalvable, no solucionable por cualquier medida posterior. En nada obsta a la nulidad que las concesiones y los privilegios hayan sido concedidos por los decretos impugnados, debido a que hemos demostrado de manera suficiente que tales decretos no pueden modificar la Ley 17.319, y la supuesta reglamentación que se invoca, no puede desnaturalizar a la Ley, contrariando su espíritu, además que debe tenerse en cuenta de la inferior jerarquía que tienen los decretos reglamentarios respecto a la Ley, ya que se trata de normas subordinadas. Al respecto Bidart Campos es claro cuando indica que "El exceso reglamentario transgresor de la ley que se reglamenta es siempre inconstitucional. Tal infracción a la Constitución no admite distinción según la naturaleza federal o común de la ley reglamentada...La facultad reglamentaria de que dispone el poder ejecutivo respecto de las leyes no presta fundamento para a) modificar o derogar leyes, ni siquiera so pretexto de necesidad y urgencia; b) ampliar incriminaciones legales, o incluir en ellas conductas ajenas a la tipificación legal, porque en tal supuesto queda violentado el principio de legalidad, c) ampliar tributos establecidos en la ley, o incluir en ella ampliaciones que resultan extrañas al hecho imponible que la ley determina claramente. (Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, Ediar, Buenos Aires, 1997, Tº III, pág.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

245). Es por ello que es más que palpable la inconstitucionalidad de los decretos impugnados, en cuanto mediante su articulación se modificó concretamente la ley en aspectos de la misma que hacían al manejo del estado de las reservas y se ha alterado su espíritu, sin perjuicio de todas las otras transgresiones que hemos señalado en cuanto a la forma, oportunidad situación en que fueron dictados tales reglamentos. En razón de las circunstancias expuestas, y los hechos invocados en esta fundamentación solicito a mis pares se sirvan acompañar este Proyecto

22. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO TOMAS

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Por la presente vengo a expresar mi aprobación al proyecto que nos convoca. La Argentina debe controlar la explotación de sus recursos naturales, sin ceder una indebida medida de participación a los extranjeros. Tal es una demanda de cualquier país que tenga pretensiones soberanas; ese, afortunadamente, es el caso argentino. Consiguientemente, apoyo firmemente la recuperación del control de YPF. Si bien la recuperación de YPF por parte del Estado argentino es un tema capital, no nos podemos detener allí.

En ese orden de ideas, quiero resaltar la vital trascendencia del primer título del proyecto.

Por un lado, no puedo dejar de realzar la declaración de interés público nacional del autoabastecimiento, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. Así, toda la actividad hidrocarburífera quedará positivamente vinculada al interés colectivo.

De esta manera, no sólo YPF responderá a prioridades públicas sino también todas las empresas productoras, refinadoras, transportistas y comercializadoras.

En el nuevo marco legal, la puesta en producción de todas las áreas concesionadas, el aumento de capacidad de las refinerías y la extensión de los gasoductos, estarán orientados a la inclusión social y a la promoción de la industrialización. Esto avala una mayor injerencia estatal, que podrá transformarse en regulaciones de tarifas, implementaciones de políticas de stock de crudo y otros pormenores que hacen a la actividad hidrocarburífera total, para así solventar la calidad de producción y de vida de los argentinos.

Un país sin recursos no puede alcanzar el progreso material. Progreso que a su vez va de la mano del aumento de la industrialización nacional, la aceleración de la dinámica del



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

mercado interno y, por último, de un mayor volumen de exportaciones y más protagonismo en la competencia del comercio internacional. Paradójicamente, todo esto fue percibido en buena parte por nuestro Sarmiento cuando escribió su pretendida obra utópica Argirópolis. Pero él sabía bien a qué apuntaba. Por eso, no se detenía en el crecimiento exponencial del mercado interno, sino que decía que todo progreso material es vacío sino garantizan pautas democráticas, en ámbito de libertad e igualdad. Y, por sobre todas las cosas, realzaba la importancia de derechos sociales, como la educación. Así, un Estado únicamente puede perseguir un aumento de producción mirando los derechos de sus ciudadanos. Y eso hace este proyecto, en particular el artículo 1°), cuando declara el interés público y también reconoce expresamente los siguientes fines: 1°) garantizar el desarrollo económico con equidad social; 2) creación de empleo; 3) incremento de competitividad de todos los sectores económicos y 4) el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y de las regiones. Ahora, entonces, se consagra explícitamente la sujeción de los hidrocarburos a la faz social, por ejemplo, promoviendo la creación de empleos y el pago de salarios. No será sencillo complementar los intereses en juego. Lo importante, en todo caso, es que cuando se busque la maximización de inversiones y recursos, la incorporación de nuevas tecnologías y la sustentabilidad de la explotación hidrocarburífera, se tenga siempre claro que todo eso se hace para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Asimismo, para que la equidad social acompañe todo desarrollo material y económico. Por todo lo expresado, acompaño la iniciativa. Estamos ante una oportunidad única para todo el pueblo argentino. De hecho, quizá no sería impropio aprovechar la ocasión y pensar en un nuevo régimen legal que regule el rol y los límites del Estado nacional y de las provincias, por mencionar un punto. Y así también, robustecer los ejes de la equidad social, la promoción económica nacional y el desarrollo sustentable.

23. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA YAGÜE

Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A.

Vengo de una provincia en la cual los recursos energéticos no renovables son un pilar fundamental de la economía y de la vida cotidiana de la sociedad.

Vengo de una provincia que es de nuestro país la primera productora de gas y la segunda de petróleo, siendo estos los principales recursos de los cuales se nutre nuestra



H. Cámara de Diputados de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección de Información Parlamentaria

economía provincial.

Vengo de un partido, la Unión Cívica Radical, que históricamente ha levantado la bandera de la propiedad estatal de los recursos estratégicos. Debemos hacer historia. Creamos y defendimos YPF. El gobierno de Arturo Illia fue mucho más audaz en esta materia que el de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, ya que el radicalismo anuló todos los contratos firmados por el presidente Arturo Frondizi y no fuimos contra Repsol, defendido por el gobierno de España, sino que fuimos contra las “Siete hermanas” (Standard Oil de New Jersey, Shell, Anglo-Iranian Oil Company, Standard Oil of New York, Standard Oil of California, Gulf Oil Corporation y Texaco), protegidas por los Estados Unidos y el Reino Unido.

Se ha instalado en la sociedad la disyuntiva entre “estatización” y “privatización”, cosa que no está en discusión, ya que jamás YPF debió pasar a manos privadas como sucedió en 1992. Sin ninguna duda, aquel proceso no fue efectivo en el sentido de una transformación que llevara a los habitantes de las provincias productoras o a la sociedad argentina en general a una mejoría en su calidad de vida. En ese entonces, la empresa prescindió de unos 50.000 trabajadores en todo el país. Asimismo, tengo certezas que me permiten asegurar que se trató de una de las decisiones más nefastas para mi región, como la desoladora desocupación generada a partir de ese momento, la profunda crisis socioeconómica sufrida en Cutral C6 y Plaza Huincul y la literal desaparición de Catriel, entre otros ejemplos.

Más de dos décadas después del proceso privatizador iniciado por Carlos Menem, la presidente Cristina Fernández de Kirchner impulsa la recuperación por parte del Estado del manejo de YPF, mediante la expropiación del 51 por ciento de las acciones que estaban en manos de Repsol.

Sin duda alguna, desde 2003 hubo una política energética equivocada, culpas compartidas entre el Estado y Repsol, y asimismo debo alertar a nuestra sociedad de que pasarán años hasta que logremos volver al autoabastecimiento. Y mientras tanto, ¿de dónde saldrán los fondos para seguir importando gas y petróleo? Y en forma simultánea, ¿cómo reconstruiremos entre todos una política energética nacional sustentable a largo plazo?

Me quedan varias preguntas y me permito plantearlas. Quiero saber claramente si el pago de regalías se mantendrá bajo el régimen actual. También me pregunto en qué situación quedará la Empresa de Gas y Petróleo de Neuquén, cuando la provincia deje de tener el control sobre los pozos. Además, me cuestiono cómo se repartirá ese 49 por ciento entre los estados productores de hidrocarburos, en qué parte figuran las dos terceras partes de los votos necesarios para enajenar las acciones y cómo se hará para trabajar sobre los pasivos ambientales.

En definitiva, creo que quedan muchos cabos sueltos en esta cuestión, y una pregunta que no puedo dejar de hacerme: ¿por qué no se hizo antes?

Deseo fervientemente que este traspaso sea exitoso. Y porque estoy a favor, como la gran mayoría de los argentinos, de que YPF vuelva a estar en manos del Estado, es que esta diputada va a acompañar con su voto positivo la postura de su partido.